
Akal Pensamiento crítico
DISPUTAR LA DEMOCRACIA
POLÍTICA PARA TIEMPOS DE CRISIS
Pablo Iglesias
Prólogo
Alexis Tsipras


Akal Pensamiento crítico
DISPUTAR LA DEMOCRACIA
POLÍTICA PARA TIEMPOS DE CRISIS
Pablo Iglesias
Prólogo
Alexis Tsipras

Akal / Pensamiento crítico / 29

Pablo Iglesias Turrión

Disputar la democracia

Política para tiempos de crisis



El objetivo inicial de este libro era dar a conocer las reflexiones políticas de un profesor universitario que se había hecho un hueco, como comentarista político, en algunas televisiones. Aquellas reflexiones quizá tuvieran algún interés en su momento, pero ahora son las reflexiones del portavoz de una fuerza política que todas las encuestas sitúan ya como la tercera (si no segunda) fuerza política en España. El libro tiene la frescura de quien escribía sin concesiones y servirá para dar a conocer mi manera de ver muchos asuntos sin los matices que impone la responsabilidad política, al tiempo que permitirá a los lectores conocer una parte de ese futuro anterior de PODEMOS. Por eso este libro es tan particular. Ni mis reflexiones en él ni el estilo con el que está escrito están condicionados por ninguna responsabilidad política equivalente a la que tengo ahora. He ahí su valor y su carácter excepcional.

Este libro sale ahora porque estaba escrito y porque me comprometí a que saliera. En ningún caso responde a necesidades políticas del presente. Sean bienvenidos a él todos los lectores pero, en especial, los que desde hace meses se afanan en buscarme las cosquillas. Pues aquí me tienen, dispuesto al duelo en el O.K. Corral con mi última sonrisa de *enfant terrible.* Aprovéchense, porque no podré darles muchas más oportunidades.

Pablo Iglesias

Pablo Iglesias Turrión es doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense, en la que impartió clases desde 2008 hasta que tomó posesión como eurodiputado en 2014. Durante su etapa doctoral fue investigador en varias universidades europeas y americanas. Licenciado en Derecho y Ciencia Política (con premio extraordinario), amplió su formación obteniendo un máster en Humanidades por la Universidad Carlos III y otro en Comunicación por el European Graduate School, donde fue alumno de Slavoj Žižek y Giorgio Agamben entre otros. En 2010 comenzó a dirigir y presentar el programa de debate político *La Tuerka* y desde 2013 hizo lo mismo con el programa *Fort Apache.* Desde abril de aquel año empezó a colaborar como analista con algunos programas de televisión como *Las Mañanas Cuatro* y *La Sexta Noche.* En enero de 2014 contribuyó a la creación de PODEMOS, cuya candidatura a las elecciones europeas encabezó obteniendo 1,2 millones de votos y 5 escaños en mayo del mismo año. Es autor y coordinador de varios libros entre los que destacan *Ganar o Morir. Lecciones políticas en «Juego de Tronos»* (2014), *Maquiavelo frente a la gran pantalla. Cine y política* (2013) o *Desobedientes. De Chiapas a Madrid* (2011).

Diseño de portada
RAG

Fotografía de portada
Sarah Bienzobas

Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.

Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.

Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.

© Pablo Iglesias Turrión, 2014

© Ediciones Akal, S. A., 2014

Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España

Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028

www.akal.com

ISBN: 978-84-460-4022-4



A mi padre, por enseñarme –como decía Carlo Levi– que el futuro tiene un corazón antiguo

PRÓLOGO
HA LLEGADO EL MOMENTO DE CAMBIAR EL MUNDO

(Alexis Tsipras)

Cuando, a comienzos de los años noventa, los mercados se encontraron a todo el mundo postrado a sus pies, dispusieron una gran mesa e invitaron a todos al festín. De los millones de comensales, muy pocos comprendieron que el menú les incluía a ellos mismos. Sus trabajos, sus pensiones, su asistencia médica: su dignidad, su futuro.

Entonces llegó la gran crisis. Los mercados y los bancos lograron que los Estados pagaran la cuenta, y los Estados se la pasaron al pueblo. Hoy, el sistema de poder político y económico ya no pide que nos sacrifiquemos en aras de una prosperidad futura. Nos pide que nos sacrifiquemos para poder sobrevivir. Para que él sobreviva.

Sin embargo, los cambios traumáticos que se han sucedido desde 2008 han despertado a la gente de la apatía con la que contemplaban la política. Y en lugar de apatía ahora hay rabia, indignación, radicalismo y acción. Cada día que pasa hay más gente que se cuenta entre aquellos que sienten que ha llegado el momento decisivo, aquellos que buscan una alternativa y meditan qué hacer para realizarla. Escasean ya quienes se dejan seducir por los lemas y espantajos agitados por los gobiernos y los medios de comunicación dominantes. Hemos llegado a un punto de inflexión: cuando las masas se liberan del «control del pensamiento», la democracia se convierte en sus manos en un arma muy poderosa. Esto es, ciertamente, muy peligroso para el sistema.

La dominación económica y política se basa en estereotipos: nos dicen que «no hay alternativa», y con ello quieren decir: «Nosotros decidimos lo que cuenta como alternativa y lo que no». Nos dicen que «la estabilización de la economía requiere sacrificios por parte de todos», y lo que quieren decir es que «la estabilización de nuestras ganancias necesita de vuestro sacrificio». Nos dicen que «las promesas fáciles y engañosas son una

amenaza para la estabilidad» y con ello nos están diciendo: «La democracia es una amenaza para nuestro poder».

Contra ellos nos alzamos todos nosotros, haciendo frente a aquellos que quieren subyugar a la sociedad mediante la inseguridad y el miedo. Nosotros, que formamos parte de las fuerzas que luchan por la justicia, la dignidad y la vida: el auténtico 99 por 100 de la población. Si algo puede cambiar en este mundo, depende de nosotros. Para eso necesitamos:

– Derrotar al miedo: el miedo es su arma más poderosa. La esperanza y la determinación son las nuestras.
– Promover los principios de justicia, sentido común y solidaridad, contra el muro de lo inconcebible.
– Ser conscientes de nuestra fortaleza: podemos encontrarla en la unidad, en la acción constante, en las luchas de masas. El sistema tiembla cuando la gente une sus voces, cuando la desesperación y la inseguridad se convierten en resolución y determinación.
– Afirmar y ejercer la hegemonía: establecer qué es la alternativa y qué no lo es depende del equilibrio de fuerzas y la estabilidad del poder. La austeridad, la recesión, la inmunidad fiscal de los ricos, la actividad sin cortapisas de especuladores y usureros bajo el nombre de «mercados», no son mandamientos grabados en piedra. Si hasta ahora se han considerado inviolables es porque habíamos aceptado la legitimidad de las fuerzas económicas por encima de nuestras vidas. Hoy en día toda lucha social debe desafiar la estabilidad del poder.
– Ser más fuertes que los mercados. Existe una alternativa. Debemos tener la fuerza para llevarla a cabo.
– Defender la democracia. Promover una participación mayor y más activa del pueblo en la toma de decisiones que le afectan, en todos los niveles. Tanto a través de las instituciones existentes como mediante la creación de nuevas instituciones. Utilizar cada oportunidad que la democracia nos ofrece para lograr el gran cambio que necesitamos: darle la vuelta a la economía y ponerla al servicio de la sociedad y las necesidades humanas.

La crisis y la catastrófica austeridad están llevando a Europa a un callejón sin salida. Los actores hasta ahora dominantes no dudarán en devolvernos a

una nueva edad de piedra con tal de proteger sus intereses. Pero no les haremos el favor de quedarnos asustados, pasivos. La respuesta la darán las fuerzas que realmente están defendiendo a la sociedad: aportando a la lucha esperanza, un plan y una visión.

Somos muchos y cada día somos más. La historia está aquí y nos espera. No dejemos de mirarla a los ojos.

Atenas, septiembre de 2014

PODEMOS: FUTURO ANTERIOR

El grueso de este libro terminó de escribirse a finales del verano de 2013. Entonces PODEMOS era apenas una vaga hipótesis sin nombre que se me presentaba aún muy improbable en los términos en los que finalmente ha sacudido todo. El proyecto que está conmoviendo la vida política de nuestro país y que ha cambiado las vidas de los que nos embarcamos en él, no era hace un año más que un conjunto de conversaciones y reflexiones entre algunos compañeros. Queríamos pasar a la acción, pero no calculamos entonces la dimensión que iba a adquirir lo que estábamos empezando a armar.

Acabado el verano, ante las obligaciones del nuevo curso, planifiqué cerrar el libro aprovechando las vacaciones de Navidad. No hacía mucho que se habían publicado dos libros míos sobre cine y política, y acababa de salir *Abajo el Régimen*, una conversación política con Nega, vocalista de *Los Chikos del Maíz.* No tenía sentido darse demasiada prisa en acabarlo.

Pero cuando llegaron las Navidades ya había comenzado la vorágine que nos llevaría a esos días de enero que desencadenaron todo. A partir de ahí, se me hizo del todo imposible encontrar el tiempo para cerrar el libro; además de ocuparme de la campaña y de seguir apareciendo en los medios, tenía que atender mis clases en la facultad y dirigir *La Tuerka* y *Fort Apache.*

Mi compromiso con el editor me obliga ahora a revisitar, revisar y completar el manuscrito original.

Lo releo ahora y descubro que su significado ha cambiado por completo. Su objetivo inicial era dar a conocer las reflexiones políticas de un profesor universitario de izquierdas y director de dos programas de televisión de alcance muy limitado que se había hecho un hueco desde hacía pocos meses, como comentarista político, en algunas televisiones importantes. Aquellas reflexiones quizá tuvieran algún interés (limitado a ámbitos muy concretos) en su momento, pero ahora son las reflexiones del portavoz de una fuerza política que consiguió 1,2 millones de votos en las elecciones europeas de mayo y que todas las encuestas sitúan ya como la tercera fuerza política en España. Soy consciente de ello y les confieso que no lo llevo del todo bien cuando me tengo que poner a escribir.

PODEMOS ha estado marcado en sus primeros meses de vida por su vinculación con mi protagonismo mediático, hasta el punto de que el equipo de campaña optó por usar mi cara en las papeletas electorales, lo que nos granjeó muchas críticas (justas en muchos casos) pero que, a la vista de los resultados, se reveló como un acierto y un indicador claro de nuestro estilo político; un estilo que, provocadoramente, podría resumirse en el lema: «Si quieres acertar, no hagas lo que la izquierda haría».

Aunque mi exposición a los focos sigue siendo enorme, esa necesidad inicial de vincular nuestra fuerza política a una cara y a una voz se ha superado: cada vez son más los portavoces de PODEMOS que demuestran en los medios la solidez del proyecto. Por otro lado, nuestro crecimiento y consolidación organizativa aseguran un futuro de protagonismo colectivo mucho más deseable y razonable. A veces los periodistas me preguntan dónde me gustaría verme en unos años. Siempre respondo que dando clases, pero debería añadir que, de tener responsabilidades políticas, me gustaría verme en una posición de trabajo no tan expuesta a los focos, entre otras cosas para poder escribir libros como este. Y es que la alegría y la esperanza por el éxito político de PODEMOS y las perspectivas de cambio que ha abierto en nuestro país son, sin embargo, inversamente proporcionales a la sensación que me queda como «ensayista». Escribir ya no puede ser solo el fruto de mi modesto trabajo como politólogo, y mucho menos la expresión de una rebeldía que siempre he tratado de proyectar con un estilo que quería ser riguroso pero, a un tiempo, provocador e irreverente. Ahora cada cosa que escribo se mira con lupa. Incluso mis compañeros más cercanos, que me conocen bien, se ven obligados de vez en cuando a torcerme el gesto y recordarme, con una mezcla de ironía y gravedad, que ya no puedo ser más *l'enfant terrible* de antaño.

Por suerte la política internacional y su historia, por su propia naturaleza descarnada, permiten más licencias y creo que, aprovechando la ingente carga de trabajo que me espera en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, dirigiré en el futuro inmediato mi trabajo de estudio hacia esas áreas.

Pero ahora toca hablar de este libro. Lo releo y descubro elementos que hoy me llaman la atención. Está muy lejos de ser una obra intelectualmente valiosa, pero tiene la frescura de quien escribía sin concesiones y servirá, sin duda, para dar a conocer mi manera de ver muchos asuntos sin los

matices que impone la responsabilidad política, al tiempo que permitirá a los lectores conocer una parte de ese futuro anterior de PODEMOS.

Escribía Santos Juliá –en las páginas del diario *El País* a finales de julio de este mismo año–, con el encantador rencor de los conversos, a propósito de la conversación que mantuve con el periodista Jacobo Rivero y que fue publicada recientemente, que mis «respuestas [daban] la impresión de haber sido revisadas antes de darlas a la imprenta. Estamos, pues, ante el auténtico pensamiento del primer responsable del fenómeno político más resonante de los últimos años». Se cree el ladrón que todos son de su condición. No modifiqué ni un ápice la transcripción que me envió Jacobo de aquella conversación; si hubo modificaciones, fueron las del corrector técnico, que adaptó una conversación a un texto escrito. Los contenidos quedaron intactos. Sin embargo, en una cosa sí acierta el historiador; allí hablaba como responsable político de PODEMOS. Aquí no.

Por eso este libro es tan particular. Ni mis reflexiones en él, ni el estilo con el que está escrito, están condicionados por ninguna responsabilidad política equivalente a la que tengo ahora. He ahí su valor y su carácter excepcional. Este libro sale ahora porque estaba escrito y porque me comprometí a que saliera. En ningún caso responde a necesidades políticas del presente.

Sean bienvenidos a él todos los lectores pero, en especial, los que desde hace meses se afanan en buscarme las cosquillas. Pues aquí me tienen, dispuesto al duelo en el O.K. Corral con mi última sonrisa de *enfant terrible.* Aprovéchense, porque no podré darles muchas más oportunidades.

Valle del Tiétar, agosto de 2014

POR QUÉ DEBEMOS DISPUTAR LA DEMOCRACIA

En su discurso ante la Convención Nacional el 7 de febrero de 1794, Maximilien Robespierre dijo que «la democracia es un Estado en el que el pueblo soberano, guiado por leyes que son el fruto de su obra, actúa por sí mismo siempre que le es posible, y por sus delegados cuando no puede obrar por sí mismo». Más de dos mil años antes los atenienses habían unido los términos *demos* (pueblo) y *krátos* (poder o gobierno), definiendo un régimen político diferente de la monarquía (el gobierno de uno) y de la aristocracia (el gobierno de unos pocos). Por eso podemos decir que la democracia es el movimiento dirigido a arrebatar el poder a quienes lo acaparan (el monarca o las élites) para repartirlo entre el pueblo que es el llamado a ejercerlo por sí mismo o por sus delegados.

Ese movimiento socializador del poder está en el espíritu de las revoluciones modernas y en las luchas por la extensión del sufragio. La Revolución francesa arrebató el poder a los nobles y al rey para entregárselo al Tercer Estado. De allí surgieron las nociones políticas *derecha* (los defensores de los privilegios) e *izquierda* (los que ponían la soberanía nacional por encima de cualquier otro poder). Los *sans-culottes* y Robespierre quisieron ir más allá y los *cordeliers* (el pueblo llano), con Marat y Danton a la cabeza, lucharon por la instauración del sufragio universal masculino contra los girondinos, defensores del sufragio censitario y los privilegios.

Aquel proceso revolucionario de socialización del poder instauraba una nueva época de la que tanto los liberales como los socialistas son hijos. La revolución, de hecho, inauguró las bases ideológicas de la política moderna; la igualdad, la libertad y la fraternidad.

El desarrollo de los acontecimientos terminó convirtiendo la igualdad en un derecho puramente formal, al tiempo que se constitucionalizaban las relaciones materiales derivadas de la propiedad privada. En Haití, los jacobinos negros demostraron ser los mejores representantes de la tradición democrática de la revolución, derrotando por un tiempo a las potencias esclavistas de la época y siendo condenados por ello a la represión y a la

pobreza, el lugar que los defensores de los privilegios siempre reservan a los revolucionarios cuando consiguen vencerles.

Después llegaron el movimiento obrero y el socialismo (el más democrático de los movimientos), que lucharon y lograron la extensión del derecho al voto y de los derechos sociales. Llegaron también las revoluciones anticoloniales, que desafiaron el racismo europeo e impusieron la idea de nación como máxima expresión de la soberanía popular.

Hay que decirlo claramente: la lucha democrática ha sido siempre el proceso de socialización del poder. En ese proceso, los socialistas y sus diferentes tradiciones asumieron una noción de Estado como consejo de administración de la clase económicamente dominante (los menos), frente al poder de las clases subalternas (los más). Solo el ejercicio del poder de los más podía destruir la relación de asimetría entre las clases y remover así las bases materiales de la desigualdad. Pero es indudable que, en la mayor parte de los casos, la llamada dictadura del pueblo encarnado por el proletariado se convirtió en el gobierno de un partido y, finalmente, en el gobierno de las élites de ese partido, prestas a entregarse al mejor comprador como demostraron buena parte de las biografías de los burócratas del Este, reconvertidos en prósperos hombres de negocios y líderes de las transiciones a sistemas ultraliberales. Pero el fracaso y los horrores de las experiencias del socialismo real no difuminan los horrores de las experiencias defensoras de distintas formas de capitalismo, desde los crímenes pasados y presentes del colonialismo, pasando por los fascismos europeos, las bombas nucleares y el napalm contra civiles por parte de los EEUU, hasta el totalitarismo del libre mercado patrocinador de golpes de Estado y responsable de la situación de pobreza que padece la mayoría de la humanidad, y de la degradación del medio ambiente hasta límites insostenibles.

Los avances sociales se han abierto paso entre el horror que ha procedido de diferentes fuentes, pero a día de hoy sigue siendo innegable el significado de la tensión socialista como movimiento de avance social de la democracia y los derechos humanos.

Sin embargo, los que acaparan el poder, sus intelectuales y su casta política insisten en decir que la democracia es solamente un procedimiento de selección entre élites para ejercer el control de la administración. Para

ellos, basta con que pueda elegirse entre el partido A y el partido B para que haya democracia. La noción de democracia limitada y tutelada de los poderosos no es nueva, y si aceptan incluso la palabra es porque no les quedó más remedio que hacerlo.

La presión democrática ejercida por los movimientos socialistas y los de liberación nacional hizo recular a los liberales partidarios del sufragio censitario y, finalmente, las constituciones demoliberales sancionaron que la democracia, en tanto que sistema político, es un conjunto de procedimientos que garantizan la elección por sufragio universal de élites cada cierto tiempo, la división de poderes, la primacía del derecho de propiedad sobre los derechos sociales y la garantía de ciertas libertades civiles que permiten la existencia de varias opciones electorales.

Sin embargo, los liberales siempre trataron de resistir el avance socializador de la democracia. Sieyès, en sus escritos sobre la revolución, decía que los no propietarios no eran más que una muchedumbre sin libertad ni moralidad. De hecho, todas las tradiciones ilustradas sobre las que se construyeron los edificios constitucionales liberales, se asentaron sobre la propiedad privada como eje jurídico vertebrador de las relaciones entre economía y política. Los padres fundadores en EEUU construyeron un régimen político que se basaba en la protección de los intereses de los propietarios de tierras y de esclavos. Ya lo decía John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos: «Desde el momento en el que se instala la idea de que la propiedad no es tan sagrada como las leyes de Dios, comienzan la anarquía y la tiranía». Los liberales identificaron siempre al hombre político con el hombre propietario. En el fondo lo siguen haciendo; para los liberales puros, la libertad es aquello que permite a los ricos ejercer su poder coactivo sobre el resto sin ningún tipo de control.

Limitar la democracia al derecho a votar a diferentes partidos, aunque en términos históricos represente un notable avance, es del todo inaceptable para los que somos demócratas y, por ello, debemos combatir toda noción mínima de democracia. Que se pueda votar es importante, pero no es suficiente. Para que haya democracia es necesario que los más tengan el poder, y que desaparezcan los privilegios de los menos. Cuando los privilegios se democratizan, se convierten en los derechos que son la base de la libertad. Por eso quien ataca los derechos civiles y los derechos sociales ataca la democracia. Por eso quien convierte el derecho a la

asistencia sanitaria, a recibir educación, a percibir una pensión de jubilación o invalidez, o a trabajar en condiciones dignas, en privilegios a los que solo pueden acceder unos pocos, está atacando la democracia.

Tras la extensión del sufragio lograda por el movimiento obrero, la derrota de los fascismos y las victorias de los movimientos de liberación nacional, la democracia se convirtió en el concepto político más valorado. Cualquier régimen político independientemente de sus características, cualquier partido independientemente de su ideología, cualquier movimiento social independientemente de sus propósitos, reivindican la democracia como elemento propio. Pero la democracia no es, ni mucho menos, un significante vacío, un mínimo común denominador de la retórica de todo actor político, ni tampoco un conjunto de procedimientos para la selección de élites. La democracia, por el contrario, solo puede ser una característica de la organización y la distribución del poder.

En las últimas décadas se ha producido una contrarrevolución que ha convertido los sistemas demoliberales en una caricatura de sí mismos. La transferencia de poder soberano (militar, económico, jurídico…) desde los llamados Estados nacionales hacia las agencias supranacionales de ejercicio del poder (la Troika, el G8, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OTAN, las grandes corporaciones privadas, las agencias de calificación…) ha vaciado de poder a la institución política fundamental sobre la que se suponía que debía ejercerse el control democrático: el Estado.

La crisis, sobre la que nos detendremos después, no ha hecho sino acelerar esa contrarrevolución de los menos en su lucha contra los más.

Por eso es fundamental reivindicar la democracia como eje de la lucha política de los que aspiran a una sociedad más justa. Este libro quiere ser eso; una modesta caja de herramientas para la praxis política de los que luchan por una sociedad decente, un compendio de argumentos y de técnicas de combate para una pelea por explicar la realidad en la que no tiene ningún sentido buscar un discurso que nos sitúe siempre a la izquierda del resto, sino el que nos sirva para ser el referente y los defensores de la democracia.

MUNICIÓN POLÍTICA PARA TIEMPOS DE CRISIS

En una intervención telefónica en el programa número 100 de *La Tuerka*[1], Íñigo Errejón dijo que si algo habíamos conseguido con el programa era repartir munición política para los combates cotidianos de la gente por su libertad. Esa ha sido, sin duda, nuestra mejor aportación. Gracias a *La Tuerka* muchos argumentos e ideas calificados durante años como demasiado radicales por las élites mediáticas, políticas y académicas, empezaron a normalizarse en la discusión política. Por primera vez, a pesar de todas las dificultades y límites, la izquierda hablaba desde su propio programa de debate y, lo que es más importante, desde muy pronto intentaba no hablarse solamente a sí misma.

El contexto, sin duda, facilitó nuestro trabajo. La crisis estaba empezando a golpear buena parte de los consensos políticos dominantes y la irrupción de una gran marea de indignación pedía a gritos armas para combatir en el terreno de la ideología. Nuestro programa, poco a poco y con un estilo propio, fue poniendo en circulación argumentos que servían a la gente, indignada con la situación, para discutir en su trabajo, en el bar, en la facultad o en cualquier parte. Pero, sobre todo, nuestros argumentos ampliaban su campo de acción más allá de los sectores más ideologizados y comprometidos, llegando a cada vez más gente. Muchos, incluso sin identificarse del todo con nuestras ideas, fueron asumiendo nuestras razones y nuestro estilo como instrumentos para la crítica de la realidad y para el cambio.

Nuestra sensación, como creadores de un nuevo estilo de comunicación política, era de enorme satisfacción. Para los que además nos dedicábamos profesionalmente a pensar, en tanto que profesores e investigadores universitarios o independientes, el éxito de *La Tuerka* nos daba la íntima felicidad de que nuestro modesto trabajo no fuera solo un medio para cualificar un currículum académico sin ningún tipo de impacto fuera de la universidad, sino una devolución a la sociedad de lo que habíamos recibido de ella para poder formarnos. Como explica con sabia mala uva uno de los mejores historiadores españoles vivos, Josep Fontana, la mayor parte de los artículos académicos no son citados ni una sola vez y están concebidos para

la supervivencia laboral en el mundo académico de sus autores, que, en muchos casos, ni siquiera esperan que alguien los lea. Nosotros queríamos que nuestro trabajo intelectual trascendiera los límites académicos y *La Tuerka* nos lo permitió.

Por otra parte, dedicarte a las ciencias sociales, si además cuentas con el privilegio de recibir un salario o una beca por ello, te permite en general tener una cierta ventaja para entender algunas claves de la situación económica y política, del mismo modo que un bombero sabe mejor que el resto de las personas cómo apagar un fuego (y también cómo encenderlo). El problema es que, mientras que nadie duda de la utilidad de los bomberos, no puede decirse lo mismo de la de los profesionales de pensar la política. La frustración que sentíamos era enorme; carentes de intelectual orgánico (eso que Gramsci llamaba el partido y que es mucho más que una estructura administrativa para presentarse a las elecciones), estábamos atrapados por unos muros académicos que nos separaban de la sociedad y por una izquierda, la nuestra, muy debilitada por enfermedades infantiles y seniles. Ello se veía agravado por nuestra plena consciencia de que en los medios de comunicación se jugaban las principales batallas político-ideológicas y que ahí nosotros, de momento, no pintábamos nada. *La Tuerka* nos sirvió para poder pelear también en ese terreno, con enormes dificultades y precariedades, pero con un alcance que desde los primeros momentos no paró de crecer.

Poco a poco fuimos creciendo y mejorando, y finalmente nuestro discurso se abrió un hueco incluso en los grandes medios privados que comprobaron que nuestras ideas, y la forma de plantearlas y defenderlas, elevaban sus audiencias. Que a través de la televisión y de Internet la gente pueda escuchar a Ada Colau, a Alberto Garzón, a Xosé Manuel Beiras, a David Fernández, a Diego Cañamero o a los analistas de *La Tuerka* tiene mucha importancia en la batalla de las ideas. Aunque el escenario mediático plantea contradicciones que hay que cabalgar asumiendo muchos riesgos, la de los medios es una guerra con reglas propias en la que es necesario disputar la hegemonía en el terreno de la ideas.

Aparecer regularmente en algunos de los programas de debate político más seguidos del país me hizo tomar conciencia de hasta qué punto la gente con más conciencia crítica (que cada vez son más) estaba necesitada de argumentos, de explicaciones, de ideas que le sirvieran para entender el

mundo en el que vive, para reafirmarse en su indignación, para poder confrontar y para sentirse partícipe de una comunidad que aspira a cambiar las cosas. Cuando la gente me para en un bar, en el aparcamiento de un supermercado o en plena calle para agradecerme que me enfrente a los opinadores hasta hace poco dominantes en los medios, cuando me dicen que he puesto palabras a lo que ellos piensan o que he dicho lo que siempre quisieron decir, tengo la sensación de que estamos haciendo algo muy importante.

El término «casta», que señala a los ladrones que construyen dispositivos políticos para robar la democracia a la gente, se ha impuesto en el lenguaje político español y hoy celebramos la patética imagen de los artífices políticos de la crisis diciendo, con lágrimas de cocodrilo, «yo no soy casta».

Este libro, desde su modestia como conjunto de apuntes de intención divulgativa, quiere ser una continuación de ese trabajo de producción de munición política para la gente. En él recojo, ordeno y reformulo reflexiones que han ido apareciendo en *La Tuerka* y *Fort Apache*, en discusiones con compañeros y amigos, en debates en las trincheras enemigas y no tan enemigas, así como en artículos y monólogos introductorios a mis programas de los últimos años. Consta de cuatro partes en las que trato de reflexionar sobre algunas nociones políticas, sobre la historia de nuestro país y sobre la situación de crisis económica que ha provocado lo que juzgo una crisis de régimen.

Dice Slavoj Žižek que «hoy, la ideología dominante se esfuerza en hacernos aceptar la imposibilidad de un cambio radical, de una democracia no restringida a un juego parlamentario». *Disputar la democracia* quiere ser una aportación a combatir la ideología de los que niegan la posibilidad del cambio político.

[1] Programa de debate político y social emitido originalmente en el Canal 33 y emitido en la actualidad por Público TV.

I
POLÍTICA
El pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad

INTRODUCCIÓN

En este capítulo presento una serie de reflexiones sobre la política, entendida como disciplina que estudia el poder, su ejercicio y la forma de mantenerlo. Asumo aquí la noción de política inaugurada por Maquiavelo en *El Príncipe* como *arte* o *técnica* de Estado, y me alejo de la noción aristotélica y sus derivaciones que la asocian, como también hacía el propio Maquiavelo en los *Discursos sobre la primera década de Tito Livio,* al *buen gobierno* o a la *vida civil*. Ambas nociones no son necesariamente contradictorias; simplemente, describen cosas diferentes.

La noción maquiaveliana de política como técnica de Estado alude al *Stato* como se entendía en la Florencia de los Médicis, esto es, como muy bien apunta Joaquín Abellán, como *poder de la política sobre las leyes y las instituciones* en oposición a la idea de *ciudad o república como gobierno de la ley.* Paradójicamente, aunque la idea de política como disciplina del poder se impuso entre los estudiosos de la política, la noción aristotélica es predominante en los discursos de los operadores políticos. Quiere esto decir, básicamente, que jamás *el príncipe* reconocerá en una rueda de prensa que, puestos a elegir, es preferible ser temido a ser amado, ya que los gobernantes temidos son menos susceptibles de ser ofendidos respecto a los que solo son amados. De hecho, una de las principales características de los príncipes contemporáneos es que, asesorados por *consiglieri* que saben más de *marketing* y de publicidad que de política, mienten sistemáticamente cuando se dirigen a los gobernados. Que existan leyes de secretos oficiales y fondos reservados prueba hasta qué punto la mentira es consustancial a los sistemas políticos que se autodenominan democráticos.

Por eso, en este capítulo presento una serie de reflexiones que ilustro con ejemplos de actualidad política nacional e internacional, orientadas no tanto a plantear cuestiones propias de la teoría política sino, más modestamente, a desenmascarar ciertos discursos políticos dominantes y tratar de sentar honestamente las bases de un discurso que, en la tradición de Wilson y

Lenin[1], no mienta a la gente. Con ese espíritu me ocuparé también de explicar nociones como la de hegemonía o el concepto «antisistema» que, para operar en el discurso, habrán de asentarse sobre la maquiavélica base del «pesimismo de la inteligencia» asumido por Antonio Gramsci.

ADVERTENCIA SOBRE ENFERMEDADES INFANTILES

Poco antes de que se celebrara el II Congreso de la Internacional Comunista en 1920, Lenin escribió una de las obras que pasarían a formar parte de las referencias más citadas por el movimiento comunista: *La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo*. El texto, a pesar del contexto tan específico en el que se producía (la Europa posterior a la Primera Guerra Mundial, con una Rusia destruida tras la guerra civil ganada por los bolcheviques), pasó a la historia como una defensa de la flexibilidad táctica frente al sectarismo y el dogmatismo.

Si este Lenin azote de los izquierdistas ha sobrevivido tan bien al paso del tiempo es porque el izquierdismo, magníficamente definido como enfermedad infantil, nunca ha dejado de ser una de las más peligrosas aflicciones de la izquierda.

Siempre han existido los izquierdistas en el sentido que da Lenin al término; defensores de la pureza de los principios, de los símbolos y las fraseologías tendentes a convertir los referentes teóricos en catecismo y casi siempre terriblemente minoritarios y débiles, aislados, incomprendidos e incapaces de confrontar sus principios con la praxis. En nuestro presente, las redes sociales han sobredimensionado su presencia, y les encontramos siempre señalando a revisionistas y reformistas, despreciando la supuesta tibieza de movimientos sociales como el 15M o la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) y amando las estatuas, los retratos o las camisetas de las grandes figuras revolucionarias cuya dimensión compleja en tanto que estadistas, revolucionarios o estudiosos ignoran, al tiempo que les adoran como a santos. Para los profetas solitarios de la pureza revolucionaria, las mareas ciudadanas son serviles al sistema porque no son realmente anticapitalistas. Señalan con tono policiaco y censor a los «traidores», a los que detectan por el lenguaje que utilizan. De este modo, hablar del 99 por 100 o de los de abajo en lugar de hablar del proletariado,

dirigirse a los ciudadanos en lugar de dirigirse al obrero, serían señales inequívocas de desviacionismo para estos guardianes de las verdades reveladas.

Aunque el izquierdismo es una enfermedad que suele superarse con la experiencia política, siempre habrá nuevas camadas de izquierdistas a los que habrá que recordar con paciencia que la política radical, como todo, se mide por sus resultados, y que el mejor indicador del éxito político, sobre todo cuando no se cuenta con más armas que la propaganda y la movilización, es la capacidad de crear contradicciones en el adversario. Eso es precisamente lo que han conseguido movimientos como el 15M o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Sin grandes proclamas revolucionarias, han conseguido que los grandes partidos españoles les tengan miedo. Consiguieron, según datos de varios estudios, que más del 80 por 100 de los españoles pensara que el 15M tenía razón en sus críticas al poder económico y a la clase política, que más del 75 por 100 esté a favor de los escraches de la PAH y que casi el 80 por 100 compartiera los motivos del 25S para «rodear el Congreso». Eso es hacer política radical.

A los erotizados por la mística del enfrentamiento con la policía habría que recordarles que el 15M, pese a haber sido un movimiento social estrictamente pacífico, ha recibido una gran represión; pocas veces se había visto un ciclo de movilización tan pacífico y tan reprimido al mismo tiempo. La delegada de Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha multado en Madrid a más de mil manifestantes en los últimos años, y en un importante porcentaje de las protestas ha habido cargas policiales contra manos levantadas.

Sin embargo, el gobierno teme a estos movimientos y prueba de ello es cómo recula ante sus demandas. Cada gesto, cada guiño de la casta política, desde la llamada Ley de Transparencia hasta las tímidas rebajas de los sueldos de algunos políticos de los grandes partidos, pasando por la reforma de la ley que regula las participaciones preferentes, han sido consecuencia directa de esos movimientos no suficientemente radicales para algunos. Es cierto que solo se trata de guiños de los poderosos, pero ¿alguien cree que, sin un movimiento masivo de protesta contra la gestión de la crisis, el rey cazador de elefantes habría devuelto su yate? La tan reformista Plataforma de Afectados por la Hipoteca hizo más por demostrar los límites de los canales institucionales que todos los que alguna vez corearon «la lucha está

en la calle y no en el Parlamento». El rechazo por parte del Partido Popular (PP) a la aprobación de una Iniciativa Legislativa Popular que contó con el apoyo de un millón y medio de ciudadanos (con cuestiones tales como la dación en pago, la paralización de los desahucios o el alquiler social universal) no pudo evitar que se tuviera que discutir, y dejó al descubierto las vergüenzas del Parlamento. Aquello fue una demostración de que los medios institucionales para canalizar las demandas de la ciudadanía están bloqueados y, con ello, abrió una puerta a la legitimidad de la desobediencia y los escraches (que han llegado más lejos a la hora de encarar al adversario de lo que han llegado buena parte de los izquierdistas). El debate de la Iniciativa Legislativa Popular, además, no solo mostró los límites de las instituciones, sino que sirvió también para que muchos entendieran la necesidad de ver a gente como Ada Colau en el Parlamento. La PAH consiguió que Soraya Sáenz de Santamaría, la dama de hierro de la derecha española, llorara lágrimas de cocodrilo ante las cámaras («le puede pasar a cualquiera», dijo sobre los desahucios) y, sobre todo, consiguió que una mayoría de ciudadanos les diera la razón cuando llamaron, en sede parlamentaria, criminales a las entidades financieras.

Por eso es importante recordar que la radicalidad en política no se mide por los principios o por lo encendido de los discursos, sino por la radicalidad de los resultados.

Advertencia sobre enfermedades seniles

En 1968 el líder estudiantil Daniel Cohn-Bendit y su hermano Gabriel publicaron *El izquierdismo, remedio a la enfermedad senil del comunismo,* un provocador manifiesto que, sin estar al nivel de la obra de Lenin que tomaba como referencia, criticaba, a veces con buenas razones, el comportamiento conservador del Partido Comunista Francés hacia la protesta estudiantil que se extendía a otros sectores de la sociedad francesa. No es que la revolución estuviera, ni mucho menos, a la vuelta de la esquina –como demostraron tanto De Gaulle afirmando su poder militar, como la reaccionaria mayoría silenciosa que llenó las calles de París, y desde luego la biografía de Cohn-Bendit, que, como la historia de los verdes alemanes, es un ejemplo de transformismo e indignidad–, pero aquel

68 parisino puso a la izquierda francesa frente a un espejo que le devolvía la imagen de los límites del exceso de responsabilidad de Estado.

Cualquiera que haya militado en un partido de izquierdas sabe que las lógicas internas pueden imponerse y ocupar buena parte del tiempo de la militancia. Congresos, asambleas, reuniones, conspiraciones, listas, pactos, conversaciones de pasillo y llamadas telefónicas que alejan a los militantes de la sociedad y les conducen a una praxis cotidiana que adquiere vida y lógica propias, y que poco tiene que ver con enfrentar al adversario. Es indudable que lo que Manuel Vázquez Montalbán llamaba agudamente *saber administrativo* en su *Panfleto desde el planeta de los simios* es ineludible para hacer política, pero en tiempos que requieren de audacia, un excesivo peso de la vida interna condiciona que los aparatos puedan responder a lógicas y dinámicas que no siempre tienen que ver con las necesidades políticas. Ello empuja hacia formas seniles, absurdamente prudentes y conservadoras de hacer política.

En tiempos como los actuales, el conservadurismo de izquierdas, que se niega a asumir que se está produciendo una crisis de régimen y que asume como único espacio político el que deja a su izquierda la socialdemocracia, ignora las posibilidades de un presente excepcional. En España, basta observar el comportamiento de los partidos de régimen para percatarse de lo que está ocurriendo; el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) propone pactos de Estado al Partido Popular cada vez que tiene ocasión, y la propia derecha se ha visto obligada a nacionalizar bancos y a asistir a la inédita indisciplina de sus familias (neoliberales, nacionalcatólicos o franquistas sin matices), indisciplina que sale a la luz al tiempo que los puñales dejan lucir el brillo de sus hojas en los despachos de la calle Génova cuando no se puede controlar a todos los jueces y no hay suficiente dinero para pagar todos los sobornos.

Como dicen Antonio Negri y Michael Hardt: «Hemos llegado al punto, un tanto paradójico, en el que solo los movimientos populistas como el Tea Party, la Lega Nord u otros, plantean el problema de la transformación o de la reforma de la Constitución […] la izquierda institucional no consigue hoy comprender la profundidad de la crisis de la representación».

Manolo Monereo, dirigente histórico del Partido Comunista de España (PCE) e Izquierda Unida, apuntaba con su lucidez habitual en una comida entre amigos que hay que entender que la política revolucionaria, en

tiempos de crisis, implica asumir la necesidad de apuntar a los ricos diciendo: «Estos son los enemigos del pueblo». El problema es que esa forma popular y rupturista de la política no fue, históricamente, patrimonio únicamente de la izquierda revolucionaria (de Lenin a Rosa Luxemburgo, pasando por buena parte de la experiencia del antifascismo y de las luchas de liberación nacional), sino también del fascismo, que siempre fue un dispositivo para neutralizar el contrapoder de clase de «los de abajo» (en especial del movimiento obrero, pero no solo) apelando a la alianza nacional entre clases. El Tea Party español es una realidad amenazante que podrá llamarse UPyD (Unión, Progreso y Democracia) o Esperanza Aguirre, y es con ellos con los que debe competir la izquierda para disputar los marcos que pueden hacerla vencer electoralmente. La democracia, la justicia, el país o los derechos sociales son las claves discursivo-ideológicas de la batalla que se está librando.

El éxito electoral de Syriza en Grecia, que en un solo mes pasó del 16 por 100 a casi el 27 por 100 de los votos en 2012 (así como el fracaso del Partido Comunista de Grecia [KKE], que en su firmeza asistió a una reducción severa de sus apoyos electorales), no se explica como un proceso de concienciación por el cual los griegos se hicieron de izquierdas como consecuencia de la crisis, sino porque Syriza se convirtió en una alternativa de país para los griegos; exactamente lo que el KKE no ha logrado ser, por mucha que sea su influencia en el mundo sindical y su presencia en la calle. La política no siempre premia a los que más trabajan si estos carecen del talento de interpretar la situación concreta y actuar sobre ella.

Después hablaremos de los desafíos de gobernar con absolutamente todo en contra, pero para que esa posibilidad pueda plantearse es necesario que nuestra izquierda destierre el conservadurismo que la sigue atando a los consensos de la Transición así como sus complejos de inferioridad. Podrá defenderse con buenas razones que el PCE (Partido Comunista de España) no pudo hacer mucho más de lo que hizo en un contexto en el que su máxima aspiración solo podía ser parecerse a los comunistas italianos (que no era poca cosa), pero el presente es un tiempo de reordenación sistémica a todos los niveles que requiere rejuvenecimiento, radicalización, habilidad comunicativa para dar la batalla ideológica y aspiraciones de gobierno. Hay momentos en los que la responsabilidad de Estado y la vocación mayoritaria es lo contrario a la prudencia.

POWER IS POWER. ¿AJEDREZ O BOXEO?

Se atribuye a Antonio Gramsci aquella consigna del «pesimismo de la inteligencia» y el «optimismo de la voluntad». El caso es que el artículo del genio sardo *Contra el pesimismo*, publicado en el número dos de *L'Ordine Nuovo* en 1923, en el que criticaba el escepticismo existente en las propias filas comunistas ante el avance del fascismo, contrastaba con la amarga lucidez de algunas de sus cartas a su esposa Julia durante el mismo periodo[2].

Para lo que aquí nos ocupa, diremos que el «pesimismo de la inteligencia» es la conciencia de que el poder nace de la boca de los fusiles. Hay una escena de la popular serie *Juego de tronos* que lo expresa a la perfección. Lord Baelish, un consejero bien informado, alardea ante la reina (Cersei Lannister) de que el conocimiento es poder. En ese momento, la reina dice a sus guardias (que obedecen de inmediato): «Apresadlo, cortadle el cuello. ¡Alto!, esperad, he cambiado de opinión, dejadle ir…». Tras la demostración, la reina recuerda al consejero que el poder *es el poder* y que es ella quien lo tiene, por mucho conocimiento e información que tenga él.

Esta inapelable verdad no debe olvidarse nunca, en la medida en que es el límite último del terreno de juego de la política. Bien lo supo Allende cuando, tras derrotar en todas las batallas a sus enemigos, no pudo vencerles en el terreno militar, exactamente lo contrario de lo que le ocurrió a Hugo Chávez en Venezuela tras el intento de golpe de Estado de 2002. Aunque los partidarios del presidente se echaron a las calles, el elemento decisivo fue que la mayor parte del ejército apoyó a Chávez y así fracasó el golpe.

Con todo, es difícil no ver la política como una partida de ajedrez ya comenzada en la que, a partir de unas reglas dadas y aunque las piezas no estén repartidas de forma equitativa, hay que demostrar habilidad y astucia para jugar con los medios de los que se dispone. Hoy día, en la Europa del sur es complicado entender la política de otra forma, pero jamás debe perderse de vista que los poderosos no renuncian a todos sus privilegios cuando son derrotados en la mesa de ajedrez, sino cuando caen en el ring de boxeo.

Es indudable que las instituciones políticas realmente existentes no son organismos monolíticos que necesariamente representan a los poderes

establecidos. Por el contrario, pueden resultar cruciales para los avances democráticos y sociales; lo vimos en los Estados del bienestar europeos y lo estamos viendo en América Latina ahora, y es que los desplazamientos de las relaciones de fuerzas dentro del Estado son una de las claves de la acción política transformadora. Asumiendo que la política es el arte de lo posible, Karl Kautsky, que hoy rebasaría por la izquierda a cualquier socialista europeo y a buena parte de los que se llaman a sí mismos comunistas, pasó a la historia como «el renegado», víctima de la ira revolucionaria de un Lenin que, en *El Estado y la Revolución*, no veía la política como una partida de ajedrez sino como un ring de boxeo. La historia dio la razón entonces a Lenin, quien, en el verano de 1917, defendió una política de impugnación revolucionaria del Estado. De hecho, los acontecimientos de octubre demostraron que esa «revolución contra *El Capital*» como la llamó Gramsci ironizando sobre el hecho de que Marx jamás previó una revolución en un país atrasado como Rusia, había tenido éxito a fuerza de voluntad política acompañada de las armas. Aquella era política de boxeo, pero hoy, por suerte, no hay espacio para esa política en el sur de Europa.

La política del boxeo aparece en toda su crudeza en las relaciones internacionales. Los ejemplos son incontables, pero quizá el más ilustrativo sea el conflicto palestino-israelí. Por muchas resoluciones que apruebe las Naciones Unidas, por grande que sea el escándalo de la comunidad internacional, la realidad de ese conflicto ha estado determinada por los éxitos militares de las fuerzas armadas de Israel, desde las acciones insurreccionales del Irgún contra Gran Bretaña en 1944 a las que se terminó sumando la Haganá, pasando por la guerra árabe-israelí que sucedió al plan de la ONU para la partición de Palestina (la Nakba para los palestinos), la Guerra de los Seis Días con la que Israel ocupó Gaza y Cisjordania, se anexionó Jerusalén Este y se apoderó del Sinaí y de los Altos del Golán, hasta la política criminal de asentamientos. Por muchas razones morales y jurídicas que tengan los palestinos, por muchas quejas diplomáticas que se produzcan, mientras EEUU controle Egipto y Arabia Saudí, y apoye sin condiciones a Israel, la causa palestina estará condenada. Las acciones militares palestinas han generado muchos debates, en general alentados por los partidarios de Israel para justificar sus acciones militares como legítima defensa frente al terrorismo, pero lo fundamental de esas acciones, lo

fundamental de los cohetes de fabricación artesanal que vuelan desde Gaza para intentar llegar a Israel, es que, aunque puedan causar víctimas, no tienen la entidad militar suficiente para intimidar al ejército israelí. Política del boxeo: gana el más fuerte.

Recuerdo una clase de Ramón Cotarelo en la que se preguntaba para qué sirve la política y nos explicaba que, en última instancia, para que no se mate la gente. Cuando la política consigue ser eso, es cuando se produce el desplazamiento del boxeo al ajedrez y es algo siempre deseable.

El mejor ejemplo en nuestro país del desplazamiento de la política del boxeo a la política del ajedrez es la situación política vasca tras la retirada de ETA y el fin de sus acciones terroristas. En un interesante discurso de 2009, Arnaldo Otegi apelaba al compromiso histórico y a una amplia alianza para construir un proyecto político nacional y popular. Aquel discurso de Otegi recordaba en muchos aspectos al del Partido Comunista Italiano (PCI) de Enrico Berlinguer. Seguramente el PCI de aquel secretario general que rivalizaba en carisma con Palmiro Togliatti no tenía muchas más opciones que asumir que la OTAN «era una escudo útil para la construcción del socialismo en libertad, un motivo de estabilidad en el plano geopolítico y un factor de seguridad para Italia»[3], a pesar de ser el partido comunista con más votos de Europa occidental. El reparto del mundo en Yalta y el éxito ideológico, así como el desarrollo de las llamadas sociedades avanzadas, cerró las posibilidades revolucionarias en Europa occidental, como demostró el fracaso de las Brigadas Rojas o de la RAF (Rote Armee Fraktion, también conocidos como Baader-Meinhof) en Alemania, que intentaron «boxear» con el Estado. Por eso no es difícil entender que la izquierda abertzale, tras la derrota policial sin paliativos de ETA, haya asumido jugar al ajedrez de la política.

Aparte de consideraciones sobre el carácter criminal de la actividad de ETA (quien esto escribe condena, como es obvio, tal actividad), está claro que ETA perdió en el terreno militar-policial y que la izquierda abertzale perdió también el pulso político que lanzó en los años noventa. Los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), el terrorismo de Estado bajo los gobiernos socialistas, fracasaron estrepitosamente y deslegitimaron al Gobierno; incluso la derecha y sus medios, histórica y sociológicamente comprensivos con estos fenómenos, los usaron para atacar a Felipe González. Pero la política antiterrorista desarrollada por el PSOE y el PP y

apoyada por la magistratura, basada en la excepcionalidad (la doctrina Parot o la discrecionalidad de la tesis del «entorno del entorno» son dos buenos ejemplos de la misma), fue un éxito rotundo en términos políticos. ETA consiguió por méritos propios ganarse el odio de los españoles y de buena parte de la sociedad vasca, al tiempo que era cada vez más incomprendida, incluso entre la dura militancia abertzale. Pocas políticas han generado más consenso en España que la antiterrorista y sus excesos, lo cual no es una buena noticia para la democracia. Prueba de ello es que situó en posiciones cada vez más incómodas a los juristas garantistas[4] y a los partidarios de los derechos civiles.

El éxito de la acción de los diferentes poderes (judiciales, políticos y policiales) del Estado terminó por convencer a la izquierda abertzale de que tenía mucho más que ganar jugando al ajedrez que boxeando. Por eso la victoria a la que apelaba Otegi en su discurso es la encarnación del «optimismo de la voluntad» gramsciano que enmascara la conciencia íntima de la verdad que debe tener todo dirigente político. Gramsci sabía en 1923 que no quedaba más remedio que jugar al ajedrez con el adversario («optimismo de la voluntad»), pero no ignoraba que, para derrotarlo definitivamente, el ring de boxeo era ineludible («pesimismo de la inteligencia»), como finalmente ocurrió con el fascismo italiano. Del mismo modo, Otegi sabe (igual que los dirigentes del nacionalismo catalán) que la independencia no depende solo de la voluntad de los vascos (ojalá todo fuera tan sencillo), sino también de la debilidad del Estado español como bloque de poder. Lo que ETA no logró con bombas es muy difícil de conseguir mediante resultados electorales en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, por buenos que estos sean. Pero siempre queda la opción de jugar al ajedrez y esperar momentos de vulnerabilidad del adversario, pues, aunque las transformaciones políticas incruentas en la historia son la excepción, no por ello son menos deseables. Yo no quiero ver a Otegi justificar con eufemismos un atentado, pero tampoco quiero verle en la cárcel. Querría verle en un parlamento representando a los ciudadanos que le apoyan, igual que Gerry Adams en Irlanda.

Lo que hemos visto en América Latina en las últimas décadas es ajedrez y voluntad, esto es, la asunción, por parte de la izquierda y los movimientos populares, de estrategias electorales para el ejercicio de al menos una parte del poder del Estado, algo que debe ser además nuestra referencia

fundamental, a la vista de sus notables resultados. Habrá a quien esta realidad le sepa a poco y que devore la magdalena de la nostalgia de los tiempos de las guerrillas, pero seguro que muchos jóvenes se sorprenderían si supieran que una parte de los respetables mandatarios progresistas latinoamericanos fueron antes guerrilleros. Por citar solo tres ejemplos, Dilma Rousseff empuñó las armas contra la dictadura en Brasil; José Mujica, presidente de Uruguay, fue uno de los más importantes dirigentes tupamaros; y el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, militó en el Ejército Guerrillero Tupac Katari. Son boxeadores políticos que tuvieron que aprender a jugar al ajedrez para enfrentar a unos adversarios que llevarían, si pudieran, la pelea al ring, como ocurrió en Honduras y como había ocurrido en todos los golpes de Estado apoyados por EEUU en América Latina.

Aunque la lucha armada está asociada al romanticismo y a las imágenes del Che enamorando con su ejemplo (todo ello forma parte de la mística de la izquierda), la política del boxeo tiene poco de romántica. Colombia es, quizá, un buen ejemplo. La historia enseña que muchas veces la política acaba mostrándose en su escenario más atroz, pero no es, ni mucho menos, un escenario deseable por muchas canciones de guerra que escriban los poetas.

Los gobiernos progresistas latinoamericanos están lejos de haber acabado con el capitalismo y con las injusticias derivadas del mismo, pero han jugado al ajedrez con habilidad, logrando con ello importantes avances.

Con todo, aunque solo podamos jugar al ajedrez, nunca hay que olvidar que *power is power*.

La violencia

Es habitual que escuchemos a cargos políticos que tratan de justificar intervenciones policiales desproporcionadas o abusivas aludir con cierta pedantería a eso de que el monopolio en el ejercicio de la violencia corresponde al Estado. Cabría preguntarse qué tendrá que ver la descripción que hacía Max Weber del Estado moderno –«aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el territorio es un elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física»

legítima–, con justificar intervenciones policiales a todas luces contrarias al Derecho.

Sin embargo, aquel Max Weber que daba la razón a León Trotski cuando este dijo en Brest-Litovsk que todo Estado está fundado en la violencia, nos acerca a un punto de partida ineludible para todo aquel interesado en la política, a saber, que cualquier orden político se constituye sobre la violencia. Suena fuerte, pero es lo que enseñan los libros de historia.

Es, de hecho, una cuestión asumida en las ciencias sociales que los hechos históricos fundacionales de la democracia liberal son las revoluciones americana y francesa; procesos violentos que enfrentaron el colonialismo y el absolutismo monárquico.

Como decíamos en la introducción, la Revolución francesa inauguró las bases ideológicas de la modernidad: libertad, igualdad y fraternidad, y del mismo modo que Cromwell instauró la república en Inglaterra sobre el cadáver de un rey, el símbolo de la proclamación histórica de la democracia en Francia es la guillotina que separó del cuerpo la cabeza de Luis XVI. Aunque, como cualquier instrumento de ejecución de la odiosa pena de muerte, la guillotina nos resulte brutal, en su momento simbolizaba el humanismo democrático, desde que el diputado Joseph Ignace Guillotin la recomendara en la Asamblea Nacional como sustitutivo humanitario de los métodos tradicionales en las ejecuciones públicas. Se trataba de que no solo los nobles tuvieran el privilegio de una muerte sin dolor. Hasta entonces solamente aquellos con sangre azul podían «beneficiarse» de la decapitación con espada o con hacha, mientras que al resto les esperaban los más crueles tormentos. Finalmente, la Asamblea Nacional francesa adoptó el uso de la guillotina a fin de que la pena de muerte fuera igual para todos, sin distinción de rangos ni clase social. La aterradora máquina que representaba la justicia igual para todos en la ejecución de la sentencia de muerte era, además, el símbolo del nuevo poder que había destruido el antiguo.

La democracia liberal estadounidense fue todavía más allá en lo que al reparto del poder de la violencia se refiere, instaurando el derecho de todos los ciudadanos estadounidenses a portar armas, en la Segunda Enmienda –aprobada en 1791– a la Constitución de los Estados Unidos. Hay quien cree que la Segunda Enmienda es un anacronismo que explica que adolescentes frustrados provoquen una matanza en su colegio o que un padre de familia

blanco, anglosajón y protestante dispare desde la ventana de su casa a un negro de condición humilde porque ha penetrado en su propiedad. Pero estos casos criminales, nada infrecuentes, no tienen nada que ver con el origen de un derecho que es una de las bases constitutivas de la democracia estadounidense, que pretendía alejarse del absolutismo europeo. No se trataba, ni mucho menos, de instituir el derecho a la violencia privada, sino de democratizar la base del poder político. Nada que ver con las ensoñaciones belicistas de la Asociación Nacional del Rifle.

Si algo sabían los patriotas americanos que expulsaron a los ingleses es que la democracia era incompatible con la privatización de la violencia del absolutismo europeo. La democracia es tal si el poder está repartido y si, como dice Weber, la base del poder del Estado es la violencia, el pueblo no tiene por qué delegar necesariamente el fundamento de la soberanía en una sola organización administrativa desvinculada de la soberanía popular. Los *checks and balances* (controles y contrapesos) propios del constitucionalismo y de la cultura política estadounidense van mucho más allá de la separación de poderes, y definen una noción de Estado en la que el poder debe estar repartido. Por eso en Estados Unidos, como vemos en el cine, buena parte de las autoridades judiciales y policiales no son nombradas por las autoridades del Estado, como en Europa, sino elegidas por sufragio. Que el resultado de todo ello pueda ser aberrante no cambia su enorme interés, del mismo modo que un sátrapa que recibe muchos votos no debe servir para cuestionar el valor de votar.

En los años sesenta, el Partido de los Panteras Negras (Black Panther Party) pudo practicar un cierto boxeo político amparándose en la Constitución estadounidense, defendiendo a sus comunidades de las arbitrariedades policiales patrullando ellos mismos, armados, sus barrios. Su líder, Huey Newton, decía que un pueblo desarmado puede ser sometido a la esclavitud en cualquier momento. Pero mucho más importante que el culto a las armas de los Panteras Negras fue que el poder que conquistaron les permitió desarrollar programas de asistencia en las comunidades (en 1969, 10.000 niños desayunaban cada día gracias a ellos), e hicieron falta toneladas de droga y mafias apoyadas por los aparatos del Estado para acabar con ellos.

Lo que aquí nos interesa señalar, en la misma línea de los epígrafes anteriores, es la importancia de comprender los fundamentos de la política.

No se trata de que ningún *freak* fascinado por la cultura audiovisual pretenda imitar a Newton saliendo a patrullar su barrio al estilo de Torrente, sino de entender qué es el poder.

EL DERECHO

Hemos escuchado infinidad de veces a los representantes de cualquier poder estatal defender que actúan *única y exclusivamente con los instrumentos del Estado de Derecho*. Eso quiere decir que sus acciones se ajustan a la más estricta legalidad. La realidad demuestra que lo que define al Estado como máximo actor político es, por el contrario, su capacidad de incumplir sus propias leyes. Presentaremos aquí dos ejemplos: la Ley de Partidos de España, creada específicamente para perseguir lo que no podía perseguirse desde el Código Penal, y la Patriot Act estadounidense, que confiere al presidente de los Estados Unidos el derecho de matar sin procedimiento judicial previo. Ambas normas son una demostración de que el Derecho, en el mejor de los casos, no es más que la voluntad política racionalizada de los vencedores (a veces matizada por correlaciones de fuerzas, o de debilidades, como le gustaba decir a Vázquez Montalbán) y que, en el peor, desaparece ante la excepcionalidad, esto es, ante la política en estado puro, que no es más que la voluntad del soberano.

Los debates políticos a los que con frecuencia asistimos tienden a desentenderse de su objeto, el poder, y a centrarse en una estúpida dicotomía entre el bien y el mal según la cual tendríamos que discutir sobre si está bien o mal que se ilegalizara a las organizaciones políticas de la izquierda abertzale (a las que no podía perseguirse con el Código Penal), o de si está bien o mal que Bin Laden fuera ejecutado sin juicio. Los argumentos en una y otra dirección son habituales entre los comentaristas políticos y contribuyen, por desgracia, a apuntalar esa equívoca sensación de que tras las decisiones políticas (del Gobierno español o del estadounidense) lo que hay es un debate de ideas. Por el contrario, en estos casos asistimos a un elemento mucho más valioso para entender la política, a saber, que lo que define tener poder político es la fuerza de imponer la propia voluntad.

Si se hizo una ley de excepción como la Ley de Partidos que permitía hacer lo que el Código Penal y el resto del ordenamiento jurídico impedían fue, sencillamente, porque se contó con la fuerza suficiente para hacerlo. ¿Nos referimos a la fuerza del consenso entre los dos grandes partidos? Por supuesto que no. Hablamos de la fuerza derivada de haber acorralado policialmente a ETA y de haber neutralizado buena parte del poder social e institucional de la izquierda abertzale y del nacionalismo vasco. Con ETA poniendo más de cien muertos sobre la mesa cada año y con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) gobernando en la Comunidad Autónoma Vasca durante la presidencia de Felipe González, por mucho que los GAL actuaran, no se recortaban los derechos civiles en el País Vasco, ni tampoco se hizo cuando el PNV era crucial para asegurar la primera legislatura de gobierno del PP. Entonces, tanto los jueces del Tribunal Supremo como los del Constitucional, así como el Partido Popular y el PSOE, tenían otro criterio. ¿Recuerdan a Baltasar Garzón, recién elegido diputado por el PSOE, felicitando al diputado de Herri Batasuna Jon Idígoras en la primera sesión del Congreso en 1993? ¿Se acuerdan de Aznar autorizando en público los contactos con el «movimiento vasco de liberación»? Eran otros tiempos.

Los poderes imperiales del presidente de los EEUU (que, como la *patria potestas* romana, significan en última instancia el poder de dar muerte) responden a la misma lógica. EEUU ejecuta sin juicio a Bin Laden en territorio pakistaní porque puede; invadió Irak con la oposición del Consejo de Seguridad de la ONU porque podía, presionó al gobierno de España para que torpedeara el proceso judicial por el caso Couso porque podía hacerlo y compensará con su ejército las vulnerabilidades de su economía mientras otro ejército no lo impida.

Si algo nos enseña la ejecución de Bin Laden es que la política no resuelve los conflictos ni en el plano del Derecho ni en el de las ideas, sino midiendo o confrontando el poder de cada actor.

Por eso los demócratas nunca debemos olvidar que las razones sin fuerza no son nada. Como bien nos enseñaron los padres fundadores de la nación americana, para que haya democracia no basta un reparto de papeletas para votar o de turnos de palabra para hablar, sino un reparto del poder.

La fábula ateniense de las liebres y los leones narrada por Aristóteles ilustra bien esta realidad. En una asamblea de animales las liebres toman la

palabra para exigir la igualdad de derechos para todos, a lo que los leones contestan, irónicos: «Pero ¿dónde están vuestros dientes y vuestras garras, liebres?». Para que haya igualdad de derechos tiene que haber igualdad de poder. Así debe ser la democracia.

REALPOLITIK Y RAZÓN DE ESTADO

El término *realpolitik* procede del alemán («política de la realidad») y suele identificarse con las reglas de funcionamiento de las relaciones internaciones, en general más independientes de los principios y de los discursos legitimadores que la política estatal o local. Aunque existe toda una institucionalidad y un aparato jurídico de referencia para las relaciones internacionales, las violaciones de la legalidad internacional son tan frecuentes por parte de los Estados poderosos que la arena internacional es un excelente escenario para comprender cómo funciona la política realmente. El término *razón de Estado,* por su parte, suele identificarse con las medidas excepcionales (que suspenden la legalidad) que el propio Estado toma para protegerse a sí mismo, independientemente de que sean contradictorias con los fines oficiales del propio Estado, con su ética o con su propia legalidad[5]. La razón de Estado demuestra así que el Estado está por encima del Derecho. A los que asumen la razón de Estado en sus decisiones políticas se les llama por ello estadistas. De nuevo, el escenario político internacional es un excelente ejemplo (aunque no el único) de cómo opera la razón de Estado.

Suele identificarse como precursores o desarrolladores de estas nociones al teórico militar chino Sun Tzu, a Maquiavelo, al cardenal Richelieu, a Bismarck o a Carl Schmitt, entre otros. Si algo pueden tener en común tan dispares figuras es haber llamado a las cosas por su nombre al entender y decir (cada uno en su contexto) que la política (o la guerra) es, básicamente, el arte del poder, que estudia cómo conseguirlo y mantenerlo. Esta aparente obviedad suele ser puesta en cuestión cuando describimos escenarios políticos estatales y locales (aunque también opera en ellos), pero se revela mucho más cristalina en los escenarios políticos internacionales.

En la película de Gillo Pontecorvo, *La batalla de Argel,* el coronel Mathieu, al mando de las tropas que ha desplegado Francia en Argelia para

combatir a los independentistas del Frente de Liberación Nacional (FLN), responde a los periodistas que le están preguntando si sus hombres torturan a los detenidos para obtener información, que los soldados tienen la obligación de vencer y que las técnicas de interrogatorio responden sencillamente a la necesidad de vencer. Mathieu sugiere a los periodistas que no se pregunten si es legítimo o no torturar, sino si Argelia debe ser francesa. Si entienden que debe serlo (y hasta la izquierda lo considera así, nos dice), deben dejar trabajar a los soldados, cuya única obligación es vencer. Pontecorvo invierte poco después la secuencia y vemos entonces al jefe del FLN capturado, Larbi Ben M'hidi, al que los periodistas preguntan por qué usan cestas-bomba contra la población civil. Ben M'Hidi responde irónicamente que estarían encantados de usar aviones para atacar Francia en vez de cestas-bomba, y propone a los franceses que intercambien su armamento[6].

Esta escena nos pone frente la weberiana ética de la responsabilidad que mueve cualquier comportamiento político, a saber, la defensa del propio proyecto independientemente de su fundamento ideológico. Los sionistas podrán aducir que son el pueblo elegido por Dios; los estadounidenses, que defienden al mundo libre; los islamistas, que Alá les protege, y la URSS podía aducir que actuaba en defensa del socialismo y del proletariado mundial. Puede haber tantas justificaciones ideológicas como proyectos. Por eso lo importante no son los fines que justifican los medios (como pretenden los que banalizan a Maquiavelo), sino quién impone qué guerra es justa, cuándo una intervención militar es humanitaria o cuándo hay que matar o torturar atendiendo a la razón de Estado. Como decía el maestro de estadistas Robert McNamara, en el documental *The Fog of War,* si los Estados Unidos hubieran perdido la Segunda Guerra Mundial, él hubiera sido juzgado como criminal de guerra por haber diseñado los bombardeos contra la población civil japonesa. ¿Qué quiere decir con esto McNamara?; básicamente, que la diferencia entre un terrorista y un patriota es muchas veces la diferencia entre la victoria y la derrota. Y si no, que se lo pregunten a la reina de Inglaterra, que se vio a sí misma estrechando la mano de Martin McGuinness, uno de los jefes del IRA y del Sinn Féin que hoy gobierna en Irlanda del Norte.

Teniendo esto claro, podemos llamar cínicos a todos aquellos que digan que los Estados no negocian con terroristas. Los estadistas negocian con los

terroristas si se ven obligados a hacerlo, e incluso en ciertos casos reconocen que aquellos a los que llamaron terroristas pueden llegar a convertirse en jefes de Estado. El siglo XX está lleno de ejemplos. En política, como en los negocios, se trata con todo aquel que tenga la fuerza suficiente para tratar. Se sentó Ribbentrop con Molotov, como se habían sentado las democracias europeas con Hitler; se sentó el gobierno español con ETA, y Juan Manuel Santos, como otros presidentes colombianos, se sentó con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional). Y, del mismo modo, los mismos gobiernos que hacen exámenes democráticos a gobiernos adversarios, firman contratos y acuerdos comerciales con dictaduras y regímenes autoritarios a cambio de los cuales les prestan apoyo político.

Podremos llamar cínicos también a los que digan que el problema de Corea del Norte para la comunidad internacional es que se trata de una abominable dictadura opresora. Tiene todo el aspecto de serlo, como Arabia Saudí, pero el problema es otro. Ese pequeño Estado que sobrevivió a la desaparición de la URSS, que tiene un ejército de casi un millón de soldados y cuenta con más de 3.000 tanques, 11.000 piezas de artillería, 850 aviones de combate y 430 buques de guerra y, sobre todo, armas nucleares, tiene una enorme importancia geopolítica precisamente por su poder militar y por su más o menos confesada alianza con China. Hay dictadores amigos y dictadores enemigos de Occidente, y estar en uno u otro grupo suele tener más que ver con la existencia o no de intereses geoestratégicos compartidos que con la ideología.

Podremos llamar también cínico a François Hollande (la que fuera gran esperanza blanca del socialismo europeo) cuando decía que Francia no tenía ningún interés económico o político en Mali, que simplemente defendía la paz y que su objetivo era luchar contra la amenaza terrorista y proteger a los ciudadanos franceses. Por muy complejo que sea el conflicto en Mali, es indudable que el control sobre los yacimientos de oro y de uranio explica más de la guerra que las apelaciones a la democracia de Hollande. A propósito del tema, se preguntaba el filósofo Tzvetan Todorov, desde las páginas del periódico *El País*, cuál iba a ser la ideología que justificara la intervención francesa en el país africano. Y es que, efectivamente, toda potencia colonial que se precie tiene que echar mano de recursos ideológicos, y de unos cuantos intelectuales, que hagan presentables sus

intervenciones militares. Históricamente se decía, sin mayores matices, que los europeos teníamos la misión de evangelizar y civilizar a los pueblos atrasados. Estos argumentos sirvieron para crear unas relaciones de dependencia y explotación entre los países del centro y las periferias de las que derivan buena parte de las injusticias que hoy conocemos. Más recientemente, los *neocons* estadounidenses y sus imitadores europeos apelaron directamente a la cruzada del bien (la civilización occidental) contra el mal (el terrorismo), y así llegaron los *marines* hasta Irak.

Si comprendemos que la *realpolitik* y la razón de Estado explican más sobre la política que cualquier ideología legitimadora de la acción que se trate, podremos llamar cínicos y contadores de cuentos de hadas a todos aquellos que explican la política como una historia de buenos y malos.

¿Quiere ello decir que hay que desterrar la moral de la política? Por supuesto que no, pero para cambiar algo lo primero es entender cómo funciona.

La lucha por la hegemonía

Antonio Gramsci tomó prestada una metáfora de Maquiavelo para describir el poder: el poder sería como un centauro, mitad humano y mitad bestia. Gramsci comprendió que el poder de las clases dominantes no solo se ejerce mediante instrumentos coercitivos o relaciones económicas derivadas del proceso productivo, sino también a través del control del sistema educativo, de la religión y de los medios de comunicación, y que, por tanto, la cultura es un terreno crucial de la lucha política. Para Gramsci, la hegemonía es el poder cultural del que goza el grupo dominante para dirigir a la sociedad en una dirección que no solo sirve a sus intereses, sino que, además, es asumida por el resto de grupos como conforme a sus intereses. Como dice Giovanni Arrighi, la hegemonía es lo contrario a la dominación, que Talcott Parsons llama «deflación» para designar situaciones en las que el control gubernamental no se puede ejercer sino mediante el uso generalizado de la fuerza o la amenaza de la fuerza.

Santucci, uno de los mayores estudiosos de la obra del genio sardo, dijo que el principal logro de Gramsci fue señalar la crítica de la cultura y de las ideologías dominantes como la tarea política fundamental. Eso quiere decir

que la política no solo está en el Estado y que, a veces, tanto dentro como fuera de este, la política es ajedrez (guerra de posiciones), y que hay que jugar la partida en la cultura y sus instituciones para lograr la mejor posición previa a la acción (guerra de movimientos). De hecho, como decíamos, para cualquier actor político que carezca de los fusiles de Mao, el terreno gramsciano es el único posible, y ello explica el enorme éxito de la reflexión gramsciana entre todos los sectores políticos que comprendieron que su único terreno de lucha posible era el de la ideología y la transformación desde el Estado.

El gran dispositivo mediático de nuestro tiempo, lo más importante para establecer y determinar lo que piensa la gente (más aún que la educación, la familia o la Iglesia) es la televisión, independientemente de que se transmita por satélite, por TDT o por internet. La televisión moldea nuestra sensibilidad estética, nuestras opiniones políticas, condiciona nuestro ocio y el entretenimiento que consumimos, nos enseña el significado de las palabras, nos dice (casi siempre de manera más implícita que explícita) que la palabra «antisistema» tiene una connotación delictiva y que la palabra «mercado» no tiene nada que ver con los golpes de Estado. Como señalaba George Lakoff describiendo la lucha política entre demócratas y republicanos en EEUU, pensamos en función de marcos (estructuras de pensamiento) que llevan asociados una serie de valores determinados. No es lo mismo hablar de «alivio fiscal» que de «insolidaridad de los ricos» para describir que se bajen los impuestos a las grandes fortunas; la palabra «alivio», obviamente, tiene una carga valorativa positiva, aunque lo que esté ocurriendo es que el Estado tenga menos recursos para hacer políticas sociales porque los ricos no pagan impuestos.

Por eso nunca se debe asumir el lenguaje del adversario político, sino disputarlo. Cuando nuestros adversarios asumen términos como casta, puertas giratorias, «berlusconización» de la política, desahucios, precariedad, etcétera, están asumiendo que el combate se ha desplazado a un terreno que nos favorece. Lograr esos desplazamientos es el objetivo de la acción política en el terreno ideológico.

Como señala el escritor Isaac Rosa en el prólogo al genial libro del periodista Javier Gallego *Lo llevamos crudo*, «el enemigo nos arroja gruesas metáforas naturales (la crisis como un terremoto, un tsunami o un incendio), médicas (la crisis como un cáncer o un virus que contagia países,

el sistema financiero como aparato circulatorio, los gobernantes como cirujanos, los recortes como una cura de adelgazamiento, las reformas como medicinas…) o domésticas (el país como un hogar donde no se puede gastar más de lo que se ingresa, el gobernante como una aplicada ama de casa, el presupuesto como una irrebatible cuenta de la vieja)».

Un magnífico ejemplo de cómo jugar al ajedrez con esto es el propio programa *Carne Cruda* del mismo periodista. Así responde Gallego al lenguaje del poder: «[Estado de coma] Interior. Quirófano. Operación a corazón abierto. Sobre la mesa de operaciones, un paciente con roturas múltiples, traumatismos generalizados y colapso general del sistema tras haber sido arrollado por una crisis, atracado por una banda de gánsteres de la Banca que le dieron una paliza brutal y rematado con una puñalada trapera y por la espalda por toda una clase política. Y encima acaba de caerle sobre la cabeza una urna electoral que le ha provocado otro traumatismo craneal severo porque se ha enterado de que, en la próxima operación, le van a operar los mismos médicos, pero con una bata de otro color».

Lo que está haciendo el presentador de *Carne Cruda* es combatir el sentido común que tratan de imponer los medios en el propio terreno de los medios. Gallego combate así la ideología dominante y contribuye a crear un nuevo terreno de juego en el que la crítica y la denuncia de la injusticia son posibles. Eso es precisamente el trabajo que hemos tratado de hacer en *La Tuerka*, en *Fort Apache* y en los medios masivos con nuestras intervenciones. La nuestra ha tratado de ser una estrategia de combate político en la batalla de las ideas que se libra en los medios, cuyo peso es fundamental a la hora de determinar cómo piensa la mayoría de la gente.

Antisistema y prosistema

La palabra «antisistema» ha adquirido un significado muy negativo en los medios de comunicación. Se identifica poco menos que con *hooligans* que provocan desórdenes públicos. El término se utiliza habitualmente para atacar a los movimientos sociales y para criminalizar la protesta social. Pero, ¿qué quiere decir realmente el término antisistema?

El sociólogo Immanuel Wallerstein dice que han existido dos grandes movimientos antisistémicos en la historia de la humanidad; los primeros, que se oponían a la organización económica del sistema, eran los movimientos obreros; los segundos, que se oponían a la organización política internacional a través de un sistema de Estados, eran los movimientos de liberación nacional.

Si hacemos cuentas de lo que han aportado estos movimientos en los últimos 200 años, resulta que cualquier demócrata asumiría que los derechos civiles y políticos, el derecho de asociación, el sufragio universal, el derecho de libre sindicación y el derecho de reunión, la jornada laboral de ocho horas, el derecho a un sistema sanitario público, el derecho a un sistema público de educación, que puedan existir organizaciones sindicales o que haya negociación colectiva, son fruto de la acción en la historia de los movimientos antisistémicos. Las características que hoy todo el mundo asume como propias de la democracia son el fruto, precisamente, de los movimientos antisistémicos.

Wallerstein sintetiza algunos de los grandes debates en los movimientos antisistémicos. Uno de ellos fue, en el seno del movimiento obrero, el de qué hacer con el Estado. Los anarquistas decían «tenemos que destruir el Estado» y los marxistas decían «tenemos que conquistar el poder del Estado». En la mayor parte de los países con un gran movimiento obrero organizado, se impuso el criterio de los marxistas. Después hubo otro debate: ¿cómo conquistamos el poder del Estado? Los marxistas reformistas decían que con la ampliación del sufragio podrían llegar al poder del Estado y, a través de reformas en el marco de la legalidad burguesa, podrían lograr avances que los llevaran a la superación del capitalismo; por su parte, los marxistas insurreccionalistas decían que eso era imposible, pues la burguesía nunca se dejaría arrebatar el poder político por vías legales y, por tanto, el Estado solamente se podía conquistar por vías violentas. En general, en Europa tuvieron más éxito los socialistas reformistas; salvo en Rusia, donde los bolcheviques se hicieron con el control del partido y llevaron a cabo uno de los procesos políticos más importantes del siglo XX: la Revolución rusa, esa «revolución contra *El Capital*», como decía Gramsci, y que habría de inaugurar el «breve siglo XX», como lo definió Eric Hobsbawm.

Debates parecidos a este se dieron en los movimientos de liberación nacional; por ejemplo, entre el nacionalismo cultural y el nacionalismo político a propósito de si es imprescindible un Estado para defender y promover una cultura. Lógicamente, se impusieron los nacionalistas políticos, pues sabían que para defender y desarrollar una lengua o cualquier característica cultural necesaria para construir sus elementos de agregación identitaria, se necesitaba al Estado. También debatieron sobre si se podría conseguir la independencia nacional respecto a las colonias por vías pacíficas o por vías violentas. En este caso, a fuerza de confrontarse con la realidad, se impusieron en casi todos los lugares los que defendían la vía violenta. Los procesos de descolonización, que en América Latina conocimos en el siglo XIX y en el resto de países del mundo en el siglo XX, fueron procesos que representaron el desafío armado no solo al poder militar de las metrópolis, sino a la estructura política del sistema mundial.

Puede afirmarse por ello, frente a los que usan el término «antisistema» como un insulto, que casi todos los avances políticos de la humanidad se deben, en buena medida, a la acción de los movimientos antisistema. Paradójicamente, lo que resulta impresentable a la luz de todo planteamiento democrático, son los «prosistema» de la historia: defensores de la esclavitud, del sufragio restringido, del racismo, del trabajo infantil, contrarios a los derechos sociales, los adinerados defensores del fascismo y un largo etcétera. Los prosistema de hoy son los defensores de una institucionalidad internacional sin controles democráticos, en la que instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Troika mandan sobre los gobiernos; son los partidarios de la privatización de lo público y valedores de la socialización de los costes de los fracasos privados; son los defensores de un sistema que sigue fundamentándose en la protección de los privilegios de una minoría frente a los derechos de la mayoría.

[1] En noviembre de 1917, los bolcheviques hicieron públicos todos los tratados secretos firmados por el régimen zarista y declararon que la diplomacia secreta era un instrumento de la minoría propietaria para engañar a las mayorías y someterlas a sus intereses. El presidente estadounidense Woodrow Wilson les imitó poco después y declaró que los pueblos no podían ser tratados como simples objetos. La historia del siglo XX reveló que ni los bolcheviques ni Wilson tuvieron mucho éxito.

[2] Las cartas están disponibles en la compilación, a cargo de Antonio Santucci, publicada en 1992. A propósito de las mismas, Paco Fernández Buey señala: «En el plano público, político, la reafirmación de la voluntad, del optimismo de la voluntad, tiene que quedar deslindada del equilibrio sentimental de los sujetos que han de actuar».

[3] Esto es lo que declaró Enrico Berlinguer en una entrevista en *Il Corriere della Sera* el 15 de junio de 1975 (la traducción es mía).

[4] Hubo que esperar a 2014 para que un cargo electo español, el exfiscal jefe anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, elegido eurodiputado en las listas de PODEMOS y amigo personal de Ernest Lluch –asesinado por ETA–, interviniera en el pleno de Estrasburgo para denunciar la práctica de la tortura en España, que ha sido acreditada incluso por una sentencia de la Audiencia Nacional.

[5] El término tiene su origen en uno de los personajes del *Dialogo del Reggimento di Firenze* (1523-1527) de Francesco Guicciardini, que explica cómo a veces la crueldad es necesaria para preservar el Estado por encima de cualquier consideración moral.

[6] Un análisis en detalle de esta película puede verse en el capítulo VI de mi libro *Maquiavelo frente a la gran pantalla. Cine y política* publicado en 2013 por Ediciones Akal.

II
HISTORIA
El futuro tiene un corazón antiguo

DISPUTANDO LA DEMOCRACIA (DESDE HACE MÁS DE 100 AÑOS)

Recuerdo una conversación con Isaac Rosa a la salida de un debate en *La Tuerka,* cuando aún hacíamos el programa en Tele K. Hablábamos del 15M y del problema del «adanismo» de ciertos nuevos militantes que acababan de incorporarse a la política. Parecía, para algunos, que las luchas políticas en España nacían con el 15M. El movimiento 15M parecía la más contundente consecuencia política de la crisis, que daba al traste con todo lo anterior renovando el lenguaje, las prácticas y el estilo de hacer política bajo los principios de más democracia y más derechos. Pero, como decía Carlo Levi, *il futuro ha un cuore antico.*

Entre los conceptos y categorías para describir el mundo político español de la era post-15M aparecen el régimen («Abajo el régimen» escribieron los jóvenes de Juventud Sin Futuro en la fachada del Congreso con un *spray*), el 1 por 100 (la minoría que acapara el poder) frente al 99 por 100 (las mayorías sociales excluidas de la decisión), el bipartidismo turnista del PP y el PSOE, el auge del soberanismo catalán y vasco como desafío a la estructura territorial y política del Estado español, la emergencia de movimientos sociales en defensa de los derechos de los trabajadores y de los de abajo en general (la sanidad y la educación públicas, la vivienda…), la noción de mayoría silenciosa a la que siempre apela la derecha, el sistema electoral como límite a la democracia, etcétera.

Todas esas nociones, sin embargo, aunque muchas veces parezcan novedosas en su formulación, están tatuadas en el ADN político de España desde hace más de cien años. En este capítulo repasamos de forma apresurada e incompleta, lógicamente, algunas de las claves de nuestra historia y de las luchas por la democracia en nuestro país hasta la Transición. No he querido profundizar en los últimos 35 años; la interpretación del periodo más reciente de nuestra historia política presenta quizá demasiadas controversias en un momento como este, lo que obligaría a un estudio más detallado del que quiero, y puedo, afrontar aquí. Pero sí

me parecía importante dejar estos apuntes, pues si algo deben saber los jóvenes que se han incorporado a la política en los últimos tiempos para pedir más democracia, es que forman parte de una tendencia permanente en nuestra historia de la que podemos estar orgullosos.

CÁNOVAS: EL PADRE DE LA DERECHA ESPAÑOLA QUE DESPRECIABA ESPAÑA

Suele decirse que el siglo XX en España empieza con el «Desastre del 98», aunque haya alguno, más partidario de las «crónicas reales», que quiera retrasar su comienzo a la declaración de mayoría de edad e inicio del reinado de Alfonso XIII, en mayo de 1902. Lo cierto es que, cuando el siglo empieza, el régimen político tiene ya una duración de un cuarto de siglo y que su columna vertebral legal es una Constitución de la que se ha dicho: «Todo análisis histórico de la Constitución de 1876 debe partir del hecho de que la dinámica política prevista en su articulado –sufragio, mayorías parlamentarias, etcétera…– no solo no va a desarrollarse en la práctica de acuerdo con tales previsiones formales, sino que sus mismos artífices cuentan de antemano con ese desajuste entre la letra y la realidad de su aplicación» (J. M.ª Jover). La Constitución como papel mojado, ¿les suena?

Ese régimen político nació, además, para no faltar a nuestra tradición decimonónica, de un golpe militar: el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto, al que se suman los ejércitos del Norte y del Centro, que hace que Serrano abandone el poder, que es transmitido por el general Fernando Primo de Rivera directamente a Cánovas como representante oficial del rey en ciernes (el futuro Alfonso XII). Es Antonio Cánovas del Castillo, el padre de la derecha española –que, no por casualidad, dio su nombre a uno de sus principales *think tanks* hasta la unificación de todos en FAES–, quien manejará todos los hilos del poder hasta la elaboración de esa Constitución dieciocho meses más tarde.

El giro reaccionario es patente: no solo se colocará en la cúpula del poder militar y civil a destacados monárquicos y se restablecerá la legislación pre-republicana en lo relativo a grandezas y títulos del reino; también se estrecharán las relaciones con la jerarquía católica, modificando el matrimonio civil y sustituyéndolo por el exclusivo católico-canónico. En materia educativa, se estableció la supervisión gubernativa de los libros de

texto y programas, y el ministro de Fomento, marqués de Orovio, exigió una declaración de fidelidad política al profesorado que supuso la exclusión de sus cátedras de Giner de los Ríos, Azcárate o Salmerón, y la fundación, por ellos y otros, de la Institución Libre de Enseñanza. La voluntad de intervenir sobre la educación y la familia desde los criterios más retrógrados, vinculados siempre a la jerarquía católica, ha sido siempre una constante de nuestra derecha.

Para la elaboración de la Constitución se celebraron elecciones el 31 de mayo de 1875. Cánovas, aunque enemigo declarado del sufragio universal, quiso respetar las formas y consintió en que, «por esta vez», se hicieran por el sufragio universal masculino establecido por la Constitución de 1869. No obstante, con la prensa amordazada y los partidos opuestos en plena dispersión, las elecciones fueron un trámite que arrojó, sin embargo, unas escandalosas cifras de abstención (67 por 100 en Madrid, entre el 70 y el 80 por 100 en Zaragoza, Valencia y Valladolid, 88 por 100 en Barcelona). El resultado, como no podía ser de otra forma, supuso que los diputados ministeriales alcanzaran 333 escaños de un total de 391.

La Constitución de 1876, en línea con el liberalismo doctrinario profesado por Cánovas, sostenía la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes, y otorgaba un enorme poder al monarca al poder elegir directamente al jefe de Gobierno y otorgarle, además, el decreto de disolución de las Cortes para poder celebrar nuevas elecciones (como «prerrogativa regia»). Con un sistema electoral escandalosamente corrupto, una vez controlado el Ministerio de Gobernación y los gobiernos civiles, las elecciones –salvo alguna excepción ya en el final del régimen– siempre fueron ganadas por el gobierno que las convocaba.

Establecía la Constitución un sistema bicameral, con un Senado integrado por senadores de derecho propio –aristocracia de sangre, jerarquía militar, eclesiástica y administrativa–, senadores vitalicios –nombrados por el rey– y senadores electivos. Se dejaba abierta la cuestión del sufragio, aunque Cánovas, como ya hemos dicho, enemigo del universal, promovió la Ley de 28 de diciembre de 1878 que reimplantó el sufragio censitario, con un censo de solo 850.000 electores. Para apreciar a cuántos ciudadanos varones se privaba del voto bastará conocer que, cuando en 1890 los liberales de Sagasta logren hacer aprobar el sufragio universal masculino, el censo electoral se elevará hasta casi 5 millones de electores.

Cánovas ya había ocupado cargos importantes, entre ellos el de ministro de Gobernación durante los años finales del reinado de Isabel II, y era un pesimista incurable: «Son españoles… los que no pueden ser otra cosa» fue una de las frases que dejó para la historia y que conviene recordar a sus hijos políticos, tan partidarios del «¡España!, ¡España!, ¡España!». De él ha escrito Ramos Oliveira que tenía en el tuétano el convencimiento de que España se había acabado; como político, pasó por el gobierno de España con la sola preocupación de apuntalar por aquí y por allá la agrietada fábrica del Estado: «Organizó a España inicuamente para que tirara otros cuarenta o cincuenta años e incurrió en todos los desmanes que censuró a los políticos del siglo XVII».

Dice también Ramos Oliveira que «con su sistema de gobierno causó incalculable mal a la nación; la castró; la oprimió y la hizo perder la fe que le quedaba en lo presente y en lo porvenir. Pocos crímenes menos disculpables que el del hombre que se sitúa al frente de un gobierno, o de un sistema de gobierno, sin fe en su patria. No hay engaño de peores consecuencias para un pueblo. Cánovas era de ese género de políticos; y su estilo de gobernante obseso por una paz interior comprada a cualquier precio, reacio a hacer y mucho más a pensar en lo futuro, se ceñía y ajustaba a las sórdidas ambiciones de la oligarquía territorial, ávida ya de sentarse al banquete y gozar en quietud de las rentas pingües, sin pensar en reformas que fueran bálsamo en las miserias de un proletariado harapiento».

BIPARTIDISMO, OLIGARQUÍAS Y CACIQUES: EL BANQUETE DE UNA MINORÍA

El propio Cánovas se ocuparía de dotar al sistema de una «oposición» que aceptase los fundamentos del mismo (la monarquía, el reconocimiento de la supremacía de la corona a través de la prerrogativa regia, etcétera… y, en definitiva, compromiso en el turno pacífico del poder). Encontró para ello a un político que supo aunar bajo su liderazgo a un conjunto de liberales reciclados en los antiguos partidos Constitucionalista, Radical, e incluso Unionistas y Moderados: Práxedes Mateo Sagasta.

En el periodo comprendido entre 1876 y 1880, Sagasta construirá el llamado Partido Fusionista, más tarde conocido como Partido Liberal, con el que compartirá el poder el partido de Cánovas (Partido Liberal

Conservador o Conservador a secas). Con la incorporación al Partido Fusionista de «Grandes de España» tan significativos como los duques de Alba, Medinaceli, Fernán-Núñez y Veragua, resultó claro que el nuevo partido ofrecía a Cánovas las suficientes garantías como para basar en él su proyecto de bipartidismo. «El dinastismo (de los partidos del turno) –ha escrito Ramón Villares– era algo más que una etiqueta: era el blindaje del sistema frente a los excluidos del mismo tanto por razones ideológicas o partidarias (republicanos, carlistas y luego regionalistas) como por razones sociales, al bloquear la posibilidad de que la voluntad ciudadana se expresase en lo que entonces se denominaban "elecciones de verdad"».

Este fue, en líneas generales, el dispositivo político montado por Cánovas del Castillo para asegurar el disfrute sosegado del banquete a una minoría de privilegiados que nunca habían dejado de serlo, pero que habían visto con inquietud durante el llamado Sexenio Revolucionario (1868-1874) cómo la democratización, por precaria que fuese, amenazaba sus posiciones.

Tras el andamiaje político del «turnismo» se esconde una realidad que ha sido definida por la historiografía con las palabras que Joaquín Costa utilizó para titular la encuesta realizada en el Ateneo de Madrid: «Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla». Los términos «oligarquía» y «caciquismo» se repiten desde hace más de un siglo en los manuales de historia para describir la realidad social de los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX. No es un libro como este la ocasión para entrar en polémicas historiográficas, pero no quiero dejar de decir que las tesis de Manuel Tuñón de Lara sobre el «bloque de poder» y la dominación de clase que supone, me parecen perfectamente válidas frente a las sostenidas por el recientemente fallecido (y tan celebrado por muchos de mis colegas politólogos) Juan José Linz, para el que, en nuestro país, la política tenía precedencia sobre los intereses materiales.

Pese a todas las matizaciones que han introducido, por ejemplo, mis colegas de facultad Mercedes Cabrera y Fernando del Rey Reguillo, hablando de «instrumentación recíproca», un examen de las decisiones, sus actores y beneficiarios demuestra cómo el sistema bloqueó cualquier atisbo de democratización que avanzara hacia un mínimo reparto efectivo del poder, y con ello a limitar siquiera un régimen de explotación de una

inmensa mayoría de la población en beneficio de una minoría. Como ahora, el 1 por 100 frente al 99 por 100.

La introducción de este sistema de sufragio universal masculino no supondría ningún cambio democrático del mismo. Como detalla Fernández Almagro, al final del Gobierno Largo de Sagasta (de noviembre de 1885 a julio de 1890), los liberales lograban hacer aprobar la Ley de 9 de junio de 1890 que concedía el derecho al voto a todos los españoles, varones y mayores de 25 años, que se hallaran en pleno goce de sus derechos civiles y fuesen vecinos de un municipio con, al menos, dos años de residencia en el mismo. Hay que recordar que, en las discusiones parlamentarias sobre el sufragio, Cánovas, enemigo del sufragio universal, con cierta lucidez, había advertido: «Yo creo que el sufragio universal, si es sincero, si da un verdadero voto en la gobernación del país a la muchedumbre […] sería el triunfo del comunismo y la ruina del principio de propiedad, y si no es sincero el sufragio universal, porque esté influido o conducido, como en este caso lo estaría, por la gran propiedad o por el capital, representaría […] el menos digno de todos los procedimientos políticos para obtener la expresión de la voluntad del país» (Diario de sesiones del Congreso de 10 de febrero de 1888).

La profecía de Cánovas se cumplió: el sufragio universal masculino no supuso el triunfo del comunismo y sí la consolidación y el incremento de la indignidad de la manipulación electoral y la corrupción. Los resultados electorales prácticamente no variaron, y la indiferencia por la política de la mayor parte de la población continuó en los mismos términos. Todos los políticos parecían iguales y, en cierta medida, era verdad. El supuesto órdago de Sagasta era una maniobra de «apertura hacia la izquierda» destinada a atraer a los republicanos que tampoco tuvo demasiado éxito si exceptuamos a algunos seguidores de Emilio Castelar, que dijo que la monarquía liberal se convertiría en monarquía democrática tan pronto se establecieran el jurado popular y el sufragio universal. Habría que esperar a Juan Carlos I para que esta afirmación, según la cual las monarquías se transforman en democráticas si hay elecciones libres, tuviese seguidores demócratas (los partidos de izquierda en la Transición) en España.

En aquellas elecciones la mayor parte del republicanismo, casi siempre dividido, solo tuvo cierto apoyo en las grandes ciudades, únicos lugares donde la extensión del sufragio tuvo algún efecto.

El 98 y la «regeneración de la política»

El «Desastre del 98», con la pérdida de los restos del imperio colonial español, supuso una conmoción inmensa en el país, pero no varió nada el entramado político que hemos descrito. Indudablemente, hay que distinguir lo que José Luis Abellán llamó «desastre-mito» (producto de una oligarquía que quiso identificar sus dificultades y el derrumbamiento de toda una ideología justificativa con el fracaso histórico de todo un pueblo) y «desastre real»: el sufrido por los sectores populares del país, las familias diezmadas por una movilización militar que admitía la redención en metálico, las enfermedades y bajas con la consiguiente merma de capacidad laboral de los repatriados, etcétera. Hoy el desastre-mito de la crisis es el desastre de la «Marca España», identificada con la pérdida de prestigio internacional (que no necesariamente de beneficios) de las grandes empresas españolas frente al desastre real de millones de familias.

La ruptura ideológica de aquel «desastre» tuvo también su reflejo en otras manifestaciones como la aproximación de jóvenes intelectuales al socialismo y al anarquismo y a eso que ambiguamente se llamó «regeneracionismo». Además de la ambigüedad de sus manifestaciones teóricas, se ha destacado que su contradicción fundamental radica en que el carácter netamente político de sus objetivos choca frontalmente con el desprecio y la repulsa a la acción política efectiva a través de una organización o partido, derivando incluso, en ocasiones, hacia un peligroso antiparlamentarismo y autoritarismo. ¿Les suena? Sus realizaciones concretas –La Liga Nacional de Productores, a partir de la actividad de Joaquín Costa en la Cámara Agrícola del Alto Aragón; o la «Unión Nacional», a partir de la incorporación al movimiento de las cámaras de comercio de Santiago Alba y Basilio Paraíso– fueron un fracaso al poco tiempo. El apoliticismo de Paraíso será instrumentalizado por los políticos profesionales y Santiago Alba se convertirá en uno de los dirigentes del Partido Liberal. Costa, más coherente, derivará hacia el republicanismo.

Sin embargo, en el cambio de siglo y en los primeros años del siglo XX, regeneracionista se reclama todo el mundo: las grandes figuras de los partidos dinásticos se apropian de la retórica regeneracionista y la convierten en coartada para seguir manteniendo su sistema de poder y de dominación.

Los inicios del siglo XX vieron además desaparecer a los jefes históricos de los partidos turnantes; Cánovas en 1897, en un atentado anarquista, y Sagasta algo después, en 1903, tras presidir el primer gobierno del nuevo monarca. Al mismo tiempo, prácticamente, se inicia el reinado de Alfonso XIII, declarado mayor de edad en 1902, al cumplir los 16 años.

La práctica política, pese a la extensión del sufragio en la década anterior, continúa igual: turnismo, manipulación electoral y marginación, en definitiva, de la mayor parte de la población del país. Se añade, además, un nuevo factor de corrupción debido al papel de la prerrogativa real y a la forma de ejercerla por Alfonso XIII. Como señaló David Ruiz, el nuevo monarca «significa la apertura de una nueva época en la que la intención regia, aprovechando las imprecisiones que ofrecía el texto constitucional vigente –el de 1876– se tornará en injerencia progresiva en los asuntos de gobierno reservados hasta entonces a la presidencia del Consejo de Ministros y las Cortes». Antonio Ramos Oliveira es más duro: «La monarquía de la Restauración no podía ser superior, ni ética ni civilmente, a su pedestal, y su pedestal era la oligarquía ambidiestra. Régimen corrompido, había de tener por pináculo un rey corrompido […] Tomó Alfonso XIII de la oligarquía la frivolidad, la ausencia de fe en España, la codicia y el desinterés por la cultura».

La emergencia del movimiento obrero y los nacionalismos periféricos

En los inicios del siglo, el PSOE, nacido en 1879, con su central sindical UGT (Unión General de Trabajadores) aparecida en 1888, se ha consolidado. Desde 1890 se presenta a las elecciones, pero fuera de algún concejal testimonial, está lejos de poder aproximarse a unas Cortes que se fabrican, por el procedimiento del encasillado, desde el Ministerio de Gobernación. Las sociedades obreras de filiación o simpatías anarquistas, tras una represión muy dura en la última década del siglo XIX –la edad de oro de la «propaganda por el hecho» en toda Europa–, lograron impulsar la huelga general de Barcelona de febrero de 1902, pero su derrota ralentizará los avances organizativos que venían consiguiéndose.

La existencia de este movimiento obrero, débil todavía pero cada vez más potente, es un síntoma de que algunas cosas sí están cambiando con el siglo.

La política oficial, sin embargo, camina por otros derroteros más próximos a su tradición: el equilibrio presupuestario, el nunca acabado proyecto de reforma de la administración local y como siempre también, ya que sirve de bandera a los liberales para atraer republicanos, la nunca resuelta cuestión del clericalismo y los consentidos abusos de la Iglesia católica en cuanto a su interpretación abusiva del Concordato. Así, los primeros años desde 1900 transcurren entre las protestas por la boda de la princesa de Asturias con un destacado carlista, el estreno de *Electra* de Galdós y el escándalo que ocasionó, en los ambientes clericales, las protestas por el nombramiento de Nozaleda para la diócesis de Valencia, etcétera. Mientras, empiezan a menudear las «crisis orientales», es decir, los cambios de ministros o de gobiernos debidos a la presión ejercida desde el Palacio de Oriente, sede de la monarquía.

Desde finales del siglo XIX, otro desafío al sistema surge en las periferias del país, demostrando, una vez más, la mala voluntad democrática de la oligarquía detentadora del poder. A partir de la defensa del particularismo institucional –el fuerismo– con el que se ha pretendido terminar tras el final de la última guerra carlista (1876), renacen culturas regionales vinculadas a los intereses de unas burguesías marginadas que no han encontrado una articulación económica de carácter moderno en el conjunto del Estado. Resurgen así con fuerza el regionalismo y los nacionalismos periféricos, sobre todo el catalán y el vasco.

A finales de esa década (1887) los miembros conservadores del Centre Català se unieron con los del Centre Escolar Catalanista para fundar la Lliga de Catalunya, y ya en abril de 1901 surgiría la Lliga Regionalista con el fin de disputar el poder de una forma eficaz a los partidos turnantes en el ámbito catalán. Son los padres políticos del nacionalismo conservador catalán (y en el fondo de los demás también). Al mismo tiempo, entre 1893 y 1895, Sabino Arana ha fundado el periódico *Bizkaitarra*, la sociedad recreativa Euskeldun Batzokija y, el día de San Ignacio de 1895, el Bizkai-Buru-Batzar, que constituye la forma inicial del Partido Nacionalista Vasco. El gobierno lanzará la represión contra ellos, aunque retrasada y matizada en el caso catalán.

Es precisamente en este ámbito donde se producirá la primera de las grandes crisis del reinado de Alfonso XIII. Incluso un historiador tan conservador como Seco Serrano afirma, de esta crisis de 1905-1906 (Crisis

catalana), que puso en entredicho «el civilismo y el teórico democratismo logrados hacia 1890 con el sufragio universal». La victoria de la Lliga Regionalista en las elecciones municipales de 1905 se celebró con un acto multitudinario en el Frontón Condal de Barcelona; esa celebración dio pie a que un dibujante, Junceda, publicase en una revista humorística, el semanario *¡Cu-Cut!*, una viñeta en la que, en la puerta del mencionado frontón, un florido oficial con espuelas y bigote preguntaba a un viandante: «¿Qué se celebra aquí, que hay tanta gente?». «El Banquete de la Victoria», contesta el aludido. Y el militar: «¿De la victoria? Ah, vaya, serán paisanos».

Que a los jefes militares españoles les irriten las aspiraciones políticas catalanas no es cosa nueva. Los oficiales de la guarnición de Barcelona quedaron muy enfadados por el «chiste» (o por el resultado electoral) y 300 de ellos asaltaron y destrozaron no solo la redacción del *¡Cu-Cut!*, sino también la de *La Veu de Catalunya* y la imprenta donde se editaba el semanario *En Patufet* (25 de noviembre de 1905). Pero no paró ahí el asunto, porque el «pundonor» de los agresores alcanzó una inmediata solidaridad entre amplios sectores del ejército, incluidos importantes miembros de su cúpula. Se alzaron voces indignadas solicitando que los delitos de ofensas a la Patria y al Ejército fueran conocidos por la jurisdicción militar, que se encargaría de ajustar las cuentas a los irrespetuosos. Ya ven ustedes que la «sensibilidad» de ciertos sectores españolistas al humor periférico no viene de cuando jóvenes independentistas catalanes quemaron papeles con el rostro impreso de Juan Carlos I, sino de mucho antes.

En junio de ese mismo año, se había iniciado un turno liberal con Montero Ríos como jefe de Gobierno. Ante el escándalo suscitado, el viejo político intentó la remoción de los capitanes generales que habían participado en la adhesión a los oficiales de Barcelona, y el castigo de los que se habían sumado a los desmanes. Empeño inútil, como casi siempre en España: su ministro de la Guerra, el general Valeriano Weyler, le advirtió que no podía garantizar la aplicación de medidas disciplinarias. Alfonso XIII también mimaba a sus oficiales y se consumó la maniobra con la dimisión de Montero Ríos y la aceptación de su rival en el Partido Liberal, Segismundo Moret, que estaba dispuesto a aceptar las reivindicaciones del Ejército. A principios de 1906, Moret haría aprobar la Ley de Jurisdicciones que estaría

en vigor hasta tres días después de proclamarse la Segunda República. Esta ley ponía bajo jurisdicción militar las ofensas orales o escritas a la unidad de la Patria, la bandera y el honor del Ejército. Como señaló otro colega de mi facultad, José Álvarez Junco, la ley constituía un verdadero estado de excepción en materia de prensa. Algunas cosas han cambiado mucho en nuestro país, otras ya ven que no tanto y, si no, que se lo pregunten a los editores de la revista satírica *El Jueves*.

POLÍTICOS AL SERVICIO DE LAS ÉLITES ECONÓMICAS Y CRISIS DE RÉGIMEN

Tras el agotamiento del turno liberal, volvieron los conservadores al poder con Antonio Maura a la cabeza. Maura era el defensor de las «mayorías silenciosas», de la «revolución desde arriba» y, cómo no, del «regeneracionismo», y demostró hasta la náusea las formas antidemocráticas de la vieja casta española. Tras llegar al poder orquestando unos comicios que le proporcionaron una mayoría aplastante, Maura sacó adelante una reforma electoral que introdujo el famoso Artículo 29 (que eliminaba el voto cuando solo se presentaba un candidato), el voto obligatorio con castigo en el caso de los funcionarios, nuevas exigencias mucho más duras para presentar candidatos y, además, no garantizaba el ejercicio del voto secreto. Como han señalado varios historiadores, entre ellos Teresa Carnero, la reforma electoral «representó un cierre de la fortaleza oligárquica».

Si a ello sumamos un proyecto de reforma de la Ley de Régimen Local que introducía concejales corporativos, no elegidos por el voto popular, y una Ley Antiterrorista cuyo artículo adicional suponía una discrecional suspensión de las garantías constitucionales, podemos hacernos cargo de hacia dónde avanzaba el impulso reformista del político conservador.

Maura fue el impulsor de la Liga Marítima Española, un *lobby* que, a imitación de la Liga Alemana, movía poderosos intereses. Su amistad con Claudio López Bru, marqués de Comillas, con el conde de la Mortera, con el de Moral de Calatrava y con el gran cacique de Palencia, Abilio Calderón, lo convirtieron, como dice Tuñón de Lara, en un gran comité de la oligarquía. Ya ven que los españoles llevan demasiado tiempo padeciendo a la casta.

El despotismo maurista terminaría, sin embargo, con los dramáticos acontecimientos conocidos como Semana Trágica de Barcelona, en el mes de julio de 1909. La Semana Trágica tuvo su origen, fundamentalmente, en la estúpida política española en Marruecos a partir del tratado firmado con Francia en 1904. Con un ejército de raíz colonial, pero macrocefálico, mal armado, mal avituallado, y con un sistema de reclutamiento completamente injusto, absurdas razones de prestigio unidas a los intereses de grupos económicos peninsulares y extranjeros (además de las conveniencias estratégicas de Gran Bretaña frente a Francia) embarcaron al país en una aventura en el norte de África en la que los sectores populares serían los grandes perjudicados.

Ya hemos mencionado que el reclutamiento obligatorio para el servicio militar podía ser evitado por los jóvenes acomodados mediante el pago de una cantidad en metálico, que obviamente no estaba al alcance de las clases trabajadoras. Solo los pobres iban a la guerra como soldados. Tras un ataque de importancia menor a las obras del ferrocarril minero que se tendía desde Melilla, la alarma cundió en la comandancia y en la Península, y el gobierno de Maura adoptó el peor de los expedientes: la movilización de los reservistas, antiguos soldados que ya habían cumplido un largo servicio militar y que habían vuelto a la vida civil incorporándose a sus trabajos, contrayendo matrimonios, etcétera. La convocatoria, sobre todo como protesta contra el reclutamiento, de una huelga general en Barcelona para el 26 de julio, precipitó los acontecimientos.

La represión que desencadenó el gobierno –más de un centenar de muertos, 1.500 detenciones y 1.725 procesos– culminó con la ejecución de tres obreros, un guardia de seguridad que se había sumado a la protesta y con el fusilamiento de Francisco Ferrer y Guardia, ajeno prácticamente a los acontecimientos, pero fundador de la Escuela Moderna y blanco de todos los odios de las derechas más clericales y reaccionarias. Si el 13 de octubre fue la ejecución, el día 18 el rey, presionado por el escándalo internacional que la ejecución había suscitado, retiró la confianza a Maura, llamando a los liberales al gobierno.

El frente parlamentario anti-Maura se había formado ya antes como consecuencia de su manejo dictatorial de la mayoría parlamentaria. Si el Partido Liberal había conseguido llegar al poder, a su izquierda se formó la Conjunción Republicano-Socialista, integrada por las fuerzas que

demandaban una transformación democrática real del sistema de gobierno. La Conjunción, que funcionó casi exclusivamente como una alianza electoral, no estuvo nunca libre de problemas y disensiones aunque siguió sirviendo para presentarse a las elecciones hasta que, en diciembre de 1919, el PSOE la abandonó definitivamente.

Una de las razones que impulsaban la Conjunción era la convicción de que el sistema turnista montado por Cánovas, además de completamente antidemocrático y perjudicial para el país, estaba haciendo aguas por todas partes. Tras casi dos años de gobierno del liberal Canalejas –quien, pese a dictar algunas normas sociales, no fue capaz de hacerlas cumplir y recurrió a la represión clásica en huelgas como la de 1911 o la de ferrocarriles– y casi uno del conde de Romanones –que perdió una cuestión de confianza por la Ley de Mancomunidades–, cuando decidió cambiar el turno, el rey, en lugar de llamar a Maura –que había declarado en 1909 su «implacable hostilidad» al Partido Liberal–, en medio de lo que se llamó «Conspiración de Biarritz», decidió elevar a Eduardo Dato a la Jefatura de Gobierno, produciendo una división entre datistas y mauristas paralela a la que se producía entre los liberales seguidores de Romanones y los de García Prieto. Ya no se trataba de partidos turnantes, sino de facciones y camarillas oligárquicas seguidoras de un jefe que repartía cargos y partidas del presupuesto. Cuando se produce una crisis de régimen, los cuchillos muestran sus brillos en las familias políticas y económicas del poder.

Por otro lado, a finales de 1910 los sectores anarcosindicalistas de Solidaridad Obrera, influidos por el sindicalismo revolucionario francés, deciden fundar una Confederación General del Trabajo –que, en los meses siguientes, cambiará su nombre al definitivo de Confederación Nacional del Trabajo (CNT)– con objeto de reunir a todas las sociedades obreras no adheridas a la UGT. Aunque la huelga general de septiembre de 1911, y sus consecuencias y represión, reducen a la clandestinidad durante tres años a la nueva central, su presencia será ya decisiva en la configuración de uno de los dos grandes sectores del movimiento obrero en España.

Mientras tanto, en el verano de 1914, con Dato en el poder, estalla la Primera Guerra Mundial, en la que España mantendrá su neutralidad, precisamente por su condición de potencia de segundo orden al margen de las grandes alianzas europeas. En el interior del país, además de la creciente división entre aliadófilos y germanófilos, es cada vez más patente la

incapacidad de los partidos turnantes y de los sucesivos gobiernos. Síntomas de la situación son la frecuencia de los largos periodos en que las Cortes permanecen cerradas o el hecho de que no se lograse aprobar ni una Ley de Presupuestos entre 1915 y 1920, prorrogándose sistemáticamente la de 1914.

Otra manifestación evidente de la incapacidad gubernamental es su fracaso a la hora de hacer frente a los nuevos problemas económicos que la guerra europea planteaba. La situación de neutralidad produjo grandes beneficios económicos sobre todo a los sectores industriales, pero también a los grandes propietarios agrícolas, sectores comerciales y del transporte. La entrada de divisas durante la guerra hará posible que se liquide gran parte de la deuda exterior y se logre la nacionalización de algunas importantes empresas extranjeras. Sin embargo, cuando cambió el turno, en noviembre de 1915, y Romanones se hizo con el poder, los intentos de su ministro Santiago Alba de crear un impuesto sobre beneficios extraordinarios chocarán con una oposición frontal dentro y fuera de la cámara, oposición dirigida por el líder de la Lliga, Francesc Cambó, que actuaba ahora como portavoz del capitalismo industrial y financiero de todo el país, y no solo del catalán –un dato que deben retener aquellos que albergan esperanzas en la actualidad respecto a que los poderes económicos catalanes y sus representantes políticos, a la hora de la verdad, sean capaces de anteponer su patria a su dinero.

Esa situación de bonanza económica derivada de la neutralidad en la guerra tuvo sobre la población un efecto ambiguo. Efectivamente, la inflación que producía tenía como efecto que, tanto en los sectores obreros con poca capacidad de resistencia sindical como en los dependientes de rentas fijas, la carestía de las subsistencias se hiciera agobiante. Las centrales sindicales UGT y CNT, en pleno periodo de crecimiento, no solo plantearon sus reivindicaciones, sino que fueron capaces de llegar a acuerdos entre ellas, como el que derivó en la huelga de 24 horas del 18 de diciembre de 1916, que resultó un éxito, o el manifiesto conjunto firmado por ambos sindicatos en marzo de 1917.

La filia de Romanones hacia los aliados provocó divisiones en su partido –Alcalá Zamora le tachó de contrabandista– y la desconfianza de Alfonso XIII quien, como dice Moreno Luzón, «proclive en los momentos iniciales a los aliados, giró durante la contienda a posiciones cuasi germanófilas». La

sustitución de Romanones en abril de 1917 por su rival en el partido, Manuel García Prieto, marcó una ruptura en el Partido Liberal tan profunda como la que afectaba al Conservador.

Uno de los sectores afectados por el alza de los precios era el estamento militar. La oficialidad del ejército, numerosa y mal pagada, se veía además afectada por los intentos de reforma del general Luque, quien proponía exámenes para los ascensos y una reducción de las plantillas ante las quejas por los bajos sueldos y los ascensos por méritos de guerra. En ese contexto, en 1916, comenzaron a surgir las Juntas de Defensa, especie de sindicatos de oficiales de baja y media graduación que, además de exigir cambios y mejoras, utilizaron una retórica regeneracionista denunciando las corrupciones gubernamentales y las lacras del caciquismo.

La protesta de las Juntas culminará en mayo de 1917 con el arresto en el Castillo de Montjuic de dos tenientes, tres capitanes, un comandante, un teniente coronel y, a la cabeza de todos ellos, del coronel Benito Márquez, su máximo representante. Sus compañeros lanzaron un manifiesto-ultimátum amenazando con pasar a la acción en el plazo de 12 horas si los detenidos no eran liberados, alcanzando la solidaridad inmediata de las Juntas de Artillería, Ingenieros e incluso de la Guardia Civil. Tras la intervención del rey a favor de las Juntas, García Prieto se vio obligado a dimitir, siendo sustituido por el conservador Eduardo Dato quien, con garantías constitucionales suspendidas y la censura de prensa incrementada, legalizó las Juntas de Defensa.

UNA DURA LECCIÓN PARA LA IZQUIERDA

Ante la asonada militar y la crisis política, las fuerzas democráticas creyeron llegado el momento de dar un vuelco a la situación, llegando incluso a la proclamación de la República que pusiera fin al viciado y caduco sistema de poder que venimos describiendo. Se impuso, sin embargo, la solución más templada, patrocinada por Cambó y los dirigentes de la Lliga, que patrocinaban la celebración de una Asamblea de Parlamentarios, abierta incluso a mauristas y a algunos sectores de la izquierda liberal, cuyo objeto sería reclamar al gobierno la apertura de una

Cortes Constituyentes que establecieran una nueva organización del Estado sobre bases autonómicas y resolviese los problemas económicos y militares.

Tras una primera reunión de los parlamentarios catalanes el 5 de julio en el Ayuntamiento de Barcelona, el 19 de julio de 1917 se reunían 68 parlamentarios de todo el país, de nuevo en Barcelona –solo acudieron algunos liberales de izquierda, los mauristas no aceptaron la invitación, decepcionando a Cambó y haciendo fracasar los mejores contactos con los militares junteros–, que, antes de ser disueltos por el Gobernador Civil, solicitaban Cortes Constituyentes y constituían tres comisiones que eran casi un gobierno en paralelo.

Fracasadas las alternativas conservadoras, al no estar comprometidos los apoyos de mauristas y junteros que Cambó propiciaba, la solución parecía venir de la izquierda: no hay que olvidar que, además de los republicanos, Pablo Iglesias estaba presente en la Asamblea de Parlamentarios y que, desde el año anterior, se iba fraguando una cada vez mayor unidad de acción entre los dos sindicatos. Ya en marzo de 1917 se había anunciado una huelga indefinida si no se adoptaban inmediatas medidas contra el paro y la inflación.

Una huelga ferroviaria, hábilmente provocada y manipulada por el propio gobierno, precipitó la situación y la huelga general comenzó el 13 de agosto propiciando duros enfrentamientos durante una semana y, en algunas zonas, como en Asturias, incluso durante un mes. Hubo cerca de 80 muertos, 156 heridos y 2.000 detenidos, según las cifras oficiales; el fiscal pidió pena de muerte para los miembros del comité de huelga, finalmente condenados a cadena perpetua; y en Asturias se perpetraron barbaridades a las órdenes del general Burguete, quien se propuso «cazar como alimañas» a los huelguistas.

Fue la declaración de la ley marcial y la resuelta actitud del Ejército –incluidos los quejosos junteros– lo que, de la manera más dura, puso fin a la huelga. Pero, en su fracaso, tampoco fue ajena la tibia actitud de los republicanos, sobre todo reformistas y radicales, y especialmente la actitud de Cambó y sus catalanistas de la Lliga, que se apresuraron a desvincularse de todo lo que tuviese cualquier atisbo de revolución social. Todos ellos, en diferentes grados, ofrecerían después sus servicios a la Corona. Los socialistas españoles aprendieron una dura lección y, poco después, se volatilizaría la Conjunción Republicano-Socialista.

No hubo, pues, nueva Constitución y el sistema logró subsistir seis años más, si bien el turnismo entre los dos partidos tradicionales ya nunca volvió a funcionar como antes. Ahora comenzó la época de los llamados gobiernos de concentración multipartidista o gobiernos nacionales que integraban a algunas de las figuras de los partidos que anteriormente habían permanecido al margen y que, a estas alturas, resultaban suficientemente «respetables» para la continuación del sistema oligárquico de dominación, como los catalanistas.

EL TRIENIO BOLCHEVIQUE Y EL FIN DEL TURNISMO

Los años de posguerra están marcados por el crecimiento y crisis de las organizaciones obreras. Son los años que muchos historiadores, haciéndose eco de la terminología que Juan Díaz del Moral utilizó como título del capítulo 10 de su famoso libro *Historia de las agitaciones campesinas andaluzas,* han denominado como «Trienio Bolchevique». Efectivamente, la repercusión de la Revolución de Octubre en la lejana Rusia, aquellos *Diez días que estremecieron al mundo* (como titulara su célebre libro John Reed), tuvieron una influencia crucial no solo en las organizaciones obreras socialistas y anarcosindicalistas, sino también en el conjunto de las oligarquías, que vieron concretarse al enemigo difuso contra el que tanto se habían defendido.

Tiene razón Gerald H. Meaker en su clásico libro *La izquierda revolucionaria en España,* cuando defiende que las divisiones producidas por la fundación de la Tercera Internacional afectaron profundamente tanto a la CNT como al PSOE-UGT. Lo que estaba en juego era la posible emergencia de un movimiento unificado y revolucionario de la clase obrera, y estas perspectivas se saldaron con un fracaso. El libro de Meaker es la explicación de este fracaso. Forcadell comparte esta opinión cuando señala lo prematuro de la escisión –en el PSOE– de los jóvenes del primer PCE, el Partido «de los 100 niños», y lo tardío de la escisión de los Terceristas del PCOE y su unificación con los anteriores, en un momento en el que el atentado contra Dato y el Desastre de Annual habían incrementado la represión y el reforzamiento de las clases dominantes frente al movimiento obrero. «Nos encontramos con la contradicción –dice– de que, a pesar del

entusiasmo que el ejemplo ruso hace nacer durante 1919 y 1920 entre los trabajadores españoles, de la innegable respuesta popular de sectores obreros y campesinos fuertemente radicalizados, en España no surge un Partido Comunista fuerte y estable, o, al menos, con las características del primer comunismo francés o italiano».

Meaker sostiene, además, que, sin negar de ningún modo la importancia de factores económicos, «se diría que dichos factores no fueron decisivos sino en conjunción con influencias ideológicas y políticas que tuvieron una importancia primordial en la determinación del momento y el alcance de los disturbios» […] «Jugaba más la esperanza que la desesperación –añade– y el movimiento huelguístico no fue solo de defensa para mantener las conquistas que la mentalidad española durante la Primera Guerra Mundial había proporcionado a los trabajadores, sino que estaba impregnado de las inmensas posibilidades que la Revolución rusa parecía haber abierto para los proletarios de todo el mundo.»

No es el momento de relatar aquí los acontecimientos concretos del periodo: la agitación campesina de 1918, la huelga de «La Canadiense» de marzo de 1919, la adhesión de la CNT a la Tercera Internacional a finales de ese año, el crecimiento del pistolerismo y la aplicación de la Ley de Fugas por el siniestro Severiano Martínez Anido, el atentado contra Dato, los congresos del PSOE de diciembre de 1919, junio de 1920 y abril de 1921 que terminarán con la escisión del partido, el proceso paralelo en la CNT tras el Congreso de la Concordia de diciembre de 1919, el Pleno de Lérida de abril de 1921 y la Conferencia de Zaragoza de junio de 1922. Pero lo que sí es cierto es que sus consecuencias están en el origen de la crisis final del régimen del turnismo, junto con otros factores que veremos.

Avilés Farré, en su libro *La fe que vino de Rusia. La revolución bolchevique y los españoles (1917-1931)*, reproduce las crónicas publicadas en *ABC* que remitía de Rusia su corresponsal Sofía Casanova. Esta señora, casada con un terrateniente polaco, calificaba a los judíos polacos de abyectos, ignorantes, fanáticos, usureros y supersticiosos. Tras entrevistarse con Trotski, la señora Casanova se hizo eco muy pronto de los que serían los fundamentos de la propaganda anticomunista que hablaba del contubernio judeomarxista hablando de «los rusos borrachos de sangre y los hebreos instigadores a la destrucción». En 1921, también desde *ABC*, su compañero Álvaro Alcalá Galiano apostillaba en el mismo sentido: «El

bolchevismo ruso deriva su fuerza del “judaísmo internacional” y está en relación con la alta banca judaica, cuyos “agentes israelitas” han provocado “chispazos de comunismo rojo” en casi todos los países». Los periodistas de nuestra derecha de hoy tuvieron, como se aprecia, buenos predecesores aunque, al pasar de la germanofilia a la americanofilia, han cambiado de parecer respecto a los judíos.

Forcadell ha señalado la importancia de la instrumentalización del mito bolchevique en el camino hacia la solución dictatorial del septiembre de 1923, insistiendo en que la utilización de la Revolución rusa por las fuerzas sociales y políticas que elaboran la salida militar, autoritaria y corporativa de la dictadura de Primo de Rivera, no es desdeñable. En el mismo sentido, Antonio Elorza sostenía, cuando todavía era él mismo, que «los efectos más profundos del llamado Trienio Bolchevique tuvieron lugar en el otro lado de la trinchera: desde el apagarse las ilusiones reformadoras de los intelectuales (caso paradigmático el de Ortega) hasta la generalización de una conciencia en la derecha –desde el Partido Conservador hasta el estamento militar– que tiende a identificar contrarrevolución con uso e institucionalización de recursos excepcionales de represión».

La dictadura de Primo de Rivera

El último gobierno del sistema turnista comenzó su andadura el 7 de diciembre de 1922. Lo presidía Manuel García Prieto, marqués de Alhucemas, jefe de una de las facciones liberales, y se trataba de un gobierno de concentración o coalición liberal. Es evidente que una de las principales causas del golpe de Estado que protagonizaría Primo de Rivera en septiembre de 1923 fue la cuestión de la exigencia de responsabilidades por el Desastre de Annual, acaecido en el verano de 1921, responsabilidades que alcanzaban a la cúpula del ejército e incluso al propio rey. Pero también es evidente, como señaló Shlomo Ben Ami, que hubo otros factores derivados de la política del gobierno de García Prieto que también inclinaron la balanza hacia la solución golpista: una anunciada política económica que no llegó a realizarse y el miedo de las oligarquías a lo que, en esa materia, pudiesen hacer Santiago Alba o Chapaprieta; reformas religiosas en la línea de lo ya intentado por Canalejas o

Romanones; proyecto de reforma del Senado haciéndolo más representativo; la escisión en 1922 del grupo «Acció Catalana» de la vieja Lliga, tras la fundación, poco antes, de «Estat Català» por Francesc Macià. Además de estos, no es factor desdeñable el incremento de la conflictividad social que se recrudecía tras la represión, entre otras razones por la creciente oposición a la carnicería de Marruecos, que daría lugar a la agitación del fantasma comunista al producirse episodios como la sublevación de tropas opuestas al embarque en Málaga, en agosto de 1923, con la condena a muerte y posterior indulto del cabo Sánchez Barroso, que dirigió el motín.

El 13 de septiembre de 1923, Primo de Rivera, con la complicidad del rey, dio su golpe de Estado poniendo fin al sistema político de Cánovas de partidos oligárquicos, de acuerdo en lo fundamental, que se alternaban en el poder. Lo que, como hemos visto, no era en absoluto un sistema democrático, aunque respetaba, de puertas para fuera, los formalismos liberales, se transforma en una dictadura militar con la Constitución y las Cortes suspendidas, una censura férrea, la disolución de todos los ayuntamientos y diputaciones provinciales y todo el poder en manos del dictador, asistido por una junta militar cuyos componentes no tenían inicialmente ni la condición de ministros.

Algunos historiadores han tratado con benevolencia a Primo de Rivera, casi siempre porque escribían desde la comparación con Franco, como es el caso de Madariaga, o, incluso, desde la izquierda, el propio Ramos Oliveira. Venían a decir que era un personaje vulgar y bastante indocumentado, pero que no se deshonró con la crueldad del tirano.

Shlomo Ben Ami, en su clásico estudio sobre la dictadura de Primo, es bastante más duro, poniendo de manifiesto lo que su régimen tuvo de antecedente directo de la dictadura franquista y la admiración que despertaba entre sus seguidores lo que estaba haciendo Mussolini en Italia. La dictadura primorriverista fue esencialmente antidemocrática en su nacimiento, su acción, sus transformaciones internas y sus intentos institucionales, hasta llegar a la propia disolución.

Suele hablarse de dos periodos de la misma: el directorio militar y el directorio «civil». En ambos, el poder personal de Primo es indiscutible. El primero, que se inicia con el golpe y dura hasta el 3 de diciembre de 1925, contó como miembros del directorio militar con otros generales como el

contralmirante Antonio Magaz, el general Gómez Jordana y, como subsecretario de Gobernación –continuaría con el directorio civil y sería también ministro de Gobernación con Franco–, con Severiano Martínez Anido, bien conocido por su papel como impulsor de la Ley de Fugas mientras fue gobernador civil de Barcelona hasta que Sánchez Guerra lo destituyó, en diciembre de 1922, tras un escandaloso simulacro de atentado contra sí mismo y por sus reiterados intentos, pero esta vez sin ningún tipo de simulacro, de asesinar al dirigente cenetista Ángel Pestaña.

Además de la disolución de ayuntamientos y diputaciones que hemos señalado y su sustitución por unos delegados gubernativos militares, las dos creaciones de este periodo inicial fueron el Estatuto Municipal, obra de Calvo Sotelo, y la creación de un partido único al servicio del dictador: la Unión Patriótica. El Estatuto Municipal, pese a su retórica autonomista y descentralizadora, resultó una norma a la medida del régimen dictatorial. El propio Javier Tusell, describiendo cómo el nombramiento de los alcaldes se realizaba en su totalidad desde el Ministerio de Gobernación, concluía que «cualquier propósito de regeneración quedaba por completo incumplido».

En abril de 1924 vio la luz, contando con la colaboración obligatoria de todos los gobiernos civiles, el nuevo partido único al servicio del dictador: la Unión Patriótica. El partido tenía algunos precedentes locales y regionales, pero fue el viaje de Primo y el rey en noviembre de 1923 a Italia, donde quedaron maravillados por Mussolini, lo que determinó extender su organización a toda España.

El 3 de diciembre de 1925 se constituyó el Directorio Civil. La esencia del poder militar no cambia, pero ahora se forma un gobierno que cuenta con ministros civiles, en un intento continuado de transformar lo que al principio se había anunciado como régimen transitorio en nuevas instituciones estables que dieran una vida continuada y a largo plazo al sistema dictatorial. Esta intención está detrás de las transformaciones institucionales que emprende la dictadura con la Asamblea Nacional Consultiva, la Organización Corporativa Nacional y el proyecto de una nueva Constitución.

El proyecto de convocar una Asamblea Nacional Consultiva se lanzó en un congreso de la Unión Patriótica en julio de 1926. Era, en palabras del dictador, el intento «de convocar a la Nación de acuerdo con sus clases representativas, o sea, universidades, industrias, comercio, trabajadores, en

suma, toda la España que piensa y trabaja». En realidad, se trataba de seguir el consejo que Mussolini había enviado a Primo de Rivera a través de su ministro Eduardo Aunós: el Parlamento, explicaba Mussolini, «es el traje que hay que lucir en la sociedad internacional». Entre el 11 y el 13 de septiembre de 1926 se celebró un fraudulento plebiscito que serviría de arranque para la formación de la nueva institucionalidad. La Asamblea no era en realidad un parlamento porque carecía de la facultad de legislar –eso correspondía al gobierno– y tampoco compartía la soberanía con el rey. Su función era la «información», la «controversia» y el «asesoramiento». De sus «diputados», unos serían los representantes del Estado, las provincias y los municipios, otros serían los corporativos representantes de «actividades», «clases» y «valores», y un tercer bloque serían los delegados de la Unión Patriótica. Shlomo Ben Ami dice que era «una anticipación casi completa de las Cortes de Franco».

Eduardo Aunós, ministro de Trabajo, montó los esquemas de la Organización Corporativa Nacional. Aunós había militado en la Lliga, llegando a ser secretario particular de Cambó. En 1914, su supuesta elección como diputado por la Seo de Urgel fue anulada por el Tribunal Supremo por demostrarse que había comprado el censo íntegro de Alós, intentándolo con tres pueblos más. Su fascistización progresiva lo llevó a terminar como ministro de Franco.

La Organización Corporativa Nacional era un montaje piramidal integrado desde la base por comités paritarios locales e interlocales, comisiones mixtas de trabajo, consejos de corporaciones y comisión delegada de los consejos de corporaciones. En realidad solo llegaron a funcionar los comités paritarios, y casi solamente como jurisdicción de litigios laborales y elaboración de contratos de trabajo. Los socialistas de la UGT, quienes, casi desde el comienzo, colaboraron con la dictadura, tendrían en ellos una participación destacada, hasta el punto de dar lugar a constantes quejas por parte de las organizaciones católicas, que criticaban los «privilegios de los socialistas».

El último intento de institucionalización de la dictadura fue el anteproyecto de Constitución de 1929 que pretendía consagrar una monarquía autoritaria, católica y conservadora de representación orgánico-corporativa. El propio Alfonso XIII no parecía ya dispuesto a continuar

apoyando al dictador en un proyecto que le restaba poder y consolidaba la situación de Primo de Rivera.

Durante todo este periodo, la disputa por la democracia se produce en el exterior del sistema. Ya hemos mencionado la actitud colaboracionista de la mayoría del PSOE y la UGT; solo determinadas figuras del PSOE, como Indalecio Prieto o Fernando de los Ríos, se opondrán a esta política, aunque al final de la dictadura son más los sectores socialistas que no están dispuestos a colaborar. En 1926, los diferentes grupos republicanos, aprovechando una conmemoración de la Primera República, constituyen una Alianza Republicana en la que están presentes Manuel Azaña, que representa a su grupo Acción Republicana, Lerroux por el Partido Republicano Radical, Marcelino Domingo por el Partido Republicano Catalán, Hilario Ayuso del Partido Republicano Federal y Roberto Castrovido en nombre de la prensa republicana.

También un sector del Ejército manifestó a partir de 1926 su oposición a la dictadura, mezclando reivindicaciones personales y corporativas con sentimientos antidictatoriales e incluso republicanos.

Los intelectuales y la universidad también fueron, mayoritariamente, contrarios a una dictadura que, en algunos casos, utilizó contra ellos duras medidas represivas como ilustran los casos de Unamuno, exiliado, o la ilegalización de la recién nacida Federación Universitaria Escolar y el expediente y expulsión de su dirigente, Antonio María Sbert, cuando los estudiantes radicalizaron su lucha contra las medidas que el ministro Eduardo Callejo quería imponer para favorecer las universidades privadas en manos de órdenes religiosas, como El Escorial o Deusto.

Finalmente, incluso entre algunos viejos políticos monárquicos que habían sido desplazados por la dictadura comenzó a aparecer un discurso democratizador que incluso apuntaba hacia un tibio republicanismo.

Agobiado por problemas económicos y políticos, debidos al malestar social y a las crecientes oposiciones que se manifiestan, Primo de Rivera decidió consultar por su cuenta con la cúpula militar en demanda de una confianza con la que ahora no contó: en sus respuestas, los generales reiteraron solo su fidelidad al rey y a cualquier gobierno que gozara de la real confianza. El 28 de enero de 1930, dos días después de la consulta, dimitió.

Los casi quince meses que transcurren hasta la proclamación de la Segunda República evidencian una descomposición creciente de la monarquía de Alfonso XIII, que había unido su suerte, indefectiblemente, a la del dictador. Los intentos del rey de regresar, controlada y lentamente, al sistema anterior con partidos turnantes y la vuelta a la Constitución de 1876, se saldaron con un rotundo fracaso. «El error Berenguer» fue el resonante título que Ortega y Gasset puso a este intento en un artículo periodístico que terminaba con las proféticas palabras *«delenda est monarchia»*.

García Delgado, remedando a Ortega, habla de «error Argüelles» refiriéndose al ministro de Hacienda del general Berenguer que practicó una política deflacionista que, en el contexto de la crisis, aumentó el paro y propició la caída de la inversión que ya venía produciéndose en el final del periodo anterior, con lo cual las tensiones sociales aumentaron mientras se aceleraba la descomposición política.

El 17 de agosto de 1930, en el domicilio social de la Unión Republicana de San Sebastián, se celebró la reunión que dio lugar al llamado Pacto de San Sebastián. Allí estaba la Alianza Republicana representada por Azaña y Lerroux y el recién fundado Partido Radical Socialista, pero también Acción Catalana, Acción Republicana de Cataluña, Estat Català y la Federación Republicana Gallega de Casares Quiroga. A estos se sumaban los grupos nacientes de antiguos monárquicos que habían creado el «grupo constitucionalista» y que más tarde integrarían la Derecha Liberal Republicana (Alcalá Zamora y Miguel Maura), y una serie de personalidades como Indalecio Prieto, Felipe Sánchez Román y Eduardo Ortega y Gasset. El PSOE y la UGT solo se sumarían al Pacto en el mes de octubre. Algo más tarde –ya en febrero de 1931– se creará, con la cabecera de Ortega, Marañón y Pérez de Ayala, la Agrupación al Servicio de la República.

De los firmantes del Pacto de San Sebastián, confluyendo con algunos sectores militares que se habían opuesto a la dictadura, surgió un comité revolucionario que preparó un desorganizado y prematuro intento revolucionario que cristalizaría en el pronunciamiento de Jaca (12 de diciembre de 1930), mientras no se daba en Madrid la huelga general que hubiera estado destinada a apoyarlo. La aventura se saldó con bastantes

muertos y con el fusilamiento, dos días después, de los capitanes Galán y García Hernández, considerados, desde entonces, mártires de la República.

El 14 de diciembre era también detenido el comité revolucionario que fue inmediatamente conducido a la Cárcel Modelo de Madrid. La crisis, sin embargo, se precipitó. En enero de 1931, Berenguer convoca elecciones a cortes ordinarias para el 1 de marzo, confiando en el mecanismo del encasillado mientras se contase con las autoridades municipales y provinciales. La oposición no estaba dispuesta a esos manejos y fueron declarando su rechazo primero los constitucionalistas, luego los republicanos y los socialistas, y finalmente los liberales monárquicos. Berenguer tuvo que dimitir.

Alfonso XIII intentó recurrir de nuevo a Santiago Alba, que no aceptó, y a Sánchez Guerra, que llegó a visitar a los miembros del comité revolucionario presos en la Modelo y que rechazaron cualquier oferta de colaboración. Recurrió entonces el rey al almirante Aznar, un individuo que, como dijo Fernández Almagro, «venía geográficamente de Cartagena y políticamente de la luna», quien, por fin, logró formar un gobierno de concentración monárquica con mauristas, liberales, conservadores y regionalistas. Este gobierno decidió convocar elecciones por el sistema tradicional (municipales: 12 de abril; provinciales: 3 de mayo y parlamentarias: 7 y 14 de junio), mientras un consejo de guerra juzgaba con suma benevolencia al comité revolucionario y decretaba su puesta en libertad.

La República

Las elecciones municipales del 12 de abril fueron suficientes y decisivas. Como dice Javier Moreno Luzón «todos concibieron las elecciones municipales del 12 de abril como un plebiscito sobre la monarquía». Los antagonistas, monárquicos y antimonárquicos, presentaban candidaturas unitarias, mientras el fervor republicano recorría el país. Sin embargo, el 5 de abril se anunciaron los resultados de la elección por el Artículo 29 (proclamación automática cuando solo existía una candidatura): los monárquicos suspiraban aliviados, pues por 1.167 concejales monárquicos solo había 194 republicanos. Con estimaciones de este carácter, el conde de

Romanones llegó a plantear la gran treta de valorar los resultados contando concejales. Basta un simple ejemplo, que ha sido utilizado en varias ocasiones, para demostrar lo fraudulento del argumento: Madrid capital, que tenía entonces 952.000 habitantes, elegía 50 concejales, mientras el resto de la provincia de Madrid, con 425.000 habitantes, elegía nada menos que 1.677 concejales. La misma diferencia se daba entre todos los pequeños pueblos y las ciudades.

El día 12, a media tarde, empezaron a llegar los resultados y, con ellos, la consternación se fue apoderando del Ministerio de Gobernación. Las actitudes de los ministros varían entre la aceptación resignada y el uso de la fuerza que propone La Cierva, pero el propio general Sanjurjo, director general de la Guardia Civil, afirmó que no respondía plenamente de la actitud de sus fuerzas. Romanones reflexionó que quizá «el máuser es un arma inadecuada contra el voto», pero esa noche la Guardia Civil disparó sobre una multitud reunida en torno al Palacio de Comunicaciones.

Ya a las 4 de la tarde, en la casa del pueblo, se desató el júbilo e incluso se izó una bandera roja. No era para menos: las candidaturas republicano-socialistas habían triunfado en 41 de las 50 capitales de provincia y en casi todas las grandes ciudades. La mayoría de los votos era claramente para candidaturas republicanas.

El día 13 hubo diversos movimientos. Hubo un intento de pacto con el comité revolucionario, proponiendo el gobierno que las elecciones a celebrar el 10 de mayo tuvieran el carácter de constituyentes. Pero el comité reclamó la entrega de poderes.

Al amanecer del día 14, se precipitaron los acontecimientos: los concejales electos de Eibar, apoyados por la población, proclamaron la República en el ayuntamiento. Esa mañana, en Madrid, hubo diferentes iniciativas. El conde de Romanones, autorizado por el rey, se entrevistó con Alcalá Zamora en la casa del doctor Marañón, después de un intento con Melquíades Álvarez para buscar alguna salida a la crisis. Esa tarde, a la una, siguiendo el ejemplo de Eibar, Companys proclama la República desde el balcón del Ayuntamiento de Barcelona y media hora más tarde, en la diputación, Macià proclamó el «Estado catalán que con toda cordialidad procuraremos integrar en la Federación de Repúblicas Ibéricas».

En Madrid, a las tres de la tarde, la bandera republicana ondeaba ya en el Palacio de Comunicaciones y a las cinco la República había sido

proclamada en Valencia, Sevilla, Zaragoza, San Sebastián, Huesca, La Coruña, Salamanca. A esa hora se reunían en palacio los allegados al rey. La Cierva y Cavalcanti todavía proponían la resistencia, pero Gabriel Maura tenía ya preparado el escrito de renuncia del rey, mientras Romanones se encargaba de los preparativos de la salida del monarca.

Los miembros del comité revolucionario, reunidos en la casa de Miguel Maura en la calle Príncipe de Vergara, salen a las seis y media en automóvil para llegar a la puerta del Ministerio de la Gobernación. Allí los guardias les presentan armas y, desde el balcón, proclaman la República. Al día siguiente *La Gaceta,* ahora de la República, publica la lista del nuevo gobierno, el nombramiento de algunos altos cargos, el Estatuto Jurídico del Gobierno (norma para regular su funcionamiento hasta la elaboración de una nueva Constitución) y una amplia Ley de Amnistía.

A la vista de la situación creada y dado el carácter plebiscitario que la opinión había otorgado a esas elecciones municipales, es evidente que la legitimidad democrática se impuso a la legalidad de un régimen agotado y corrompido que tampoco había dudado en saltarse su propia legalidad cuando lo consideró conveniente. Una importante dosis de audacia y la falta de respuesta de los mecanismos represivos, permitieron que la República llegara por segunda vez a España entre celebraciones y alegría popular.

No es el momento de exponer aquí la política reformista emprendida por el Gobierno Provisional de la República, continuada durante más de dos años, tras las elecciones a Cortes Constituyentes (28 de junio de 1931) y aprobación de la Constitución (9 de diciembre de 1931): basta mencionar las medidas de legislación social impulsadas por Largo Caballero, que no dejaron de provocar, sin embargo, reticencias en la CNT por lo que consideraban favoritismo hacia la central rival; las reformas militares de Azaña o las avanzadas medidas en materia de educación, mejorando el magisterio y creando numerosas nuevas escuelas. Es de destacar, sin embargo, la lentitud y la timidez con que fue abordado el acuciante problema de la reforma agraria: cuatro proyectos distintos se discutieron en las Cortes, para aprobarse finalmente, como dice Malefakis, el que «moderaba» los anteriores, que dio lugar a la Ley de Bases de la Reforma Agraria de 15 de septiembre de 1932. Su eficacia práctica fue muy escasa, comenzando a aplicarse desde el día 21, hasta que los acontecimientos del Octubre asturiano la dejaron totalmente en suspenso. La ley de 1935, obra

del ministro Velayos, fue una revisión tan profunda de la de 1932 que prácticamente la anulaba. No obstante, desde el triunfo electoral de las derechas, en las elecciones de noviembre de 1933, muchas de las normas sociales que afectaban a la agricultura habían comenzado a ser derogadas.

El triunfo de la República sorprendió a una derecha desorganizada y acostumbrada a los manejos desde el poder para fabricar a sus representantes. Sus resultados electorales en los comicios de junio de 1931 fueron muy modestos: Grupo Agrario (engloba Acción Nacional más agrarios específicos): 26 diputados; Derecha Liberal Republicana: 22; Vasco-Navarros (PNV+Tradicionalistas): 14; Liberal Demócratas (Melquíades Álvarez): 4; y Monárquicos: 1. En comparación, el Partido Republicano Radical solo, que quería aparecer como una fuerza centrista y poco después se desvincularía de la coalición republicano-socialista, sumaba 90 diputados. No obstante, la reorganización de la derecha comenzó pronto, partiendo de los grupos católicos nucleados por el diario *El Debate* de Ángel Herrera y Acción Católica Nacional de Propagandistas, y buscando la base de masas del sindicalismo agrario católico. Nació así, pocos días después de la proclamación de la República, el partido Acción Nacional que, en abril de 1932, debió cambiar su nombre por Acción Popular. Acción Popular irá creciendo con rapidez con sus juventudes, organizaciones femeninas, etcétera, siempre bajo la influencia eclesiástica y sirviendo de punta de lanza en los enfrentamientos clericalismo-laicismo que proliferaron en estos primeros años.

La amalgama inicial de Acción Popular terminó dividiéndose entre los llamados monárquicos puros, que pasarían a formar Renovación Española, y los «accidentalistas» que, aunque seguramente en su mayoría eran verdaderos monárquicos de corazón, aceptaban la línea impuesta por el Vaticano, consistente en aceptar el «accidentalismo» de las formas de gobierno. Estos últimos, bajo el liderazgo indiscutible de Gil Robles, se fusionaron con otros pequeños grupos en marzo de 1933 para formar la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), primer gran partido de masas de la derecha española, como demostrarían en las elecciones de noviembre de ese año.

Esta derecha católica mucho más organizada y poderosa es la que dará la batalla cuando, en los primeros meses de 1933, se discuta la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas que, aunque firmada –pese a

todas sus reticencias– por Alcalá Zamora el 2 de junio de ese año, en la práctica no llegaría a entrar en vigor. La pastoral de 25 de mayo de los obispos españoles fue el primer paso hacia una ruptura abierta, confirmada el 3 de junio por la encíclica de Pío XI *Dilectissima nobis*. Pero no solo de la naciente CEDA vienen los problemas del gobierno de Azaña: los radicales de Lerroux se habían convertido en los voceros de los propietarios tanto agrarios como industriales que clamaban contra la Reforma Agraria y las medidas sociales de Largo Caballero desde el Ministerio de Trabajo.

En la izquierda tampoco escasearon los problemas en este primer bienio republicano. La CNT se dividió entre quienes defendían una postura de espera y cierta contemporización con la República (firmantes del «Manifiesto de los Treinta» con dirigentes tan conocidos como Peiró y Pestaña) y los seguidores de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) y otros grupos de acción que se hicieron con la dirección sindical lanzándose a diversos levantamientos revolucionarios, como el de enero de 1932 en la cuenca del alto Llobregat y el de enero de 1933 que dio lugar a los asesinatos cometidos por las fuerzas del orden en Casas Viejas. La represión de estas acciones, con muertos, encarcelamientos y destierros, así como el favoritismo hacia la UGT, cuyo líder más importante era ministro de Trabajo, colocó a la central anarcosindicalista en abierto conflicto con el gobierno republicano-socialista.

No faltó siquiera un intento de pronunciamiento militar al viejo estilo, encabezado por el general Sanjurjo y apoyado por militares monárquicos, aristócratas y sectores de la extrema derecha en agosto de 1932.

Las elecciones a miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales, elecciones de segundo grado, por concejales de las regiones, dieron a Alcalá Zamora la ocasión que venía buscando para promover un gobierno exclusivamente de republicanos, prescindiendo de los socialistas, como venían reclamando Lerroux y otros. Solo cinco vocales pertenecían a la mayoría gubernamental, por trece de las distintas oposiciones. Pese a que Azaña ganó una «cuestión de confianza» en el Congreso, Alcalá Zamora se la negó, abriendo la crisis. Se intentó primero un gobierno de concentración republicana presidido por Lerroux que no obtuvo la confianza de la Cámara. Luego, otro con Martínez Barrio a la cabeza, cuyo solo objeto era disolver el Parlamento y presidir la convocatoria de nuevas elecciones.

Las elecciones del 19 de noviembre de 1933 supusieron un vuelco en la composición del Parlamento. Con un sistema electoral que favorecía las coaliciones y los acuerdos, se formasen estos en primera o segunda vuelta, la desunión de la izquierda pasaría una clara factura. Como dice Tuñón de Lara, «sabemos que las izquierdas fueron divididas, con raras excepciones (Bilbao, Málaga capital) y las derechas unidas; la unión de estos se hizo extensiva a los radicales, en algunas circunscripciones desde la primera vuelta (Badajoz, Zamora, Jaén) o en la segunda (Granada, Córdoba)». Pero, además, la ley electoral concedía una clara prima a las mayorías, mientras las minorías solo se reservaban el 20 por 100 de los puestos, lo que daba lugar a un juego de alianzas en la segunda vuelta que todavía desequilibraba más la proporción entre sufragios y diputados elegidos. La CEDA obtuvo 115 diputados, los radicales 102, mientras que los socialistas descendían a solo 61, Acción Popular a 5 y la ORGA a 6. Solo Esquerra mantendrá su dominio en parte de Cataluña.

La CNT, que había pedido la abstención en esas elecciones, respondió a la victoria de las derechas con una nueva intentona revolucionaria que se saldó con 89 muertos, más de 150 heridos, multitud de detenciones y torturas, cierres de periódicos y locales sindicales. Así comenzaron los sucesivos gobiernos radicales desde el 18 de diciembre de 1933 hasta octubre del año siguiente. La CEDA, con mas diputados, consintió en apoyar parlamentariamente al Partido Radical en una primera fase, siempre que fuese haciendo sus políticas, para, en un segundo momento, plantearse el acceso al poder con serio peligro para las instituciones republicanas.

En esos meses, el Partido Radical apoyado por la CEDA concedió la amnistía a los sublevados con Sanjurjo en 1932, derogó la Ley de Términos Municipales y vació de contenido los jurados mixtos, atacó la autonomía catalana recurriendo la Ley de Cultivos, que favorecía a los arrendatarios, y la vasca anulando parte de los conciertos económicos, y, por supuesto, impidió la aplicación de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas. Quien verdaderamente tenía las riendas del poder era la CEDA, como demostró la escisión del ala izquierda del Partido Radical, encabezada por Martínez Barrio, que arrastró a 19 diputados y numerosos cuadros directivos de provincias. Como ha dicho Nigel Townson «la escisión no solo desplazó el partido hacia la derecha, sino que, además, lo volvió más dependiente de la derecha».

Uno de los grandes objetivos de la CEDA era la reforma constitucional: una reforma que, en la práctica, suponía la liquidación de la Constitución de 1931. El problema es que la propia Constitución establecía que cualquier reforma durante los primeros cuatro años de vigencia requería el acuerdo de los dos tercios de la cámara, mientras que después de esa fecha (9 de diciembre de 1935) sería bastante una mayoría absoluta. Se trataba, entonces, de ir adquiriendo el poder poco a poco mediante la entrada de algunos ministros cedistas en el gobierno.

La fascistización de la derecha española y la Revolución de Asturias

Mientras tanto, la situación social se endurecía por momentos (aumento del paro, bajada de salarios, numerosas huelgas en la industria y huelga general campesina de junio de 1934…). Todos los historiadores coinciden en la afirmación de la influencia de los acontecimientos europeos del momento; avance general de los fascismos, llegada al poder de Hitler en enero de 1933, ilegalización de los partidos y organizaciones obreras en los meses siguientes, aplastamiento de la socialdemocracia austriaca por Dollfuss –modelo de la derecha católica para Gil Robles–, etcétera. La CEDA, y sobre todo sus juventudes, imitan las actitudes y la fraseología fascista en sus concentraciones en El Escorial o Covadonga, mientras comienzan los actos violentos de los grupos fascistas, como el fundado en octubre de 1933 por el hijo del dictador Primo de Rivera.

Es en este contexto en el que se producen los acontecimientos de octubre de 1934. La entrada de tres ministros de la CEDA en el gobierno fue el detonante. No es este el lugar para relatar lo sucedido, que está suficientemente estudiado en numerosas monografías, aunque sí creo que se debe rechazar para siempre esa interpretación que considera Octubre como preludio y justificación de la Guerra Civil, pretendiendo colocar en el mismo plano una insurrección obrera que una sublevación del ejército de un Estado. Comparto la tesis de Manuel Tuñón de Lara en el sentido de que, de nuevo, se trató de una defensa de la legitimidad republicana contra una infiltración fascista en el poder, aunque para defender esa legitimidad hubiese que saltarse la legalidad. Es indudable que los mineros asturianos creían estar haciendo la revolución, pero es mucho más dudoso eso por

parte de los dirigentes socialistas que habían encomendado nada menos que a Indalecio Prieto la redacción del programa.

El significado de Octubre de 1934, y las responsabilidades por los hechos, dieron lugar, como dice Helen Graham, a un gran debate, tanto dentro de las propias filas socialistas como entre estos y los comunistas: «De un modo crucial, la insurrección de Asturias mostró al resto del partido el fracaso de la izquierda socialista. Los caballeristas no estaban en absoluto preparados para dirigir una revolución que, al parecer, venían organizando desde hacía casi un año. Por otra parte, la asunción de responsabilidades, o, precisamente, la no asunción de las mismas, fue otro flanco débil de Largo Caballero que aprovecharon tanto los comunistas como los "centristas" del PSOE. Efectivamente, mientras Largo rechazaba públicamente su responsabilidad en los sucesos asturianos, el PCE asumía dicha responsabilidad pese a su reciente integración en las Alianzas Obreras, especialmente en la de Asturias, con lo que aparecerá como adalid de la unidad de las organizaciones proletarias según el modelo asturiano. Prieto, desde su exilio, defenderá la acción de octubre como defensa de la República amenazada y, más tarde, ya durante la guerra, cuando se produzcan los peores enfrentamientos con Largo, tanto él como sus partidarios volverán a repetir contra él los cargos de no estar a la altura de la situación antes de octubre, en octubre y después de octubre».

Por razones diferentes, en Cataluña, el 6 de octubre Companys y su gobierno de la Generalitat improvisaron, asimismo, un alzamiento y proclamaron, otra vez, la República Catalana dentro de la República Federal. Pero sin el apoyo de la CNT, el movimiento estaba condenado; el general Batet, después de un cañoneo, lo controló en pocas horas, deteniendo al gobierno de la Generalitat –excepto a Dencàs, que logró huir por las alcantarillas– y encarcelándolo. La consecuencia política inmediata fue la anulación de la autonomía catalana, cuyo Estatuto estuvo suspendido desde octubre de 1934 hasta febrero de 1936.

La reacción y los deseos de venganza de la CEDA por los sucesos de octubre no tuvieron límites. Provocaron la caída de varios gobiernos como presión para que se ejecutasen las penas de muerte que se estaban dictando hasta que finalmente, en mayo de 1935, lograron tener mayoría en un gobierno con Lerroux a la cabeza: 3 ministros radicales, 2 agrarios y 5 de la CEDA, con Gil Robles en el Ministerio de la Guerra, donde pudo

desarrollar una labor que la mayoría de los historiadores reconoce que hizo posible la sublevación militar de julio de 1936.

Ahora la «rectificación» iba en serio: nueva Ley de Reforma Agraria (Velayos) que dejaba la anterior en vía muerta, represión y despidos de trabajadores sindicados, nombramiento de altos mandos militares a los futuros golpistas… En esta coyuntura surgió el «escándalo del estraperlo» –sobornos para obtener licencias para una supuesta ruleta científica…– en el que estaban implicados familiares y «amigos políticos» de Lerroux. Alcalá Zamora manejó esta información, que provocó la dimisión de los radicales implicados, pero impidió a Gil Robles formar gobierno porque, como escribió en sus memorias, «nunca había hecho una explícita declaración de plena adhesión al régimen». Tras los breves gobiernos de Chapaprieta y Portela Valladares, quedaron convocadas nuevas elecciones para el 16 de febrero de 1936.

La victoria del Frente Popular

No sin dificultades, la izquierda trataba de agruparse electoralmente desde hacía bastantes meses. La llamada «Circular Vidarte», elaborada por el ala «centrista» del PSOE, era un buen análisis de las posibilidades electorales y presentaba los acontecimientos de octubre como una defensa de la democracia. Como dice Helen Graham, «abrió en el PSOE el debate sobre la posibilidad de resucitar una alianza entre republicanos y socialistas, pero al mismo tiempo provocó las críticas de Largo y sus seguidores, nada partidarios en principio de nuevas alianzas con los republicanos». Finalmente, tras el mitin de Azaña en la explanada de Comillas, donde, como dice Tuñón de Lara, se reunieron 400.000 personas que no acudían a ver al jefe de un partido republicano, sino al símbolo de todas las izquierdas, los caballeristas realizaron una total rectificación, aceptando la propuesta de Azaña, pero añadiendo como condición la incorporación a la coalición electoral del PCE y sus organizaciones sindical y juvenil, que estaban en conversaciones de fusión con los socialistas. Otra vez Helen Graham señala que, «al tratar de incorporar al PCE a la alianza, Largo buscaba evitar que Prieto lo desbordara por la derecha, al tiempo que se aseguraba que el PCE no hiciera lo mismo por la izquierda».

No respondió, pues, el Frente Popular en España a las consignas lanzadas por Dimitrov en el VII Congreso de la Internacional Comunista, sino a una necesidad sentida tras el fracaso de las elecciones de noviembre de 1933 y a las consecuencias de un octubre asturiano que había dejado las cárceles llenas. Se elaboró un programa moderado y los caballeristas impusieron la condición de apoyar al gobierno de republicanos en caso de victoria, pero sin participación ministerial de ninguna clase.

Las derechas también procuraron un frente unido después de laboriosas negociaciones y, tras una reñida y apasionada campaña electoral, se celebraron por fin las elecciones, que dieron la victoria al Frente Popular. No hubo una gran diferencia de votos entre los dos bloques, pero esta vez los mecanismos electorales que premiaban a las mayorías funcionaron a favor de la izquierda. Desde el mismo momento del triunfo electoral, una parte importante de los derrotados comenzó a pensar en el golpe militar como solución.

Azaña formó gobierno el 19 de febrero aplicando el programa electoral: amnistía, aceleración de la reforma agraria, restitución de Companys al frente de la Generalitat y reimplantación del Estatuto, masivas construcciones escolares, reingreso en la empresa de los trabajadores despedidos por razones políticas o sindicales, etcétera. Entre tanto, se preparaba la conspiración militar articulada en torno a la Unión Militar Española, encabezada por Sanjurjo desde Portugal y coordinada por Emilio Mola. El movimiento lo conducían los militares y lo financiaba la oligarquía, mientras establecían contactos con el fascismo italiano.

Se produjo entonces lo que se ha considerado como un doble error: las Cortes depusieron a Alcalá Zamora y elevaron a Azaña a la presidencia de la República, marginando de alguna forma de la vida política al hombre capaz de sacar adelante el proyecto político de la izquierda. Cuando Azaña ofreció a Indalecio Prieto la posibilidad de encabezar el gobierno, la izquierda caballerista, mayoritaria en el grupo parlamentario, impidió que se realizase esta posibilidad. Azaña tuvo entonces que recurrir a su correligionario Casares Quiroga, quien gobernó entre el miedo al golpe de Estado de los militares –aunque en varias ocasiones infravaloró el peligro real que existía– y el miedo a lo que consideraba subversión revolucionaria por parte de las fuerzas obreras que, en la práctica, se reducía a puro radicalismo verbal.

No había ningún complot comunista que preparara una revolución en España, como se encargó de demostrar, ya en 1963, Herbert R. Southworth con abundantes pruebas. Este «mito de la cruzada de Franco», que fue abundantemente utilizado por la propaganda derechista durante la guerra y posteriormente por toda una serie de publicistas del franquismo, sigue siendo resucitado por algunos nostálgicos con insistente frecuencia.

La apertura de los archivos soviéticos y de la Komintern ha confirmado que no existían los supuestos planes revolucionarios para España. Elorza y Bizcarrondo dicen en *Queridos camaradas. La Internacional Comunista en España 1919-1939* (1999) que Dimitrov y Manuilski, lo que hace suponer que también Stalin, pensaban que la situación española en la primavera de 1936 no se encaminaba, en absoluto, a una ruptura revolucionaria, sino más bien a un golpe militar de la reacción. Daniel Kowalski, en *La Unión Soviética y la Guerra Civil española*, llega a la misma conclusión tras el examen de numerosos documentos de la época: «El Kremlin nunca presagió ni precipitó el estallido de la guerra civil».

Como dice Fontana, «para que el barril explote hace falta la chispa o el detonador. Lo malo es que se suele confundir la chispa con el combustible. La chispa, lo coyuntural, es esa primavera de 1936, sus violencias, sus huelgas, sus iglesias quemadas, incluso sus crímenes políticos y la creciente agresividad de Hitler y Mussolini, la conspiración de los generales y la adhesión de organizaciones de extrema derecha… Coyuntura importante, es verdad. Pero lo verdaderamente estructural, los motivos profundos, son que desde 1931 las élites o minorías que habían tenido el poder económico y político se encontraban momentáneamente privados de poder político (no del económico). En el 33, y sobre todo en el 34, esa oligarquía recupera la mayoría de –si no todas– las palancas del mando institucional».

Tras las elecciones de febrero de 1936, esa oligarquía perdía otra vez el poder político, pero esta vez la situación era mucho más seria que en 1931, ya que ahora sí se veía amenazado su poder económico. Aparecerán los discursos que confunden la salvación de la patria con intereses de clase y la voluntad de recuperar el poder al precio que fuera.

Nuestra guerra: primera batalla de la Segunda Guerra Mundial

A partir del 18 de julio de 1936, la disputa por la democracia se efectuó con las armas en la mano. Los defensores de la República, con todas sus divisiones y contradicciones, peleaban no solo por la libertad y la democracia en su país, sino en el mundo entero. Hoy esto es patente para la mayoría de los estudiosos, quienes, aun reconociendo las específicas circunstancias españolas, reconocen que nuestra Guerra Civil fue la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial en la que los aliados se enfrentaron al fascismo.

La actitud de las potencias «democráticas» no respondió, sin embargo, a esa realidad. Es bien conocido el proceso que llevó a lo que la historiografía mundial ha llamado la «farsa de la no intervención». Francia, en un primer momento, se había mostrado receptiva a la solicitud de compra de armas por parte del gobierno de la República, solicitud que estaba, además, amparada por un tratado bilateral. No podemos olvidar que el gobierno francés del momento era un gobierno de Frente Popular. No obstante, tras una rápida visita del jefe de ese gobierno, el socialista Léon Blum, a Londres, el gobierno francés cambia repentinamente de actitud y el consejo de ministros del 25 de julio anuncia la decisión de no intervenir en el conflicto español y cancelar cualquier envío de armas y municiones al gobierno de Madrid. Durante el mes de agosto se produjeron los acuerdos y declaraciones fundamentales, aunque, como dice Avilés Farré: «El Acuerdo de No Intervención consistió, finalmente, en un conjunto de declaraciones de distintos gobiernos europeos, hasta un total de 27, distintos en sus detalles y que nunca se combinaron en un tratado único».

Es tradicional encuadrar la «no intervención» dentro de la política de apaciguamiento que practicaron las potencias occidentales frente a la agresividad de los países fascistas desde el rearme de Alemania y su abandono de la Sociedad de Naciones en 1933, la conquista de Abisinia por Italia o la militarización de Renania ordenada por Hitler en 1936. Pero, como dice Javier Iglesias en *Stalin en España. La gran excusa*, había mucho de anticomunismo en esa postura. El ascenso de Hitler al poder había determinado un claro cambio en la política exterior soviética, que llegó a firmar un tratado de ayuda mutua con Francia el 2 de mayo de 1935. La pretensión soviética era establecer algún tipo de colaboración con las democracias occidentales para oponerse al bloque de Estados compuesto por Alemania, Italia y Japón, pero esto era un anatema para el tradicional

anticomunismo británico. Ya Anthony Eden ha dicho que el pacto francosoviético rompía los acuerdos de Locarno y era importante desviar la agresividad alemana hacia la Unión Soviética. Denis Smyth ha escrito: «El anticomunismo instintivo de los estadistas británicos y la doctrinaria antipatía de muchos políticos franceses hacia cualquier conexión soviética frustraron la intención de Stalin de formar una alianza de potencias antifascistas. Ello debió resultar paradójico a un político comunista como Stalin, que estaba dispuesto a subordinar los imperativos ideológicos a las exigencias de la *realpolitik*, o, al menos, a hacerlos compatibles con esta». Francia y Gran Bretaña pagarían cara, a partir de septiembre de 1939, su equivocación, pero, para entonces ya había sido derrotada la República española, y lo volvería a ser a partir de 1945, cuando la victoria de los aliados en la Guerra Mundial despertara la esperanza de los demócratas españoles en que un régimen como el franquista, nacido con el apoyo de las armas de Hitler y Mussolini, no podría mantenerse en el mundo de posguerra que se dibujaba.

La sublevación militar fascista en España abrió a los dirigentes soviéticos nuevas perspectivas en esa búsqueda de una alianza antifascista con las «democracias» occidentales. Esa es una de las principales razones de la intervención soviética a favor de la República, como han dejado claro los estudios de Ángel Viñas sobre nuestro conflicto. Pero se impuso el anticomunismo y el miedo al coco soviético. También Paul Preston ha señalado este fenómeno cuando escribe: «La represión salvaje de las revoluciones de Alemania y Hungría después de la Primera Guerra Mundial, la destrucción de la izquierda italiana por obra de Mussolini, el establecimiento de dictaduras en España y Portugal, e incluso la derrota de la huelga general en Gran Bretaña, habían formado parte de ese proceso que prosiguió con el aplastamiento de la izquierda en Alemania en 1933 y Austria en 1934. Desde una perspectiva más amplia, el miedo y el recelo hacia la Unión Soviética habían determinado en gran medida la diplomacia internacional de las potencias occidentales a lo largo de los años veinte y, de manera todavía más acusada, en los años treinta. La rápida tolerancia mostrada hacia Hitler y Mussolini en el terreno internacional era una señal tácita de aprobación de su política hacia la izquierda y hacia el comunismo en particular».

El terror

Tras la derrota, la lucha por la democracia se produce desde el exilio –un exilio indignamente tratado por las democracias occidentales y dividido por enfrentamientos internos– y la clandestinidad más absoluta en el interior de un país donde las cárceles y los campos de trabajo están llenos y se fusila a mansalva a los derrotados de la guerra y a cualquiera que intente cualquier tipo de reorganización de las fuerzas políticas derrotadas.

La represión tenía una dimensión preventiva y disuasoria; se trataba de aterrorizar para enmudecer y paralizar y, de esta forma, someter absolutamente a la población desafecta. Desde el inicio de la guerra, además de las decenas de miles de fusilados en caminos y descampados sin más procedimiento que el de los disparos, los franquistas se dotaron de instrumentos legales represivos de carácter leonino: el Bando de la Junta de Defensa Nacional de 28 de julio de 1936 definía el concepto de «rebelión militar» como una especie de justicia al revés y que estuvo en vigor hasta 1969; la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, que juzgaba hechos cometidos desde 1934 e incluso las «actitudes pasivas»: establecía multas, incautaciones, inhabilitaciones profesionales, etcétera… y hasta 1966 no se aprobó el Decreto que declaraba extinguidas las responsabilidades políticas; la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo de marzo de 1940, con penas de entre 12 y 30 años por la mera pertenencia a estas organizaciones o a sus ramas y núcleos auxiliares; las Leyes de Seguridad del Estado de 1941 y 1942, etcétera.

También se ejerció la represión con la depuración y la censura. Una ley de 10 de febrero de 1939 establecía el proceso de depuración de los funcionarios públicos para asegurar una administración fiel, separando a los desafectos y, sobre todo, para repartir entre los vencedores el botín de los puestos públicos, mientras se celebraban exámenes y oposiciones «patrióticos». En abril de 1938 se dictó una Ley de Prensa que se mantendría en vigor hasta 1966 y establecía la censura previa, mientras la difusión de noticias radiofónicas se reservaba en exclusiva a Radio Nacional («el parte»).

Pese a toda esta represión, incluso desde el propio campo de Albatera, en Alicante, hubo intentos de reorganización por parte de las fuerzas derrotadas: algunos cenetistas y jóvenes libertarios lograron organizarse y,

todavía en 1939, lograban sacar el periódico *Ruta*. No obstante, van cayendo sucesivamente en manos de la policía: Masó Riera, secretario general de la CNT clandestina, es fusilado a finales de 1939; Pallarols, secretario general posterior, un poco más tarde.

También en 1939 serán fusiladas las conocidas como «Las Trece Rosas», así como otro buen número de jóvenes que habían intentado reorganizar las Juventudes Socialistas Unificadas en Madrid. Un poco más tarde se producirá el intento de reorganizar el PCE por parte de Heriberto Quiñones, Luis Sendín, etcétera, que no solo serán torturados y fusilados por los franquistas, sino que sufrirán también la condena de la dirección de su partido en el exilio. Sucesivos militantes comunistas enviados al interior por la dirección serán también detenidos y fusilados.

La resistencia fundamental en estos primeros años vino dada por los grupos armados que se «echaron al monte» para huir de la cárcel y los fusilamientos, y que fueron conformando una guerrilla que, tras la fracasada incursión del Valle de Arán, se irá organizando hasta alcanzar su mayor operatividad entre 1945 y 1948, llegando a constituirse importantes agrupaciones guerrilleras como la de Levante, Asturias y Galicia-León.

En octubre de 1944, mientras se realizaba la tentativa del Valle de Arán, se constituía en Madrid una Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, formada por Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido Republicano Federal, PSOE, UGT, CNT, a la que meses más tarde se incorporó el PCE. Este intento de ofrecer una imagen de unidad a los aliados, que ya iban ganando la Guerra Mundial, se completó en agosto de 1945 con la constitución de un gobierno republicano en el exilio presidido por José Giral, al que se incorporó en 1946 un representante del PCE. Pero no se obtuvo el reconocimiento de las potencias vencedoras, salvo de algunos países de la Europa Oriental entre los que no estaba la Unión Soviética.

Esta cierta unidad de las fuerzas democráticas duró poco. Indalecio Prieto arrastró al PSOE, y Llopis se vio obligado a dimitir como presidente del gobierno republicano en el exilio, con lo que dicho gobierno perdía una parte muy importante de su representatividad. El PSOE iniciaba entonces su andadura de contactos con las fuerzas monárquicas insatisfechas con el franquismo, contactos patrocinados por el ministro de Exteriores británico Ernest Bevin, y que culminarían en el llamado Pacto de San Juan de Luz

(agosto de 1948). Sin embargo, al mismo tiempo que se alcanzaba este acuerdo, Juan de Borbón se entrevistaba con Franco en el yate *Azor* y llegaba a un acuerdo con él que traicionaba totalmente lo pactado con los socialistas.

En el interior, mientras, se producían acciones como la huelga general de Manresa, el 27 de enero de 1946, para conseguir la retribución de las horas perdidas por los cortes eléctricos. Hubo un llamamiento conjunto de un comité clandestino de UGT y CNT y, caso insólito, por primera vez patronal y autoridades se vieron obligados a ceder, aunque hubo numerosas detenciones y posteriormente despidos de los obreros más activos.

Más importante fue todavía la huelga de Bilbao y sus alrededores del 1 de mayo de 1947. Llegaron a parar 50.000 obreros enfrentándose a las draconianas medidas policiales del gobernador civil. Finalmente, el exceso de optimismo que en los días posteriores siguió llamando a la huelga, y la brutalidad policial, terminaron con esta acción todavía no suficientemente adaptada a los métodos de una dictadura totalitaria.

LA CONSOLIDACIÓN DEL FRANQUISMO

Los años cincuenta fueron años de consolidación del franquismo, avalado por el reconocimiento de las potencias occidentales (revocación del acuerdo de la ONU de 1946, celebración del XXXV Congreso Eucarístico en Barcelona, acuerdos con los EEUU…). La oposición, perdida la esperanza de un claro apoyo internacional, perdió fuerza. Como exponen Carme Molinero y Pere Ysàs: «La CNT conservó algunos grupos de militantes aunque con escasa actividad y, además, sufriendo continuamente los efectos de la división interna alimentada en el exilio. Por su parte, el PSOE y la UGT quedaron reducidos a pequeños núcleos, localizados sobre todo en Asturias y el País Vasco, muy cerrados en sus estructuras clandestinas, con lo cual la renovación de la militancia quedó prácticamente limitada a su círculo social más próximo».

El PCE había llevado a cabo un cambio táctico de abandono de la lucha armada guerrillera para pasar a acciones políticas vinculadas a reivindicaciones inmediatas y penetración en el tejido sindical. A partir de 1956 comenzaron a verse los resultados de esta nueva táctica, tanto en el

campo obrero como en el estudiantil, aunque acciones como la «jornada de reconciliación nacional» de 1958 y la «huelga general pacífica» de 1959 se saldaron con un fracaso. Al mismo tiempo, y tras el V Congreso de 1955, había empezado a aplicarse lo que se denominó «política de reconciliación nacional».

También en los años cincuenta aparecen nuevas organizaciones de oposición al régimen: tras 1956, y a partir de jóvenes católicos que se habían aproximado al marxismo, nace el Frente de Liberación Popular, conocido como «el Felipe», y, en 1959, jóvenes nacionalistas vascos, algunos de ellos vinculados anteriormente a las juventudes del PNV, dan lugar al nacimiento de ETA.

La década de los sesenta se inicia con un nuevo impulso por parte del movimiento obrero. La renovación de los convenios, introducidos con muchas limitaciones en 1958, y, en algunos casos, la negociación de los primeros, va a hacer madurar la situación conflictiva en Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa. El 7 de abril de 1962 se inicia una huelga en la mina *Nicolasa* –propiedad de Fábrica de Mieres– que se extiende poco después a toda la cuenca del Turón, llegando a 60.000 mineros en huelga el día 23. La última semana de abril se suma a la huelga todo el sector del metal de Bilbao y su ría, y pronto la huelga tiene repercusiones en todas las zonas mineras e industriales del país. El 4 de mayo se declara el estado de excepción en Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa. En estas huelgas de la primavera de 1962, cambia la manera de organizarse de la clase obrera y sus modos de enfrentarse al poder; el periodo que va de 1962 a 1967 es el de total despegue de CCOO. El PCE –con unos 5.000 afiliados dentro del país, según cifras de la CIA– desempeñará un papel fundamental en este despegue de un nuevo movimiento sindical nacido de la práctica de la lucha de clases en los centros de trabajo. Por primera vez en la historia de España, los comunistas se implantan sólidamente en el movimiento sindical.

La represión del régimen no cesa. En 1959 se ha dictado la Ley de Orden Público; en 1962 se reprimen brutalmente las huelgas y manifestaciones obreras y, tras suspender el Artículo 14 del Foro de los Españoles, se dictan penas de destierro contra los participantes en el llamado «Contubernio de Múnich»; en 1963 se fusilaba a Julián Grimau por supuestos hechos de la Guerra Civil y se daba garrote a los anarquistas Francisco Granados y Joaquín Delgado por unos atentados a edificios oficiales en los que, como

se ha demostrado, no estuvieron en absoluto implicados. Ese año se creaban, también, el Juzgado y el Tribunal de Orden Público, y se reprimían las protestas de intelectuales, con José Bergamín a la cabeza, que denunciaban las torturas a los mineros por la conflictividad laboral.

En el final de la década la movilización obrera y estudiantil crece, pese a la sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 1967 que considera a CCOO como «una filial del Partido Comunista de España tendente a la violenta destrucción de la actual estructura del Estado Español».

En el mes de julio de 1968 se declaró el estado de excepción en la provincia de Guipúzcoa, y el 2 de agosto ETA atentaba contra Melitón Manzanas, uno de los jefes de la Brigada Social. El estado de excepción se extendió a todo el país. El año siguiente continúa con incidentes graves como el asalto al rectorado de la Universidad de Barcelona, que demuestra la potencia del movimiento estudiantil donde han surgido organizaciones como el Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios de Madrid o el Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Universitat de Barcelona, la Federación Universitaria Democrática Española, etcétera. En este contexto se produce el asesinato, que la policía quiere hacer pasar por un suicidio, del estudiante Enrique Ruano. La detención de sacerdotes entre julio y septiembre, en Vizcaya, evidencia un conflicto con un sector de la Iglesia que también comienza a enfrentarse al franquismo. En esas fechas ya han nacido, además, diferentes grupos a la izquierda del PCE que desempeñarán un importante papel de oposición en los últimos años del franquismo: el Partido Comunista de España (marxista-leninista, PCE m-l), el Partido Comunista de España (Internacional, PCE i) luego Partido del Trabajo de España (PTE), la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) fundada en 1971, etcétera.

En el comienzo de la década siguiente el rosario de muertos por la represión policial continúa. Tres huelguistas de la construcción muertos en julio de 1970; en septiembre de 1971, otro muerto también en una huelga de la construcción; en marzo de 1972, tres obreros muertos en la huelga de La Bazán en Ferrol, etcétera. 1970 es el año del Consejo de Guerra de Burgos, celebrado finalmente en diciembre, contra los miembros de ETA considerados responsables del atentado contra Manzanas. Las protestas arreciaron en el interior y también en el extranjero. Aunque se dictaron nueve penas de muerte para seis acusados, finalmente la presión popular

arrancó el indulto, pese a haberse declarado de nuevo el estado de excepción primero en Guipúzcoa y luego en toda España.

Los últimos años del franquismo continúan siendo de intensa represión; desde el juicio 1001 hasta los fusilamientos de tres militantes del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y dos de ETA, el 27 de septiembre de 1975, menos de dos meses antes de la muerte del dictador. El búnker franquista ha comenzado su movilización, mientras la oposición, pese a la creación de la Junta Democrática en julio de 1974, no logra alcanzar la unidad, especialmente por los recelos respecto al liderazgo del PCE por parte de un PSOE que había celebrado su Congreso de Suresnes en octubre, y también por parte de los sectores más moderados de la oposición. Finalmente, el 20 de noviembre de 1975 muere, en la cama de un hospital de Madrid, uno de los mayores asesinos del siglo XX: Francisco Franco.

La Transición

A partir de la muerte de Franco comienza el periodo que ha dado en llamarse Transición Democrática, ese fenómeno por el que el sistema de poder establecido por los vencedores de la Guerra Civil se transforma sin que se alteren demasiado buena parte de sus condicionantes fundamentales. El poder económico, los aparatos del Estado y la dirección de los mecanismos institucionales continuaron en las mismas manos en que habían estado durante la larga noche de la dictadura.

Dentro de la historiografía de la Transición, se pueden distinguir diferentes «explicaciones» de los acontecimientos que dieron lugar a los cambios producidos en ese paso del régimen franquista a la democracia formal que se inaugura con la Constitución de 1978 y que continuará con la transformación del entramado jurídico prolongándose durante algunos años más. David Ruiz agrupaba las diferentes explicaciones en cuatro grandes grupos: 1.º) Un primer grupo que defiende lo que llama teorías economicistas: para ellos, la Transición española proviene, sobre todo, de un componente de modernización económica, siendo las transformaciones iniciadas en los años sesenta las que llevarían inexorablemente a la necesidad de un cambio político. 2.º) En segundo lugar, aparecen las explicaciones que centran su atención en el equilibrio de las fuerzas

políticas en liza, que determinaría que los reformistas del régimen y la oposición democrática llegaran a pactar un cambio desde arriba. 3.º) En el tercer grupo, incluye a las que él llama interpretaciones genético-materialistas, más interesadas en el trasfondo social del proceso de cambio y en la conflictividad de clases, centrándose, con especial atención, en el periodo comprendido entre 1973 y 1978. 4.º) Por último, menciona aquellas explicaciones que insisten en el contexto internacional de la Guerra Fría, que determinaría un proceso de cambio en el país controlado por las potencias occidentales.

Álvarez Junco, por su parte, sintetiza también en cuatro grandes grupos las interpretaciones que se han hecho de la Transición española: 1.º) En primer lugar, sitúa la que define como «visión socioestructural»: lo ocurrido en la Transición sería una especie de «revolución desde arriba», en la que una burguesía nueva y reformista nacida del propio desarrollo capitalista habría impulsado un cambio, beneficiándose más que nadie del mismo. El objetivo prioritario de esta burguesía habría sido desactivar la protesta obrera, objetivo que consiguió sobre todo a través de los Pactos de la Moncloa. 2.º) En segundo lugar, coloca el «modelo funcionalista», cuya visión presenta a la «democracia» como consecuencia directa de la modernización. Aquí sitúa a historiadores como Santos Juliá; se trata de un grupo muy parecido al que David Ruiz denomina «economicista». 3.º) Como tercer grupo, aparecen las «teorías subjetivas», que tanto impacto han tenido en las explicaciones para consumo de la televisión, considerándose, por lo visto, como las más aptas y las que más pueden calar en el imaginario popular. Aquí se destacan sobre todo las personalidades de Juan Carlos I y de Adolfo Suárez como motores de la Transición y, un poco menos, a Felipe González y Santiago Carrillo. Estas explicaciones alcanzan también rango de «teoría» al basarlas en las explicaciones sociologistas de Linz y en la importancia de las élites y los actores políticos y sociales. Dentro de este grupo aparecerán nombres tan prestigiosos entre algunas élites conservadoras como Raymond Carr o Juan Pablo Fusi. 4.º) Menciona Álvarez Junco, por último, lo que llama «teoría político-estructural», que centra su atención en la debilidad de los actores y la fuerza del Estado, resaltando cómo un giro político de esa envergadura se hizo sin crisis general del Estado: el franquismo sucedió a su fundador en el contexto de una sociedad desmovilizada.

Naturalmente, entre las diferentes aproximaciones concretas a la historia de la Transición existen combinaciones y mezclas de las diferentes «teorías» expuestas, y unas explicaciones no excluyen necesariamente otras. Pienso que son las explicaciones basadas en la historia social las que mejor se aproximan a los fenómenos que se han dado en llamar «Transición», sin que naturalmente excluyamos el papel de los «actores» de la «alta política» o los factores internacionales para explicarnos nuestro pasado más reciente. La historia se hace siempre desde el presente y para explicar el presente, y es a partir de estos planteamientos como se concluye que nuestra Transición no fue la única posible, ni mucho menos la mejor de las transiciones posibles.

Historiadores como Carme Molinero y Pere Ysàs destacan el protagonismo de las reivindicaciones democráticas de amplios sectores de la sociedad, que llegaron a condicionar las opciones de una parte significativa de las élites dirigentes. También Ferran Gallego ha sostenido que las cosas no tuvieron que ocurrir necesariamente como ocurrieron. O Xavier Domènech, que defiende que fueron precisamente las movilizaciones las que imposibilitaron cualquier proyecto de continuidad del régimen, proyecto que indudablemente existía en las cabezas de algunos de sus más heroicos protagonistas. En esta línea se sitúa también Juan Andrade Blanco, en su tesis doctoral convertida en libro por Siglo XXI de España sobre *El PCE y el PSOE en (la) transición*.

Desde el punto de vista de la «cronología de la Transición», el análisis que más me convence es el de Xavier Domènech. Atendiendo a lo que afecta al cambio político «desde abajo», arranca del año 1962, cuando emerge en nuestro país un movimiento obrero capaz de plantear una conflictividad sostenida que amplía el ámbito de lo posible dentro del franquismo. En segundo lugar, desde 1970, después del duro estado de excepción de 1969, la confrontación con el régimen deja de ser meramente política porque empiezan a confrontarse modos de vida completamente diferentes. En un tercer momento, que abarca desde la muerte de Franco hasta 1977, los movimientos sociales, con su acción, hacen inviables los proyectos de una nueva reforma desde dentro del franquismo, imponiendo una agenda política al régimen que determinará su desaparición. Por último, a partir de 1977, la configuración de los movimientos sociales pasará a ser más una consecuencia que una causa del proceso de cambio político,

cuando este inició su preinstitucionalización, al mismo tiempo que la crisis económica comenzaba a diezmar ese tejido social que sustentaba los movimientos sociales.

En las dos últimas fases, dentro de un momento de equilibrio inestable, se produjo lo que Jaime Pastor llamó «una Transición muy desigual», en la que el poder de las élites, utilizando el chantaje del golpismo y las propias debilidades e impaciencias de las fuerzas de izquierda, se quedó con la capacidad de iniciativa. A la muerte de Franco, ya existía un movimiento obrero de dimensiones y organización respetable, un movimiento obrero de un nuevo tipo que figuraba como punta de lanza de un antifranquismo que abarcaba también un conjunto de movimientos sociales en proceso de expansión (estudiantes, movimiento vecinal, profesionales…). Durante los primeros meses de 1976 la movilización política y social creció extraordinariamente, como resultado tanto del esfuerzo organizativo realizado por los grupos antifranquistas, como por la propia disponibilidad para la movilización que generaban las expectativas de cambio. Según datos de la Organización Sindical Española (el «Sindicato Vertical»), en 1975 hubo 500.000 huelguistas y 10 millones de horas de trabajo perdidas. En 1976 los huelguistas se habían elevado a 3.600.000 y el número de millones de horas perdidas, a 110. Desde el gobierno se intentó hacer frente a estas movilizaciones con la Ley de Relaciones Laborales de 1976.

No obstante, estas cifras no nos pueden hacer olvidar, como recuerdan Ferran Gallego y Jaime Pastor, las grandes desigualdades que existían entre las dinámicas de movilización que se producían en el País Vasco, Cataluña o Madrid y las mucho menores, o casi inexistentes, en otras zonas del Estado.

Pese a este auge del movimiento obrero, se dio además, en 1976, un doble fenómeno que no podemos obviar. Por un lado, la UGT, que estaba renaciendo, rechazó un proyecto constituyente de unidad sindical, sobre todo porque era consciente de su falta de estructura organizativa y experiencia dentro de las empresas en comparación con lo que eran las CCOO del momento. UGT contó con aliados estratégicos y coyunturales en ese momento; por un lado, la discriminación represiva que se ejerce desde el gobierno, que autoriza la celebración del XXX Congreso de la central sindical socialista en abril de 1976, mientras continúa la persecución de los militantes de CCOO en la clandestinidad. Por otro lado, es fundamental el

apoyo que los socialistas reciben del extranjero, fundamentalmente de los sindicatos alemanes, la CIOLS, la «Fundación Ebert», etcétera.

Al mismo tiempo, CCOO entraba en un proceso para adaptar su organización al sindicato institucionalizado que propiciaba la legalización. Este proceso llevará a la escisión del Sindicato Unitario, vinculado a la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), de la Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores, patrocinada por el Partido del Trabajo, y de otros grupos. Así, a mediados de 1976, la división sindical era un hecho que no pudieron cambiar algunas acciones unitarias como la creación, en septiembre de ese año, de la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS) que convocó la huelga general del 12 de noviembre, pocos días antes del referéndum de la Ley de Reforma Política y que no fue precisamente un éxito.

Mientras esto sucedía con el movimiento sindical, se producía un fenómeno aparentemente contrario entre los principales grupos políticos de oposición. El 26 de marzo de 1976 se produjo la unificación, en un nuevo organismo llamado Coordinación Democrática, de las dos plataformas unitarias que se habían formado en 1974; la Junta Democrática, que integraba al PCE, CCOO, Partido Socialista Popular (PSP), PTE, Partido Carlista e independientes; y la Plataforma de Convergencia Democrática, formada por el PSOE, PNV, Izquierda Democrática, Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) y otros. La discriminación represiva intentó destruir esta frágil unidad. Así, mientras el PSOE celebró su Congreso en Madrid el 5 de diciembre de 1976 con presencia de dirigentes socialistas internacionales, se detendrá a Santiago Carrillo poco después para que pasara su última temporada de cárcel en Carabanchel.

El 30 de octubre de 1976 se formó la Plataforma de Organismos Democráticos, que integraba en «Coordinación Democrática» a la Asamblea de Cataluña y otros organismos unitarios del País Valenciano, Baleares, Galicia y Canarias, así como a grupos menores de tendencia liberal o socialdemócrata. «La exigencia de alcanzar acuerdos entre organizaciones políticas cada vez más heterogéneas, tendió a debilitar las posiciones políticas de los sectores procedentes del antifranquismo más combativo.» Esto es lo que Xavier Domènech llama ser «arte y parte»: la tensión para el PCE entre ser el principal partido que pretendía representar a las clases populares y los mismos sueños de su militancia, y la voluntad de

ser, a su vez, el principal defensor de la unidad antifranquista, en una concepción extremadamente amplia de esa unidad.

Suárez se hizo con el poder el 3 de julio de 1976 y pareció empezar a apoyar de alguna forma una pequeña parte de las propuestas de la oposición, obviando claramente otras y, desde luego, reservando al poder político constituido tanto el control como el protagonismo del tránsito; es decir, Suárez tomó la iniciativa y marcó el ritmo del proceso de transición, demostrando la virtud de ser un gran corredor político. La estrategia de Suárez, evidentemente, respondía a la capacidad de movilización que estaban demostrando los sectores populares y tenía el objetivo de desactivar parte del apoyo que estaban obteniendo las organizaciones antifranquistas. Pero así fue como se produjeron las primeras medidas de amnistía, los contactos con la oposición, etcétera. Siguiendo los consejos de Torcuato Fernández Miranda, optó por concentrar las medidas reformistas en una sola ley, para lo que dio garantías al Ejército, a la Iglesia y sobornó a los procuradores franquistas. Así nació la Ley de Reforma Política.

Tras el éxito del referéndum de la Ley de Reforma Política (15 de diciembre de 1976) frente al que solo el PCE y los grupos a su izquierda hicieron un verdadero esfuerzo propagandístico llamando a la abstención, la oposición solo planteaba dos exigencias básicas: la legalización de todos los partidos y unas normas electorales mínimamente aceptables. En este último tema, a pesar de la desproporcionalidad (cuatro senadores por provincia, sobrerrepresentación de las provincias pequeñas, etcétera)[1], el acuerdo no fue demasiado difícil. La gran dificultad, por el contrario, radicaba en la legalización del PCE. Finalmente, tras los asesinatos de los abogados de Atocha y la actitud contenida adoptada por el PCE, las reuniones entre Suárez y Carrillo, la celebración el 2 de marzo de 1977 de una «cumbre eurocomunista», etcétera, se producirá la legalización el 9 de abril de 1977, en plena Semana Santa.

Las renuncias a que se vio obligada a someterse la dirección del PCE (aceptación expresa de la monarquía y la bandera monárquica, unidad de España, aceptación de una ley electoral que claramente le perjudicaba, etcétera) son lo que Jaime Pastor llama una «Transición asimétrica», que implicaba la renuncia a una «ruptura» clara con la dictadura y admitir el inicio de un proyecto constituyente en condiciones favorables para el bloque dominante. No debemos olvidar de aquella experiencia que aquel

que establece las reglas del juego en la disputa política, tiene todas las de ganar, y en nuestra Transición esas reglas no las marcaron los demócratas.

Este proceso se completaría con los resultados que arrojaron las elecciones del 15 de junio de 1977, elecciones viciadas no solo por el sistema electoral acordado, sino también porque la Unión de Centro Democrático (UCD) utilizó con total descaro el poder institucional del que convoca, y porque algunos partidos no pudieron concurrir con sus verdaderas siglas. Tras las elecciones, el PCE no quiso abandonar su intento de ser «arte y parte» y comenzó a propugnar, para no perder protagonismo, una política de concentración nacional que le parecía precursora de un gobierno de ese carácter. Se trataba, pues, de continuar con la política anterior, pero ahora en un contexto mucho más desfavorable y que daría lugar a mayores concesiones, como las que se plasmaron en los Pactos de la Moncloa. Que a día de hoy haya todavía prominentes dirigentes del PCE y de IU (Izquierda Unida) que reivindiquen con orgullo aquella estrategia y que sean incapaces de hacer una mínima autocrítica, dice mucho de las torpezas y miopías de unos dirigentes que hace tiempo deberían haber entregado la dirección de su organización a una generación de jóvenes mucho más dotados para entender las posibilidades políticas de una crisis de régimen.

Los Pactos de la Moncloa (octubre de 1977) fueron un doble acuerdo entre los partidos, apoyados luego por CCOO y UGT, el primero sobre «un programa de reforma y saneamiento de la economía» y el segundo «sobre el programa de actuación jurídica y política». Los asalariados soportaron el peso de la crisis, mientras el gobierno incumplía la mayoría de las medidas compensatorias (sistema financiero, política agraria, educativa, de vivienda y urbanismo, etcétera).

La consecuencia de esa actitud fue la conversión del famoso «consenso» –recordemos que, a lo largo de 1978 se fue gestando, con el mismo espíritu, nuestra vigente Constitución– en ideología, como dice Ferran Gallego. Hay que destacar, a propósito de ello, la actitud de una prensa muy influyente *(El País, La Vanguardia…)* que apoyó fervientemente esa evolución, pese a lo que tenía de elitismo de camarillas y «desencanto» de las esperanzas que había abierto el proceso de cambio.

Los modestos aumentos del PCE en las elecciones generales y municipales de 1979 hicieron que la dirección persistiera absurdamente en

el error hasta llegar a la casi destrucción del partido en la década de los ochenta. No creo que se trate de «una traición a la clase obrera» como cierta propaganda izquierdista se empeña en seguir acusando. El PCE, como dice con acierto Xavier Domènech, estuvo en una línea parecida a la que tuvieron el PCI o el PCF (Partido Comunista Francés) en los momentos inmediatos al fin de la Segunda Guerra Mundial. Con los italianos compartía, además, eso que Perry Anderson llama «instinto estratégico conservador»; un instinto que sus dirigentes, salvo excepciones notables como Julio Anguita, han mantenido a lo largo de los años.

Creo que, además de las enormes dificultades que existieron, se pudo cometer un error de fondo en la apreciación de las alternativas que existían; el mantenimiento de una opción de resistencia hubiera tenido amplio eco en grandes capas de nuestro pueblo.

Pero como señala Juan Carlos Monedero en su imprescindible *La Transición contada a nuestros padres:* «El *consenso* se encargaría de encauzar esas demandas de manera funcional para un sistema que tenía como intención principal una nueva restauración borbónica que garantizase la inserción de España en el ámbito europeo al menor coste empresarial y financiero posible». Habría que esperar al 15M para que buena parte de ese *consenso* saltara por los aires. Dice Juan Andrade Blanco, citando a Ernst Bloch, que en las luchas del pasado hay un «excedente utópico» que puede nutrir nuestras luchas actuales; quizá sea ese el verdadero enfoque que hay que dar hoy a las luchas de la Transición española en nuestra tarea de disputar la democracia.

[1] Puede verse al respecto el libro que escribí junto a Juan Carlos Monedero *Que no nos representan. El sistema electoral español,* en el que explicamos las claves y finalidades de un sistema electoral diseñado por franquistas.

III
CRISIS
La economía es política

Introducción. El Partido de Wall Street

Si para algo ha servido la crisis económica es para hacer visible, a todas luces, un proyecto político de clase cuyos orígenes arrancan en los años setenta. Aquel proyecto globalizador puso a los poderes financieros en la cúspide de la pirámide del poder mundial. El multimillonario Warren Buffett expresaba el éxito de este proyecto de manera cristalina al decir abiertamente que sí existía la lucha de clases y que la suya iba ganando.

Poco después de ser elegido presidente de los EEUU, Bill Clinton se reunía con su equipo de economistas, que le alertaba sobre la urgencia de reducir el déficit público para calmar a los mercados de bonos. Con una sinceridad digna de elogio Clinton dijo: «¿Pretenden decirme que el éxito del programa económico y de mi reelección dependen de la Reserva Federal y de un puñado de mercaderes de bonos?». Con la citada afirmación el presidente de EEUU, el hombre más poderoso del mundo (según los medios de comunicación), estaba reconociendo que en su país mandaban las finanzas. David Harvey llama a ese poder «el Partido de Wall Street».

El Partido de Wall Street es un partido en cierto modo leninista; no solo manda en Estados Unidos, es un partido de clase con vocación internacional.

El Partido representa a aquellos que viven en el ático del sistema económico. Es el que favoreció en los Estados Unidos las hipotecas *subprime* que sirvieron para desahuciar a millones de estadounidenses. Encabezado por el secretario del Tesoro y exdirector ejecutivo de Goldman Sachs, Henry Paulson, fue el partido que dio un golpe de Estado *blando* en Washington, obligando al gobierno norteamericano a inyectar miles de millones de dólares de los ciudadanos en el sistema bancario. Es el partido en el que milita Angela Merkel, el que controla el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el FMI. Es el partido que fija planes de ajuste estructural en países periféricos y programas de recortes en el sur de Europa. Fue el partido que diseñó el Tratado de Maastricht, sus criterios de

convergencia y el Pacto de Estabilidad, y el que hoy impulsa las negociaciones entre Europa y EEUU para el «Acuerdo Trasatlántico sobre Comercio e Inversión» (el TTIP).

Este partido lleva activo desde mucho antes de que estallara esta crisis y ha mantenido siempre una línea política precisa: consolidar el poder de las finanzas. El Partido de Wall Street fue el que obligó a México a rescatar a sus bancos en 1982 aplicando una máxima que los europeos del sur conocemos hoy muy bien –«privatizar los beneficios y socializar los riesgos»– y el que hizo secretario general de su sección en aquel país a Carlos Slim –el hombre más rico del mundo– que, a principios de los noventa, pudo privatizar el sistema mexicano de telecomunicaciones. Entre los ilustres funcionarios del Partido de Wall Street en las últimas décadas destacan Margaret Thatcher, que aplastó al movimiento obrero liderado por los mineros en Reino Unido; Augusto Pinochet, que hizo lo propio con el gobierno de la Unidad Popular en Chile a costa de miles de muertos; o Ronald Reagan, que diseñó un sistema fiscal en EEUU que concentraba toda la presión sobre las familias pobres y de clase media al tiempo que libraba a los ricos de pagar impuestos. Este partido fue el que favoreció la deslocalización de la producción industrial para aumentar los beneficios a costa de mano de obra barata y sin derechos.

El Partido de Wall Street también tiene funcionarios en España, entre los que destacan prominentes gobernantes (algunos con carnet del PP y otros con carnet del PSOE o de Convergència i Unió [CiU]) que pasan de los consejos de administración de las grandes empresas a los consejos de ministros y viceversa. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, es una destacada funcionaria de este partido; antes de dejar la presidencia (dando un paso atrás para coger impulso) logró convencer a su camarada Sheldon Adelson para hacer negocios juntos en Madrid; «yo haré que te forres y tú me financiarás la campaña como has hecho en EEUU». Así funciona el Partido.

Los funcionarios del Partido de Wall Street tienen mucha más conciencia de clase que las gentes que no viven en el ático del sistema. Saben mirarse al espejo, son conscientes de sus intereses, de su proyecto político, y saben que su patria es su dinero y sus privilegios.

En este capítulo repasamos la gran contrarrevolución protagonizada por el Partido de Wall Street, desde el estallido de la crisis en EEUU hasta su

extensión a Europa, así como sus bases estructurales europeas y sus consecuencias recientes en la provincia española. Los medios de comunicación suelen llamar a esa contrarrevolución «crisis económica»; los movimientos sociales la llaman «estafa».

UNA CRISIS GLOBAL

Cuenta David Harvey en *El enigma del capital* que, tras el estallido de la crisis financiera en 2008, la reina de Inglaterra preguntó a los investigadores de la London School of Economics cómo era posible que no hubieran previsto lo que iba a ocurrir. Tras meses de estudio para responder a Su Majestad, los economistas de la prestigiosa institución solo pudieron reconocer que no habían tenido en cuenta suficientemente los «riesgos sistémicos». Para Harvey, narrar esta anécdota es una manera de saborear la pírrica victoria que ha representado esta crisis para los marxistas, que siempre señalaron que las crisis son consustanciales al sistema de organización de la economía propio del capitalismo. En el epílogo de este iluminador libro, Harvey concluye como empezaba, señalando que «en la teoría marxista (a diferencia de lo que sucede en la miope teoría económica neoclásica o financiera) el riesgo sistémico alude a las contradicciones fundamentales de la acumulación de capital».

Sin embargo, esta crisis, que muchos han tildado de «la madre de todas las crisis», tiene características muy particulares que la distinguen de otras anteriores y que permiten pensar en la apertura de estructuras de oportunidad para que puedan darse cambios importantes en un sistema que vive lo que Manolo Monereo llama una transición geopolítica «cuyo fundamento es la redistribución sustancial del poder político a nivel global». Aunque es todavía imposible determinar las consecuencias de esa transición sobre el conjunto del sistema, es seguro que los historiadores en el futuro asumirán que el inicio del siglo XXI estuvo marcado por una crisis económica de dimensiones gigantescas. Eric Hobsbawm identificaba en 2010, poco antes de morir, cinco cambios determinantes en la historia mundial: el desplazamiento del centro económico del Atlántico Norte al sur y al este de Asia; la crisis global del capitalismo; el fracaso del proyecto hegemónico de los EEUU; la emergencia de los BRICS (Brasil, Rusia,

India, China y Sudáfrica) y el debilitamiento de la autoridad de los Estados nacionales.

Según Joseph Stiglitz, economista neokeynesiano premio nobel en 2001, la caída de Wall Street habría significado para el fundamentalismo de mercado (lo que se conoce como neoliberalismo) lo que la caída del Muro de Berlín para el comunismo.

Todo empezó en 2006 con el aumento de los desahucios en barrios humildes de algunas ciudades de EEUU. Se trataba, al fin y al cabo, de afroamericanos, migrantes latinoamericanos y madres solteras. ¿A quién podía importarle esa gente? Sin embargo, en el verano de 2007 los desahucios empezaron a afectar ya a familias blancas de clase media y, a finales de año, más de dos millones de estadounidenses habían perdido su vivienda y otros cuatro más estaban a punto de perderla. Finalmente la American Home Mortgage, una gran sociedad dedicada al crédito hipotecario, se tuvo que declarar en quiebra como consecuencia de la caída de los precios del mercado inmobiliario. Y empezó la reacción en cadena. Los bancos, conscientes de su situación (una relación entre activos y pasivos de 1 a 30 en el caso de los cinco grandes bancos de inversión estadounidenses que les situaba al borde del precipicio), dejaron de prestar a las familias y a los negocios. Pocos meses después, en muchos países del centro histórico de lo que Wallerstein llama «economía-mundo» (en EEUU y Europa, y, en lo que a esta última se refiere, especialmente en los llamados PIIGS: Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España), millones de personas perdían sus trabajos, eran desalojados de sus casas por no poder hacer frente al pago de sus hipotecas y los sistemas de salud y educación públicos eran desmantelados mediante programas de austeridad que hicieron pasar a mejor vida lo que, durante mucho tiempo, se conoció como Estado del bienestar. En muchas áreas periféricas del sistema-mundo (en especial en África), el hambre se multiplicó y la desposesión de la tierra, el agua y los recursos, como prácticas históricas de la explotación a la que siempre fueron objeto las regiones colonizadas, se intensificaron.

Se trató de un verdadero «Katrina financiero», como lo llamaron varios observadores americanos. Y es que, como dice Harvey, el capital nunca resuelve su tendencia natural a las crisis, sino que las desplaza. De este modo, lo que comenzó como un problema en el mercado de la vivienda en el sur y sudoeste de EEUU, se extendió a los mercados hipotecarios de

Irlanda y España, arrasó los sistemas bancarios de Islandia y Letonia, provocó un desastre presupuestario en California y una terrible crisis de deuda en Grecia y España debida a los rescates a la banca.

Lo que básicamente ocurrió es que se desplazó la carga de la crisis de los bancos a los ciudadanos. Para hacer frente a una deuda nacional sin precedentes, las poblaciones de la europeriferia debían «apretarse el cinturón» y asumir los planes de austeridad y los recortes de las prestaciones públicas. Al fin y al cabo, habían vivido por encima de sus posibilidades. La frase que resume el programa político de los poderes financieros sería así: «Rescatar a los bancos y pasar la cuenta a la gente».

Las cifras de pérdidas de empleos fueron mucho más acusadas en Europa y EEUU que en economías emergentes como Brasil o Argentina, que intensificaron su comercio con China, no redujeron el gasto público y mantuvieron sus niveles de crecimiento.

La identificación de la Zona Euro como reserva de derechos sociales pasó así a mejor vida, gracias, entre otras cosas, a que el inmenso número de desempleados revitalizó un enorme ejército de reserva que obliga a los que trabajan a hacerlo en condiciones hasta no hace tanto tiempo inimaginables en Europa occidental. El desempleo vino acompañado por los alzamientos hipotecarios (los desahucios) que, en el caso español, representaron una de las imágenes más infames de la crisis; la de decenas de antidisturbios desalojando de sus casas, por la fuerza, a familias enteras para entregar la vivienda a las entidades financieras que habían provocado la crisis.

España, cuya economía era uno de los ejemplos de éxito más citados por los defensores de la moneda única hasta 2007, ha dejado un paisaje social humillante. Según datos de la Iglesia católica, un cuarto de la población vive en situación de pobreza. De las familias que no están en esta situación, la mayoría sobrevive con 1.000 euros al mes. Este es el paisaje que ha dejado un modelo de desarrollo fundamentado en burbujas inmobiliarias y pelotazos urbanísticos administrado por una casta política formalmente democrática y sustancialmente corrupta.

¿Te acuerdas de Billy Elliot?

La popular película de Stephen Daldry nos presenta al hijo y hermano de dos mineros británicos que participan en las históricas huelgas contra Thatcher. El pequeño Billy quiere ser bailarín y lo tiene todo en contra; a la incomprensión de su entorno se suman las enormes dificultades económicas de su familia. La historia tiene que acabar bien, y vemos al final las lágrimas de orgullo de un obrero al ver a su hijo triunfar en algo que siempre estuvo vedado a su clase: Billy, ya adulto, termina siendo el bailarín principal de *El lago de los cisnes.* A pesar del final feliz, la película permite vislumbrar las consecuencias del thatcherismo en su lucha contra la clase obrera británica, que no fueron en absoluto felices. Tras el paso de la Dama de Hierro y los suyos por Downing Street, los hijos de los obreros ya no podrían llegar a ser jamás bailarines ni universitarios, sino que aspirarían a ser mano de obra precaria en condiciones mucho peores que las de sus padres. El Billy Elliot de verdad es hoy lo que las clases medias británicas llaman despreciativamente un *chav;* un subproducto social que encarna todos los males de la intervención estatal. Como dice Owen Jones, tras el experimento thatcherista «ser de clase trabajadora ya no era algo de lo que estar orgulloso: era algo de lo que escapar».

El origen de los acontecimientos que explotaron en 2008, con la quiebra de Lehman Brothers el día 15 de septiembre, hay que buscarlos en las transformaciones llevadas a cabo por EEUU en el modelo económico que había de asegurarle el mantenimiento de su preponderancia internacional. Para Giovanni Arrighi la situación de EEUU puede describirse como de «dominación sin hegemonía», en la que sus vulnerabilidades económicas (en particular frente a China) le sitúan en un punto de debilidad competitiva solo compensado por su dominio militar. Ese proceso de decadencia de largo alcance implicaba para los EEUU alterar unas relaciones de fuerza que habían dado demasiado poder a las clases trabajadoras y perjudicado la capacidad competitiva de los EEUU. Como dice Harvey: «Amenazado en el terreno de la producción, Estados Unidos contraatacó reafirmando su hegemonía mediante las finanzas». Terminaban así el sistema de Bretton Woods (capitalismo monopolista en el marco del Estado-nación) y el sistema de convertibilidad fija del dólar en oro: EEUU empezaría a imprimir dólares en su propio beneficio y sus empresas llevarían al exterior sus capitales excedentes. Estados Unidos asumió así dejar de ser la referencia industrial y usó su poder financiero para recibir mercancías

baratas procedentes de todo el mundo para alimentar una economía que se basaría principalmente en el consumismo.

Nueva York se convirtió en el centro financiero mundial y el poder del nuevo partido de las finanzas llegó a manifestarse incluso en el urbanismo. Muchos hemos conocido Baltimore gracias a *The Wire*, la serie de David Simon para la cadena HBO, que representa la mejor metáfora del nuevo orden neoliberal; la industria desmantelada, las clases subalternas (en especial los afroamericanos) marginadas, barrios gentrificados y reconvertidos a las necesidades del turismo y el ocio consumista que contrastan con los distritos marginales destrozados por las drogas y un centro que no está dominado por los edificios públicos como el ayuntamiento o el Federal Building ni por las iglesias, sino por los edificios financieros y los pabellones de ocio dedicados al consumo.

Este nuevo modelo de poder se llamó neoliberalismo y apostó por la expansión del crédito, combatió la subida de los salarios de los trabajadores y a sus sindicatos, así como los sistemas de protección social. Más allá de retóricas sobre la libertad, las virtudes del libre comercio y las privatizaciones, fue ante todo un proyecto de clase dirigido a reforzar el poder de las élites financieras. El principal lema del Partido de Wall Street es que el Estado no está para proteger ni para ceder poder a los que viven de su trabajo, sino que se debe a las instituciones financieras.

El neoliberalismo está directamente vinculado a lo que se ha llamado globalización. Aunque la tendencia a la integración global es una característica de la economía-mundo desde el siglo XVI, la llamada globalización neoliberal fue un proceso de aceleración de la integración económica y un exitoso combate frente al empoderamiento de las clases trabajadoras. Aquel proyecto político de globalización financiera supuso el fin de las políticas económicas de corte keynesiano (políticas favorecedoras de la demanda mediante inversiones públicas, aumentos salariales y políticas sociales), la eliminación de barreras para el comercio de mercancías, la desregulación de los mercados, las privatizaciones y la apertura de las economías nacionales, en especial las de las áreas periféricas, a las inversiones extranjeras descontroladas.

Harvey destaca cuatro cambios fundamentales para describir la globalización; la desregulación financiera que rompió con el sistema de Bretton Woods (el poder pasaba del gobierno de Estados Unidos a los

organismos financieros y a los mercados, absolutos dueños desde entonces de los inquilinos de la Casa Blanca); las innovaciones tecnológicas (en especial el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones); la revolución de la información y la reducción de los costes de movilidad de personas y mercancías.

Las implicaciones del neoliberalismo para la vida de la gente no fueron iguales en todas partes. En los países centrales, las políticas contra los sindicatos y contra los sistemas de protección social de Reagan en los EEUU y de Thatcher en el Reino Unido son el ejemplo más citado. En los EEUU, el desempoderamiento de los trabajadores y sus sindicatos se visualiza en el hecho de que quedaron para siempre al margen de las ganancias derivadas del aumento de la productividad. De nuevo, los capítulos de la segunda temporada de *The Wire* que nos presentan la derrota y paulatina degradación del sindicato de estibadores capitaneados por Frank Sobotka son un magnífico retrato local de ese proceso global.

En el caso de los países periféricos fue todavía peor. Los hombres de negro del FMI y del Banco Mundial impusieron brutales planes de ajuste estructural en Asia y América Latina, unas veces gracias a la complicidad de gobiernos afines, como en Corea del Sur, y otras alentando golpes de Estado, como en Chile. En este último caso, los dispositivos militares y de política económica se coordinaron a la perfección y crearon un modelo para la política exterior estadounidense. La CIA formó a los militares para corregir «los errores de la democracia» cuando sus resultados no gustan al Partido de Wall Street, y la Escuela de Chicago formó a los especialistas que habrían de dirigir la política económica de Pinochet.

El neoliberalismo estuvo acompañado también por una retórica antisocialista y anticomunista que se acrecentó con la caída del Muro de Berlín que dio paso al consenso de Washington, al (teórico) multilateralismo y a las narrativas multiculturalistas. Eran los tiempos de Fukuyama, en los que las reuniones del Foro Económico Mundial de Davos y del G7 (después G8 con Rusia) parecían haberse convertido en el gobierno mundial. Como dice Perry Anderson, parecía que la historia daba la razón a Kautsky, quien había previsto una suerte de ultraimperialismo cosmopolita en el que las principales potencias capitalistas gobernarían de manera armónica. Para describir lo que aparecía como una dispersión de la soberanía del Estado-nación en un complejo de organismos internacionales

de gestión financiera, Estados poderosos y corporaciones privadas y bancos, Negri y Hardt hablaron de Imperio, una transformación «que hacía evidente y posible el proyecto capitalista de reunir el poder económico y el poder político […] de hacer realidad un orden estrictamente capitalista». Para estos autores «en términos constitucionales, los procesos de globalización […] tienden a proyectar una única figura supranacional de poder político».

Pero el neoliberalismo también generó sus enemigos así como la reinvención del Estado como institución protectora de las mayorías. El siglo XX se cerró con las protestas de Seattle, que abrieron un ciclo de movilización mundial contra la globalización neoliberal y, en América Latina, formaciones políticas populares y de izquierdas –en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay e incluso en Argentina y Brasil– llegaron al poder mediante elecciones, definiendo sus políticas como específicamente antineoliberales y enmarcándolas en un proyecto de recuperación de soberanía, tanto en términos nacionales como continentales.

La apuesta por las finanzas hizo también que surgieran contradicciones que amenazaban la estabilidad del sistema, pues al tiempo que los Estados Unidos se hacían los dominadores de los mercados, China se convertía en el primer centro industrial del mundo, superando a Europa y a Japón como rivales geopolíticos a batir. Como ha demostrado Giovanni Arrighi en su monumental estudio sobre la emergencia de China como potencia aspirante a la hegemonía *(Adam Smith en Pekín)*, el declive de EEUU como potencia hegemónica responde a las propias contradicciones políticas de los ciclos sistémicos de acumulación.

Y EN ESO LLEGÓ EL *(GOLPE DE)* ESTADO

La economía estadounidense, que ya no se basaba en la producción sino en las finanzas, vio cómo la deuda privada acabó siendo tres veces su producto nacional bruto. La cantidad de títulos tóxicos respaldados por hipotecas en posesión de bancos, o vendidos a inversores de todo el mundo que pensaron que los precios de las viviendas iban a subir de manera permanente, era inmanejable. Pero al igual que los globos de helio, los precios bajaron y el resultado fue el endeudamiento de las familias de clase

media que no habían hecho sino lo que les habían dicho que hicieran. Con todo, las hipotecas *subprime* o basura no eran un fenómeno tan nuevo; los negros estadounidenses habían sufrido desahucios desde mucho antes. Entre 1998 y 2006 estos perdieron más de setenta mil millones de dólares como consecuencia de haber contraído créditos hipotecarios *subprime* sobre sus viviendas. Para Harvey, «como sucedió ante la irrupción de la pandemia del sida durante la administración Reagan, el coste humano y financiero para la sociedad de no prestar suficiente atención al fenómeno desde el principio, en buena parte por los propios prejuicios contra los que se hallaban en la primera línea de fuego, fue incalculable».

En ese contexto de criminal falta de responsabilidad, las –ahora conocidas por todo el mundo– «agencias de evaluación de los activos financieros», pagadas por los propietarios de los activos que debían evaluar, mintieron hasta la saciedad, sosteniendo la credibilidad de un modelo que iba a machacar a los más débiles. Mentían las agencias de calificación y mentía el FMI, que siempre elogió la vitalidad del sistema financiero y que en 2007 se atrevía a decir que la Zona Euro estaba preparada para un periodo de crecimiento sostenido.

Y finalmente el sistema bancario estadounidense colapsó y dejó de cumplir sus funciones como proveedor del crédito a las empresas y a las familias.

Los apologetas de la mano invisible adoptaron entonces una postura marxista, pero al estilo Groucho Marx: «Estos son mis principios, pero si no les gustan tengo otros», y el gobierno estadounidense intervino, marcando la pauta de lo que llegaría después en el sur de Europa y en España. ¿Para qué intervino el gobierno? Básicamente, para socializar la deuda de la banca convirtiéndola en deuda nacional. Las deudas de aquellos que se habían repartido privadamente inmensos beneficios pasaban ahora a ser las deudas de los ciudadanos.

El 25 de septiembre de 2008 el gobierno de Bush anunciaba un plan de rescate de setecientos mil millones de dólares (algunos analistas hablan de que finalmente se gastaron dos billones) para hacer frente a los activos tóxicos de las instituciones con problemas de liquidez. ¿Cómo pudo ocurrir eso? Poco después de la quiebra de Lehman Brothers, el secretario del Tesoro Henry Paulson (exdirector ejecutivo de Goldman Sachs) y unos cuantos banqueros y/o funcionarios del Tesoro exigieron al gobierno el

rescate. En palabras de Harvey, fue «como si Wall Street hubiera decidido dar un golpe financiero contra el gobierno y el pueblo de EEUU». Fue un golpe de Estado *blando* dentro del Estado que demostró a las claras quién mandaba realmente incluso en Estados Unidos: el Partido de Wall Street.

Los contribuyentes estadounidenses regalaron a la fuerza su dinero a Morgan Stanley, a Citigroup, a Goldman Sachs y a otros estafadores del mismo estilo. Al tiempo que los legisladores aprobaban el plan de rescate, dando su visto bueno al golpe, se negaban, como cuenta Fontana en su monumental libro *Por el bien del Imperio,* a extender el subsidio de paro a ochocientos mil estadounidenses sin empleo. Así es como se dan los golpes de Estado *blandos;* no siempre es necesario el concurso de militares.

Para dar una vuelta de tuerca más a la situación, aunque se supone que los bancos recibían el dinero para aumentar el crédito a los consumidores y a los negocios, lo que ocurrió fue una restricción general del crédito. No estaba claro para qué había servido la crisis, aparte de para reforzar y confirmar al todopoderoso poder financiero.

La crisis se internacionalizó y los países periféricos de Europa vivieron situaciones similares. A los países que se desindustrializaron y que apostaron por el turismo, los servicios y la construcción como base de sus economías, permitiendo a las entidades financieras alimentar burbujas inmobiliarias (como Grecia, Irlanda o España), llegaron también rescates bancarios que, lejos de facilitar el flujo del crédito, condenaron a sus ciudadanos a la miseria social.

Como había ocurrido en EEUU, la deuda de los bancos se convirtió en la deuda de la gente, que iba a pagarla a través de recortes sociales y políticas de austeridad. Los funcionarios del Partido de Wall Street sabían persuadir a las castas políticas europeas. Como dice Robin Blackburn: «El centroizquierda y el centroderecha estaban ya persuadidos de que el Estado del bienestar es demasiado caro y burocrático y de que hay que reducirlo y repartirlo entre los proveedores privados».

Los resultados de las políticas de austeridad en España son escalofriantes. A finales de 2013 había más de seis millones de parados, de los cuales más de un tercio no percibe ningún tipo de prestación, el paro juvenil alcanza el 60 por 100, buena parte de los jóvenes titulados emigran y los inmigrantes (que eran la garantía de sostenibilidad del sistema de pensiones en una sociedad envejecida) han empezado a regresar a sus países. Uno de de cada

cuatro españoles está en situación de pobreza, el porcentaje de los que, aun teniendo trabajo, son pobres ha aumentado (1 de cada 10 asalariados apenas cobra el salario mínimo) y el hambre ha hecho acto de presencia en un país que aspiraba a incorporarse hasta hace poco al exclusivo club del G7. Varias organizaciones alertaron en una carta al relator especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación señalando que: «El Estado Español no está cumpliendo con sus obligaciones para garantizar ese derecho, hay miles de niños pasando hambre». El Ayuntamiento de Barcelona detectó 2.600 escolares con malnutrición en la ciudad, y en Andalucía la administración autonómica se ha visto obligada a asegurar tres comidas diarias a sus escolares.

Tanto el PSOE como el PP sacaron adelante reformas laborales, a las que se opusieron los sindicatos, que redujeron aún más los derechos de los trabajadores. La respuesta de nuestro país a la crisis se ha traducido en recortes en sanidad, en educación, en infraestructuras y en las ayudas a los colectivos más necesitados.

Durante el verano de 2013, el FMI y la Comisión Europea propusieron a España reducir un 10 por 100 más los salarios. No hay que olvidar que, dos años antes, este organismo subió el sueldo de su directora, la recientemente imputada Christine Lagarde, un 11 por 100; de modo que la patrocinadora de la austeridad se embolsa 381.508 € al año. La última propuesta fue la de reducir aún más el salario mínimo. Así trabaja el Partido de Wall Street.

Las medidas de austeridad no solo no han producido resultados que hayan ayudado a la gente a afrontar una situación dramática marcada por el paro y los recortes, sino que han desencadenado una espiral de empobrecimiento generalizado y una dinámica de expolio de lo público mediante privatizaciones, que ha convertido nuestro país en el basurero de Europa; dependientes de la Europa alemana de la misma manera que los países latinoamericanos dependieron durante siglos de sus colonizadores y neocolonizadores.

Alemania ha promovido con tesón la austeridad para los países del sur de Europa en lugar de los estímulos a sus economías mediante políticas de gasto social. ¿Por qué? Muy sencillo, para proteger su ventaja exportadora y una base industrial de la que carecen los PIIGS.

Hablemos ahora del poder europeo del Partido de Wall Street.

NO VALE LA PENA PENSAR, YA LO HACEN POR TI EN BRUSELAS[1]

Europa es un nombre que hoy se identifica con hombres de negro y tecnócratas que controlan cuentas y dan instrucciones expeditivas a los gobiernos.

Pero, ¿qué es Europa?

En su deslumbrante estudio sobre la historia de la Unión Europea desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, *El Nuevo Viejo Mundo*, Perry Anderson explica el origen de la integración europea como el resultado de la interacción de cuatro fuerzas primordiales con intereses diversos. En primer lugar, destaca el (quizá sobrevalorado) proyecto federalista de Jean Monnet y los suyos, interesados en evitar que se repitiera la devastación del continente por guerras entre naciones europeas. En segundo lugar, el interés estadounidense en dotarse de un baluarte de contención frente a la Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría. En tercer lugar, el interés francés de maniatar a Alemania a través de un proceso de integración que se beneficiase del potencial económico alemán garantizando la supremacía política y militar francesa. Y en cuarto lugar, el interés de la República Federal Alemana en volver a ser aceptada como potencia y sentar las bases para su reunificación. El pegamento que unió los cuatro proyectos fue el interés de todos en asegurar la prosperidad económica de la Europa capitalista.

El punto de inflexión que orientaría la evolución europea hasta la actualidad tiene que ver con los cambios que se produjeron a principios de los años setenta y que generaron la contrarrevolución neoliberal a la que ya nos hemos referido. En ese contexto, Reino Unido se incorporó a la Comunidad Europea, pero sus intereses estaban lejos de querer avanzar en la integración política. Los EEUU, por su parte, dejaron de ver a Europa solo como un mercado y una barrera de contención frente a la URSS y empezaron a asumirla como un competidor económico.

El neoliberalismo en su versión europea que sucedió a la recesión económica sentó las bases de políticas encaminadas a minar, poco a poco, los logros del Estado de bienestar. La caída del Muro de Berlín terminó de sellar el éxito del proyecto europeo asociado al poder de las finanzas que se constitucionalizaría con el Tratado de Maastricht de 1994. Tras la anexión de la República Democrática Alemana por parte de la República Federal

(cuyos enormes costes demostraron el éxito de los gobernantes de la RFA a la hora de imponer recortes a los trabajadores alemanes), Maastricht instauraba un sistema de moneda única (que no incluía al Reino Unido ni a Dinamarca) bajo la autoridad de un Banco Central independiente de los gobiernos (BCE), en el que se consolidaba la hegemonía económica de una Alemania que ya era el Estado más importante de la Unión. De esta manera, los Estados firmantes renunciaban al instrumento más importante con el que cuenta un gobierno para diseñar su política económica; la política monetaria, la posibilidad de emitir moneda y alterar los tipos de cambio.

Los únicos mecanismos de intervención estatal en la economía de la era post-Maastricht son los recortes sociales, la contención de los salarios o el fomento de la emigración. Les suena, ¿verdad? Para que se hagan una idea, comparado con el BCE, la Reserva Federal de los EEUU bien podría parecer a los apologetas del mercado una institución socialista. Como dice Vicenç Navarro, en Europa no hay un Banco Central como en EEUU, sino un *lobby* de la banca. Con el BCE es como si Keynes no hubiera existido nunca.

En teoría, Francia, la otra gran potencia europea que sin embargo no podía ya competir con Alemania en lo económico, obtenía de Maastricht la conversión del poder monetario alemán en poder monetario europeo: el BCE no sería ya el Bundesbank. Por su parte, Alemania, aunque renunciaba a su poderoso marco, cimentaba su dominio económico europeo mediante los llamados criterios de convergencia y el pacto de estabilidad (otra vuelta de tuerca contra el bienestar de los trabajadores europeos), además de ir ganando más y más peso político en la Unión y a nivel internacional.

Después de Maastricht las políticas macroeconómicas nacionales pasaron a mejor vida, lo mismo que el pleno empleo con derechos y las prestaciones sociales como garantía de la estabilidad social. Las huelgas generales en España, así como otras movilizaciones contra los gobiernos del PSOE y el PP, no fueron sino trincheras para retrasar un avance imparable de las posiciones políticas del Partido de Wall Street, que se terminaron imponiendo incluso con la aquiescencia de los sindicatos y de una parte de la sociedad que se creyó la apariencia de prosperidad fundamentada en el crédito.

Lo que ha ocurrido desde entonces hasta hoy es la crónica de una muerte anunciada en la que, tras el fracaso de la Constitución Europea rechazada

por franceses y holandeses, el Tratado de Lisboa, a pesar del no de Irlanda, ha impuesto por la puerta de atrás lo que no se pudo refrendar en las urnas; el gobierno de los mercados que en este libro, tomándolo prestado de David Harvey, llamamos Partido de Wall Street.

La valía y la rigurosidad del estudio sobre Europa de Perry Anderson que citábamos podrían defenderse desde muchas perspectivas pero destaca, en particular, su consciencia ya en 2007, antes de la quiebra de Lehman Brothers y de la extensión de la crisis, del abismo al que nos dirigíamos. Al mostrar los escasos resultados de la unión monetaria (el crecimiento de la Zona Euro era menor al de EEUU, China y al de los países europeos que no adoptaron la moneda única como Reino Unido, Dinamarca y Suecia), se escandalizaba de que los defensores de los éxitos económicos de la Eurozona pusieran como ejemplos a Irlanda y a España. A propósito de la euforia que se respiraba en aquellos tiempos (recordemos que el FMI decía en 2007 que a la Eurozona le aguardaba a la vuelta de la esquina un periodo de crecimiento sostenido), Anderson señala: «Esta expansión se ha debido al ascenso vertiginoso de los precios de la vivienda, principalmente en EEUU, pero también en muchos países de la OCDE, sobre todo en las antiguas economías periféricas de España e Irlanda, donde la construcción ha sido el elemento central del crecimiento reciente […] La hora de la verdad de la UME llegará en el caso de que se produzca un debilitamiento repentino del mercado inmobiliario norteamericano […] ¿Hasta qué punto se encuentra a salvo la Eurozona de una recesión trasatlántica?». ¿Recuerdan a los economistas de la London School of Economics que no habían sabido prever los riesgos sistémicos? Pues ya saben ustedes de qué científicos sociales pueden fiarse y de cuáles no.

Antes de la Segunda Guerra Mundial, el mismísimo Hayek, en un artículo titulado «The Economic Conditions of Interstate Federalism», imaginaba una federación europea en la que el alcance de la regulación de la vida económica sería mucho más limitado y en la que la intromisión en la vida económica sería absolutamente impracticable. Como señala Anderson, Hayek expuso como nadie en el citado ensayo la lógica actual de la unión monetaria, en la que no hay autoridad soberana que pueda controlar a los mercados. Hayek sería redescubierto y santificado en los años ochenta por Reagan y Thatcher, y su éxito se consolidó tras la desaparición de la URSS. A partir de entonces la máxima «privatización de los beneficios –

socialización de las pérdidas» se convirtió también en una de las claves de la política europea. Como dijo Peter Gowan, la hayekiana Unión Europea preserva las estructuras de los Estados nacionales al tiempo que les arrebata su soberanía económica.

En un artículo de 2012 en la revista *New Left Review* a propósito de la recepción de su libro sobre Europa, Anderson señalaba hasta qué punto la arquitectura constitucional de la UE fue más lejos que nadie en el vaciamiento de la soberanía: «[…] mientras que en Estados Unidos los rescates públicos masivos conseguían evitar el hundimiento de bancos, compañías de seguros y empresas insolventes, y la acuñación de dinero por la Reserva Federal lograba controlar la contracción de la demanda, dos obstáculos impedían esa resolución temporal en la Eurozona. Allí, no solo los estatutos, consagrados por el Tratado de Maastricht, prohibían expresamente al BCE comprar deuda de los países miembros, sino que no había *Schicksalsgemeinschaft* –esa "comunidad de destino" de la nación weberiana– que uniese a gobernantes y gobernados en un orden político común, en la que los primeros pagasen un fuerte precio por olvidarse completamente de las necesidades de los segundos. En el simulacro europeo de federalismo, no podía haber "unión de transferencia" similar a la estadounidense. En cuanto estalló la crisis, la cohesión de la Eurozona no podía proceder del gasto social, sino del dictado político: de la imposición por parte de Alemania, a la cabeza de un bloque de países nórdicos más pequeños, de draconianos programas de austeridad, impensables para sus propios ciudadanos, en la periferia del sur, incapaz ya de recuperar competitividad mediante la devaluación».

La propia institucionalidad de la UE, a pesar de su abigarrada complejidad, es el sueño de cualquier neoliberal. La UE apenas maneja un presupuesto equivalente al 1 por 100 del PIB de su territorio, y la práctica totalidad de sus fondos, además de cubrir los sueldos de sus funcionarios, se destinan a la Política Agraria Común y a los Fondos Estructurales de ayuda a las regiones europeas menos desarrolladas. El «ejecutivo» de la Unión (la llamada «Comisión Europea») está formado por un presidente (que cobra mucho más que su «homólogo» estadounidense) y un grupo de comisarios nombrados por los Estados. Las deliberaciones del órgano ejecutivo europeo, por supuesto, no son públicas. El consejo europeo y los consejos de ministros son los órganos legislativos, compuestos por los presidentes y

ministros de los Estados. La compleja vinculación entre ejecutivo y legislativo (por llamarlos de alguna forma) se realiza a través de los comités «Coreper» (Comité de Representantes Permanentes). Existe también un tribunal de justicia que se pronuncia sobre las directivas y los conflictos entre el derecho de la Unión y el de los Estados. Por último, el único órgano electivo es el Parlamento, que, obviamente, carece de funciones o competencias relevantes (en relación al resto de instituciones de la Unión) a pesar del carácter de órgano co-legislativo que está adquiriendo. A todo ello se añade la escandalosa presencia de *lobbies* (el 90 por 100 de ellos controlados por empresas privadas) que presionan a la burocracia europea en función de intereses que nada tienen que ver con los de los ciudadanos europeos.

A pesar de la indiferencia generalizada de los europeos respecto a Europa (que se manifiesta en la baja participación en las elecciones europeas y que contrasta con el entusiasmo que mostraron los ciudadanos franceses, holandeses e irlandeses a la hora de rechazar la Constitución europea y el Tratado de Lisboa), han proliferado narrativas infames que pretenden presentar el espacio europeo como un oasis de virtudes democráticas y sociales, como santuario de los derechos humanos y como alternativa geopolítica amable frente a la fuerza bruta estadounidense. En unas páginas memorables, Anderson da buena cuenta del patético favor que han prestado, a este insoportable narcisismo europeo, vacas sagradas de la socialdemocracia alemana como Habermas o Beck.

Pero no es solo que Europa haya respondido a los reveses electorales en Francia, Holanda o Irlanda desde el desprecio más escandaloso al veredicto de las urnas; no es solo la absoluta dependencia europea respecto a EEUU demostrada en el conflicto yugoslavo, en la guerra de Afganistán, en la reciente de Libia e incluso en el desarrollo del conflicto en Irak (a pesar del baile de máscaras de Schröder y Chirac, que supieron manejar la situación hasta el punto de permitir a Habermas –aquel digno premio príncipe de Asturias que se arrodilló ante el Borbón– decir que «con las manifestaciones contra la guerra había nacido la nación europea»); pues a todo ello se añade la estulticia generalizada entre intelectuales y periodistas que nunca dejaron de producir lisérgicos elogios de las virtudes europeas.

El nombramiento del anfitrión de la Cumbre de las Azores, el antiguo maoísta José Manuel Durão Barroso, como presidente de la Comisión,

revela la pleitesía europea hacia EEUU y la humillación de todos aquellos que dijeron que el antibelicismo retórico durante los ataques a Irak era la base de la identidad europea. El arquitecto del desastre económico portugués fue propuesto por «el pacifista» Blair en 2004. Recién nombrado, se fue de vacaciones en el yate del armador griego Spiro Latsis, que poco después recibiría una ayuda de diez millones de euros aprobada por la Comisión Europea.

Además de todo eso, el supuesto prestigio europeo en la defensa de los derechos humanos quedó al descubierto tras la demostración de la colaboración de los gobiernos europeos con EEUU, violando todas las leyes posibles, entregando prisioneros a la CIA cuyo destino no era otro que el de ser torturados. El memorándum presentado en marzo de 2007 por el suizo Dick Marty, ante el Comité de Asuntos Legales y de Derechos Humanos del Consejo de Europa (organismo ajeno a la UE), revela hasta qué punto la imagen de la UE no puede vincularse al respeto de los derechos humanos. Para el relator no solo se habían violado los derechos fundamentales, sino que la lucha internacional contra el terrorismo estaba desacreditada.

Hay que decir las cosas con claridad. La crisis ha terminado de articular una Europa vertebrada por un eje Norte-acreedor/Sur-deudor que establece una división del trabajo orquestada por los países más ricos. El Sur debe especializarse en los productos y los servicios con fuerte demanda de mano de obra con bajos salarios, mientras que el Norte avanza en su carrera hacia la calidad y la innovación, con salarios más elevados (para algunos). A los habitantes de la provincia española nos toca ser, con Grecia, con Portugal, con Italia y con Irlanda, el basurero de la Europa diseñada por el Partido de Wall Street.

Los nuevos presupuestos de la UE para 2014-2020 representan el triunfo de aquellos contribuyentes netos (en particular Alemania) que exigían una línea de austeridad más dura. La prepotencia alemana tiene ejemplos que atacan uno de los pocos patrimonios de Europa asociados a la decencia: el antifascismo. Josef Schlarmann, dirigente de la CDU, se atrevió a proponer que Grecia les entregara sus islas deshabitadas para pagar las deudas. Viniendo de un alemán y teniendo en cuenta que Alemania jamás pagó reparaciones de guerra a Grecia, la propuesta de Schlarmann es una humillación indignante contra los griegos.

Las biografías de buena parte de los dirigentes europeos son muy representativas de quién ejerce el poder en la Eurozona. Dejando a un lado al maoísta Barroso, destaca Mario Draghi, presidente del BCE. ¿Saben a qué se dedicaba antes? Era el vicepresidente para Europa de Goldman Sachs. Fue el responsable de «ayudar» al gobernador del Banco Central de Grecia, Lucas Papademos, a enmascarar la contabilidad. Jean-Claude Juncker, líder del Partido Popular Social Cristiano del paraíso fiscal luxemburgués y hasta enero de 2013 presidente del Eurogrupo, cuando Papandreu declaró que quería someter el memorándum de la Troika a referéndum le llamó para después declarar: «Le hicimos saber que su comportamiento era desleal». Ni Vito Corleone lo hubiera hecho mejor. Ahora Juncker ha sido nombrado presidente de la Comisión tras el acuerdo entre socialistas y populares.

RICOS Y POBRES EN LA PROVINCIA ESPAÑOLA

El cinismo y la capacidad de ironía de los ricos, en tanto que vencedores, a veces no tiene límites. El inversionista y empresario Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, llegó a afirmar, como decíamos, que sí existía la lucha de clases y que era evidente que la suya iba ganado. En la novela de Vázquez Montalbán *El Premio*, un gran empresario comenta a una estudiante que le hace una entrevista: «A quién le importa que a la gente le vaya mal si la economía va bien». La frase es una síntesis perfecta de cómo entienden la economía las clases dominantes, para quienes que la economía vaya bien significa llevar un tren de vida escandaloso a costa de la mayoría.

La crisis de la deuda se convirtió en la excusa perfecta para desmantelar lo que quedaba de Estado del bienestar mediante políticas de austeridad. A las clases dominantes nunca les gustó que el Estado tuviera que asumir los costes de seguridad social, la educación y la sanidad; jamás entendieron que los sindicatos son necesarios para que se cumpla la legislación laboral o que buena parte de los jóvenes necesitan becas para poder estudiar. El búscate la vida o el más gráfico «que se jodan» que profirió la diputada popular Andrea Fabra en el Parlamento, dirigiéndose a los parados, revela el estilo político de los que mandan.

Quizá Joseph Stiglitz subestimó las consecuencias políticas de la caída del muro neoliberal pues, hasta la fecha, los fundamentalistas del mercado han sabido recuperarse muy bien, o tal vez las consecuencias políticas de la crisis, en forma de empoderamiento de los más frente a los menos, tardarán en verse un poco más. El caso es que la crisis fue aprovechada por las instituciones financieras y la clase capitalista global para sacar provecho de la situación.

En EEUU, los grandes bancos son ahora un 20 por 100 más grandes que antes de la crisis y controlan una parte mayor de la economía y, sin duda, los ricos viven cada vez mejor a costa de que la mayoría viva peor. En España las empresas de productos de lujo (que venden a ricos) han visto aumentar sus ventas en los años de crisis y, según datos de la Fundación Alternativas, la desigualdad en España está en los niveles más altos desde 1978. Además de en la Eurocopa de fútbol, España es campeona en desigualdad de Europa (solo se nos acercan Lituania y Bulgaria), obteniendo un vergonzoso 34 en el índice de Gini (que mide la desigualdad económica) en 2011, teniendo el dudoso honor de ocupar la peor posición de la Eurozona según datos de Eurostat. Mientras tanto, el número de millonarios en España ha aumentado un 5,4 por 100.

Según datos del CIS del verano de 2013, el 25,1 por 100 de los hogares españoles no llegan a los 1.000 euros de ingresos netos mensuales en el conjunto del hogar, mientras el 39,5 por 100 no llega a los 2.500 euros netos. Solo un 0,7 de las familias alcanza ingresos por encima de 6.000 euros. Entre este último grupo se cuentan, por supuesto, no solo las grandes fortunas sino también las élites políticas (del PP, del PSOE, de CiU, del PNV…) que gobiernan en España.

En mayo de 2013, varios directivos de empresas del IBEX 35 tuvieron la osadía de acusar de populismo a quienes criticaban los altos salarios de sus directivos, que, por cierto, han aumentado desde el inicio de la crisis. Según ellos, sus salarios responden al sentido común y por eso criticarlos era populista. La otra cara de esa moneda es que la mayoría de la gente tiene que aceptar, con la misma normalidad y sentido común, unas condiciones de vida cada vez más degradantes y precarias. Eso mientras no se hagan «populistas».

Mientras las familias españolas tienen verdaderas dificultades para llenar la nevera de alimentos, los beneficios del IBEX mejoraron en 2011 al

tiempo que las grandes empresas cotizaron un mísero 3,5 por 100 en impuestos por sus beneficios.

La Generalitat del «independentista» Artur Mas redujo el tipo impositivo a los casinos del 55 por 100 al 10 por 100 para dar cobertura legal a una aberración que llamaron Barcelona World, un complejo del juego en Tarragona al estilo del que se promocionaba en la Comunidad de Madrid como Eurovegas. La Caixa quintuplicó sus beneficios en el primer semestre de 2013 con respecto al mismo periodo de 2012 (639 millones frente a 114), al tiempo que la desnutrición infantil era una realidad en las escuelas de Barcelona. El descubrimiento de la fortuna oculta de los Pujol es la gota que ha colmado el vaso en el retrato de la casta catalana.

¿Cómo es posible semejante desigualdad? Pues, entre otras cosas, porque España cuenta con uno de los sistemas fiscales más permisivos de Europa. Hay que decirlo con claridad: en España se ha gobernado para permitir que los ricos roben a los ciudadanos.

¿Quién nos roba?

La pregunta podría ser respondida con dos palabras: los ricos. El fraude fiscal en España representa el 23 por 100 del PIB (unos 90.000 millones de euros) y, según estimaciones de los inspectores de Hacienda, el 70 por 100 del mismo corresponde a las grandes empresas y las grandes fortunas. Se calcula que el fraude de los ricos cuesta a cada español unos 2.000 euros al año. Si tenemos en cuenta que el ingreso medio de una familia española al año apenas llega a los 23.000 euros, podemos darnos cuenta de la dimensión del atraco.

En 2012 las rentas empresariales superaron por primera vez a las rentas salariales en el PIB; aumentó la recaudación de impuestos que pagan los ciudadanos y disminuyó la recaudación por impuesto de sociedades. En 2005, el tipo medio en el impuesto de sociedades era del 23,1 por 100, pero cuatro años más tarde había bajado hasta el 17,73 por 100. En 2007 el impuesto de sociedades recaudaba 40.000 millones y en 2012 no superó los 22.000 millones, mientras que el IRPF aportó casi 10.000 millones más con respecto a 2007, teniendo en cuenta, además, que la inflación subió al 2 por

100 y los salarios no aumentaron más que el 0,5 por 100 gracias a los nuevos convenios colectivos.

Los ricos, además, pagan incluso menos de lo que parece, pues existe una enorme divergencia entre carga nominal (lo que aparece en los libros de cuentas) y carga real. Se supone qua la tasa impositiva nominal para los que en España cobran más de 300.000 euros al año es del 52 por 100 (el tipo impositivo máximo). Sin embargo, los superricos de España no pagan un 52 por 100 de sus ingresos al fisco del Estado (sea este central o autonómico) como se supone que deberían hacer; los porcentajes reales son mucho más bajos. ¿Cómo es posible? Gracias a las deducciones que disfrutan y a las mil y una maneras de evitar impuestos que han denunciado los inspectores de Hacienda. Es más, además de las deducciones, sus ganancias se derivan mayoritariamente de las rentas del capital, que se gravan mucho menos que las rentas del trabajo (alrededor de un 21 por 100 nominalmente). En España las deducciones, como herramienta fiscal, favorecen sobre todo a las rentas superiores, las cuales tienen a su disposición toda una batería de ayudas legales que les enseñan cómo no pagar impuestos.

La diferencia con el resto de la Europa capitalista es sonrojante. Los superricos patrios no pagan lo que pagan los superricos en Suecia, donde el fraude fiscal es mucho menor; allí los gravámenes sobre las rentas del capital son mayores y las deducciones apenas existen. Así, en España, el rico que paga el tipo máximo ingresa nominalmente 13 veces lo que ingresa el ciudadano medio y corriente que trabaja y paga impuestos a través de su nómina, mientras que en Suecia se aplica el tipo máximo a los que ingresan dos veces lo que ingresa el ciudadano medio. De ahí que la mayoría pague más impuestos aunque sus tasas nominales de gravamen sean casi iguales a las de España.

Quienes pagan impuestos en España son los ciudadanos de a pie. Los que declaran ganar menos de 33.000 euros al año (8 de cada 10) aportan el 27,3 por 100 del total de la recaudación, mientras que quienes declaran ganar más de 175.000 euros (un 0,4 por 100) aporta solo el 16,3 por 100.

El agujero en los impuestos españoles no está en el IRPF de los trabajadores por cuenta ajena. La presión fiscal para aquellos que tienen una nómina está, de media, en el 39,6 por 100: seis puntos por encima de la media de la OCDE según datos de 2010.

La partida que sigue aportando más ingresos a las arcas públicas es el IRPF, con más de 73.000 millones, seguida del IVA, con casi 51.000 millones. Por sorprendente que parezca, en 2012, ya con cuatro meses de fuertes aumentos de los tipos impositivos –de septiembre a diciembre–, se recaudó lo mismo por IVA que en 2007, con tipos mucho más bajos, lo que quiere decir que la caída de la actividad económica es impresionante.

Con un sistema fiscal equivalente al de otros países europeos, las cuentas públicas no estarían en el aprieto en que están hoy. El déficit en 2010 fue del 9,2 por 100 del PIB. La diferencia de la presión fiscal entre España y Europa es prácticamente ese mismo porcentaje del PIB.

¿Es posible, pues, poner nombre y apellidos a los ladrones? Por supuesto.

Las SICAV, Sociedades de Inversión de Capital Variable, siguen engrosando curiosamente su patrimonio, con un aumento del 2 por 100 hasta septiembre de 2012, según VDOS, hasta rozar los 24.000 millones de euros. Sobre el papel, algo más de 400.000 personas se reparten este capital, pero en realidad son muchos menos los beneficiados, ya que cerca del 90 por 100 de estas sociedades son sospechosas de ser SICAV «privadas», en manos de un único accionista, y no verdaderas instituciones de inversión colectiva con decenas y hasta miles de partícipes. Generalmente las grandes fortunas ostentan el 99,9 por 100 del capital de una SICAV para utilizarla como vehículo de sus inversiones en otras empresas, representando el resto de accionistas un papel meramente simbólico. Con esta estrategia pretenden reducir al mínimo su factura fiscal, ya que las SICAV solo tributan un máximo del 1 por 100 sobre sus beneficios, en contraste con el 52 por 100 que pagan las rentas más altas en el IRPF (llegando al 56 por 100 en el caso de Cataluña).

El 94 por 100 de las empresas del IBEX 35 tenían presencia en paraísos fiscales en 2011 –un 8 por 100 más que en 2010–, lo que supone 33 de las 35 empresas que forman el índice selectivo español, según recoge el informe *La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35*. El análisis muestra que, durante el año 2009, el número de filiales españolas en estos territorios era de 273, frente a las 354 de 2010 y las 437 que había en 2011, lo que supone un incremento del 23 por 100 en 2011 respecto a 2010, y del 60 por 100 en relación a 2009. Entre el año 2008 y 2011, los miembros del consejo directivo de 9 de las 10

grandes empresas de la Bolsa española han aumentado su porcentaje de beneficios.

[1] El título de este epígrafe procede de unos versos rapeados por el grupo *Hechos contra el decoro*. El tema se llama *8 horas*.

IV
RÉGIMEN
El poder y la casta

INTRODUCCIÓN. UNA CRISIS DE RÉGIMEN[1]

La degradación política española, en un contexto de recortes y de empobrecimiento cada vez más generalizado de la población, ha alcanzado dimensiones mastodónticas. Ello ha hecho que muchos actores u observadores, desde diferentes perspectivas, coincidan en que España se encuentra a las puertas de una nueva transición o frente a una crisis de régimen. Esta idea de la crisis de régimen como cáncer terminal del sistema político surgido de la Transición no es, ni mucho menos, un planteamiento voluntarista propio de jóvenes que queremos ajustar cuentas con la veneración de la Transición española por parte de buena parte de las fuerzas políticas españolas. Por el contrario, la misma idea ha surgido desde diferentes ámbitos políticos. El antiguo jefe de los socialistas catalanes, Pere Navarro, por ejemplo, en medio de un debate en el PSC a propósito del soberanismo y la independencia del partido respecto al PSOE, llegó a pedir a Juan Carlos I que abdicara para que su heredero dirigiera una nueva Transición. Quizá los deseos de Navarro tardaron algo más en hacerse realidad de lo que a él le hubiera gustado pero, efectivamente, se hicieron realidad. Allá por 2011, el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán hablaba ya de crisis de régimen: «La peculiaridad de la crisis española –escribía– era la conjunción de una crisis financiera internacional con una crisis política, con el resultado de que la incapacidad de las instituciones estaba agravando la crisis económica y acabaría deslegitimando la democracia».

Paradojas de la política española, los socialistas demuestran ser, incluso con el prestigio de la Casa del Rey bajo mínimos, siempre más monárquicos que nadie y, por el contrario, los dirigentes de UPyD se revelan como verdaderos marxistas relacionando estructura y superestructura; no olvidemos que Martínez Gorriarán militó en la Liga Comunista Revolucionaria en los setenta.

Sea como fuere, el régimen del 78 con su rey, sus Pactos de la Moncloa, su bipartidismo, sus bases de la OTAN, su Constitución y su innegable consenso entre una buena parte de la población española está hoy en crisis. De hecho, el surgimiento de nuestra fuerza política, PODEMOS, solo puede entenderse en ese contexto.

La institución monárquica (pieza crucial de la continuidad institucional franquista) está hoy en España más desprestigiada de lo que estuvo la de Alfonso XIII y, al mismo tiempo, todo el mundo sabe que los dirigentes del partido del gobierno, que nada en corrupción, sumaban a sus generosísimos sueldos públicos sobresueldos «en B» al tiempo que aplicaban severos recortes sociales sobre los ciudadanos arruinados tras la conversión de la deuda privada en deuda pública. El caso de los ERES andaluces, por su parte, reveló la cara más repugnante de ciertas élites vinculadas al PSOE y a la UGT, mientras que sigue siendo habitual que la casta política gobernante en Madrid y en algunas comunidades autónomas pase de las responsabilidades de gobierno a los consejos de administración de las grandes empresas. La corrupción en los grandes partidos del régimen se ha revelado como algo más que un conjunto de innumerables casos, apareciendo como una forma de gobierno en la que mandan, en última instancia, los que no se presentan a las elecciones.

Como señalan todos los estudios de opinión (antes y después de la irrupción de PODEMOS) los ciudadanos cada vez observan con más distancia a las opciones electorales históricamente hegemónicas. Antes de nuestra irrupción en el escenario electoral ya se apreciaba la disminución de los apoyos electorales del PSOE y el PP, al tiempo que IU, UPyD y Ciudadanos mejoraban los suyos. Se apreciaba la pérdida de terreno de CiU respecto a una Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que por primera vez en su historia reciente puede aspirar a ser el partido más importante en Cataluña. En Euskadi y Navarra, el retorno de la izquierda abertzale a la competición electoral amenaza la hegemonía del PNV y de Unión del Pueblo Navarro (UPN). Si sumamos a esas tendencias la aparición de PODEMOS y su tendencia ascendente, podemos pensar prudentemente que el sistema de partidos español y sus tradiciones de funcionamiento tal y como las hemos conocido están condenados a cambiar.

En este capítulo examino algunos elementos que señalan esa crisis del régimen político español; los llamamientos al entendimiento de los dos

grandes partidos, la situación del PP y el PSOE y de la monarquía, el uso abusivo de la policía contra las protestas sociales, etcétera. A mi juicio, como consecuencia de la transformación de la crisis económica en crisis política, vivimos un momento de transición en el que se presentan muchas posibilidades para el cambio político.

LOS GRANDES PARTIDOS. ¿TE ACUERDAS DEL 23-F?

El concepto de *coup d'État* (golpe de Estado) se usó por primera vez en Francia en el siglo XVIII para designar las medidas violentas tomadas por el rey sin respetar la ley. El término se fue ampliando a lo largo del siglo XIX para referir la acción violenta de un componente del Estado, como por ejemplo las fuerzas armadas, para tomar de forma ilegal el control absoluto de todos los mecanismos estatales. Ya en los años treinta apareció el libro *Tecnica del colpo di Stato* del antiguo militante fascista Curzio Malaparte (una obra que inspiraría a fascistas españoles como Ramiro Ledesma Ramos). Desde aquel libro se ha impuesto una definición del golpe de Estado como un dispositivo coercitivo para violentar la legalidad, protagonizado por sectores del propio Estado.

Normalmente se asocia los golpes de Estado a sus expresiones más espectaculares, en las que el protagonismo recae en unidades militares: el 18 de julio de 1936 en España o el 11 de septiembre de 1973 en Chile podrían ser ejemplos de ese tipo de golpes de Estado «canónicos». Pero lo crucial de un golpe no es tanto su forma como sus resultados a la hora de «constitucionalizar» poderes que podían estar en duda. Los golpes revelan la voluntad de poderes latentes de hacerse visibles e ineludibles.

En el verano de 2012, el periodista Miguel Ángel Aguilar proponía desde las páginas de *El País* «un gran acuerdo nacional del que habrían de formar parte junto con los populares, los socialistas y los nacionalistas vascos y catalanes para llevar adelante un programa de reformas y crecimiento, y emprender un diálogo que impida un país sublevado». Aguilar titulaba su artículo «Buscando a Leopoldo desesperadamente» y rememoraba la mítica moción de censura contra Adolfo Suárez a finales de mayo de 1980. Para Aguilar, Rajoy se estaba pareciendo demasiado a aquel Suárez que empezó

a resultar prescindible para aquellos que habían apostado por él como conductor de la Transición.

En los tiempos previos al 23-F evocados por Aguilar, la evolución que estaba tomando la joven y tuteladísima democracia española no era del gusto de los hombres del poder. Eran tiempos en los que el socialista Enrique Múgica se reunía con el arquitecto intelectual del golpe y amigo personal del rey, Alfonso Armada. En aquellos momentos ni los socialistas, ni algunos comunistas como Ramón Tamames, ni las derechas, ni la banca, ni nadie de importancia, hacía ascos a un gobierno «de gran acuerdo nacional» presidido por un militar de la máxima confianza del jefe del Estado como era el caso de Armada.

Con el siglo XXI bien avanzado en España y con Suárez fuera de juego por una horrible enfermedad, tuvo que llegar un novelista tan poco sospechoso de radicalismo como Javier Cercas con su *Anatomía de un instante* para decir lo que casi nadie se atrevió a decir después del 23-F; a saber, que el golpe contaba con el consenso de la casta política y de los poderes económicos españoles. La entrada de un ultra como Tejero al Congreso era solo la superficie de un proyecto mucho más complejo.

Como señalamos en el capítulo dedicado a la historia de nuestro país, si algo había caracterizado a la Transición fue su tutelaje permanente por parte de unas élites económicas y políticas encabezadas simbólicamente por la Corona, a la sazón heredera del poder del anterior jefe de Estado, que tuvieron en Adolfo Suárez su mejor instrumento político. Existían, además, poderes extranjeros que no veían mal una cierta democratización, siempre y cuando España se mantuviera dentro del orden atlantista de la Guerra Fría.

Pero para 1980, aquel galán de provincias franquista como le define Cercas, reconvertido en campeón de la democracia, había dejado de ser útil a sus mentores (en especial al rey) y su empecinamiento en obrar por sí mismo ponía en riesgo los derroteros, hasta entonces más que controlados, de la metamorfosis política española.

El golpe del 23 de febrero de 1981 debía ser solo un gesto de restitución del orden «natural» (constitucional en un sentido material) de las cosas. Quizá fracasó en su forma (no es prudente encargar el secuestro del Congreso a un ultra), pero no en sus objetivos. La monarquía salió reforzada, se frenó el desarrollo del Estado autonómico, el PCE casi desapareció electoralmente y el PSOE llegó al poder con más miedo en el

cuerpo que voluntad de cambio. Poco quedó de aquel «OTAN, de entrada no», de la prometida depuración de la policía franquista (y no digamos ya del Ejército), del reconocimiento de los demócratas derrotados en la Guerra Civil o del desarrollo de las autonomías. La llamada guerra sucia contra ETA, de la que Felipe González tan orgulloso se mostraba al reconocer a Millás, en *El País*, que pudo matar a los jefes de ETA en Bidart y que quizá se equivocó al no hacerlo, terminó de sellar esa sensación gatopardiana (las cosas tienen que cambiar a veces para que todo siga igual) que tenemos los españoles cuando pensamos en nuestra historia política reciente.

Pues bien, si entonces los mismos artífices del régimen político del 78 dijeron «hasta aquí», el impacto de la crisis en España ha hecho que los hombres del poder (económico, político, mediático…) vuelvan a ver amenazados sus privilegios y empiecen a desconfiar de su propio sistema político.

Para los hombres del poder, la democracia es tal si ganan PSOE o PP, pero si emerge como posibilidad que la alternancia entre estos dos partidos (con el concurso eventual de nacionalistas vascos y catalanes moderados) deje de ser el eje vertebrador de la política española, entonces toca dejar de jugar a la dialéctica «gobierno-oposición» y conjurar, como en Grecia, los peligros de que las elecciones no las ganen los de siempre. Como bien dejó claro el diario *El País* en su editorial del 29 de julio de 2012 «La urgencia de pactar», la «víctima de esta crisis podría ser la propia organización de la democracia, si los dos grandes partidos, que se han alternado en la mayoría de las instituciones, quedaran deslegitimados a los ojos de los ciudadanos». El periódico del grupo PRISA, ante unas encuestas que no paraban de constatar la pérdida de apoyos de los dos partidos sobre los que se ha edificado nuestro sistema político en los últimos treinta años, hacía un desesperado llamamiento al acuerdo: «El jefe del Ejecutivo tiene la responsabilidad y la legitimidad de intentar un proyecto que restablezca la confianza, lo cual será imposible sin el concurso, al menos, de las corrientes principales de la política y de la sociedad españolas».

Si esto era verdad en 2012 y 2013, tras el surgimiento de PODEMOS en las elecciones europeas y las encuestas posteriores, se ha convertido en una realidad escandalosa. Salvo contadísimas excepciones, el trato que ha recibido nuestra formación de los dirigentes del PSOE, del PP y de CiU, así como de buena parte de los medios de comunicación afines a estas fuerzas

políticas, ha sido de una agresividad solo comparable al efecto bumerán que ha provocado.

Aunque el PSOE haya elegido un secretario general más joven, tras las elecciones europeas el fantasma del «pacto de gran coalición» como fórmula de salvación del régimen es defendido abiertamente por periódicos del *establishment* como *El País*. Los acuerdos habituales de los partidos del turno español en cuestiones estratégicas bien podrían dar lugar a un gobierno PSOE-PP al estilo del que hicieron Nueva Democracia y el PASOK en Grecia.

Hay muchos ejemplos de ese estilo de golpismo blando por la vía del acuerdo de los partidos del régimen. Del mismo modo que el 23-F, aunque desastroso en su forma castiza, fue la expresión de un régimen político en crisis, la reforma constitucional pactada por el PSOE y el PP en el verano de 2011 reveló una verdad inapelable: que, en las cuestiones de Estado (y entregar la soberanía a los poderes «europeos» es una cuestión de Estado), PSOE y PP comparten proyecto político.

Cualquiera que haya estudiado Derecho sabe que las constituciones son la voluntad racionalizada de los vencedores o la expresión de una relación de fuerzas entre diferentes poderes. Las constituciones pueden estar formalizadas en un documento escrito al que se otorga un valor jurídico superior, como en el caso de España, o no estarlo, como en el caso del Reino Unido o de la propia Unión Europea tras el fracaso de su proyecto de constitución escrita. Como señalábamos en el capítulo anterior, los tratados de Maastricht y Lisboa, así como la Troika, son la constitución europea aun cuando carezcan de forma constitucional (y no digamos ya de legitimidad democrática).

El gran pacto de reforma constitucional *express* entre el PSOE y el PP para «constitucionalizar» el equilibrio presupuestario de todas las administraciones, no fue sino la formalización de la victoria de la Europa hayekiana, por la que el Estado asume cercenar su ya limitadísima capacidad de ejercer la soberanía, toda vez que la propia Constitución le limita ahora la capacidad de decidir nada menos que sobre sus políticas de gasto social.

Aquel pacto fue un golpe que, como todos los golpes exitosos, revela quién tiene el poder; en este caso una Unión Europea dirigida por Alemania, con el concurso francés, que ordenó a sus gobiernos satélite que

constitucionalizaran la regla del equilibrio presupuestario. De nuevo apareció el internacionalismo de casta del Partido de Wall Street.

Sin embargo, los necesarios acuerdos de los dos grandes partidos del régimen político español, igual que en 1982, revelan también que el régimen está en crisis y que una de sus víctimas, como ha ocurrido en Grecia, puede ser la socialdemocracia. La «pasokización» electoral del PSOE, al que PODEMOS superaba ya en intención directa de voto en agosto de 2014 según el CIS, revela a las claras este proceso.

Como señalan Negri y Hardt, «en el neoliberalismo triunfante, la distinción entre izquierda y derecha es sutil y flexible. La izquierda defiende el Estado de bienestar hasta que su coste no incida demasiado sobre la deuda pública, es decir, sobre la voluntad de mantener el orden jerárquico de la sociedad; y la derecha lo desmantela mientras el orden público y la seguridad no estén en peligro […] El concepto de izquierda no parece tener mucho espacio en la gobernanza imperial». Negri y Hardt explican bien aquí que los sistemas políticos están, constitucionalmente (en un sentido material, insisto), cerrados bajo un modelo de gobernanza europea que pretende negar cualquier alternativa a las imposiciones de la Troika.

Esas reconfiguraciones constitucionales han dejado a los partidos socialdemócratas europeos sin apenas margen de maniobra para gobernar de manera diferente a los partidos liberal-conservadores. Los derroteros del gobierno de Zapatero desde el inicio de la crisis son un buen ejemplo de ello.

Precisamente la debilidad de los socialistas para seguir ocupando su papel de partido del turno es una de las claves para entender las posibilidades de cambio que la crisis de régimen presenta.

La corrupción como forma de gobierno

Alan Greenspan recurrió en su momento al pesimismo antropológico para explicar la corrupción: para el antiguo presidente de la Reserva Federal, estaría en la «naturaleza humana». Los partidos políticos del turno español no van tan lejos y suelen sostener que la corrupción en la política es equivalente a la de cualquier profesión; puede haber algunas manzanas

podridas, como en todas partes, pero la gran mayoría de los políticos son gente honrada.

Atribuir la corrupción a la naturaleza humana, o compararla con la falta de honestidad individual en el ejercicio de una profesión, resulta tan falaz como comparar el presupuesto de una familia que no llega a fin de mes con la Hacienda pública para justificar los recortes sociales. Una familia no puede perseguir el fraude fiscal, ni emitir bonos de deuda, ni aumentar la progresividad del sistema impositivo. Y, del mismo modo, la corrupción no tiene que ver tanto con la ética individual como con las reglas de funcionamiento de la política. Esos intentos de «despolitizar» la corrupción (Slavoj Žižek apunta, muy inteligentemente, que la «despolitización» es una operación ideológica crucial) recuerdan esos argumentos que pretenden definir el fascismo como una patología mental antes que como un fenómeno histórico social y político.

La famosa Ley de Transparencia Administrativa (que dilata y negocia con todos el PP) llegó con 35 años de retraso después de la proclamación de la Constitución al único país de Europa, según Access Info Europe, con más de un millón de habitantes que no contaba con una ley de acceso a la información pública. Hablamos de un país en el que los casos de corrupción afectan a casi un millar de cargos públicos. La lista de casos no tiene fin. Los casos Pokemon y Campeón en Galicia involucran a PP y PSOE. Catalunya acumula operaciones contra Convergència (Palau, Treball, ITV, Clotilde), Unió (Pallerols) o PSC (Mercurio), por no hablar de las recientes revelaciones de las cuentas de la familia Pujol en paraísos fiscales. En Asturias el caso Marea entrelaza a PP y PSOE y, en Aragón, el Partido Aragonés lleva décadas bajo la sombra de la corrupción. En Andalucía, el caso Astapa y los ERE fraudulentos acumulan 160 imputados. Pero Madrid, Valencia y Baleares llevan la delantera con casos como Gürtel, Palma Arena, Nóos o Cooperación. Al mismo tiempo que los grandes casos ligados a altos cargos, como el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra o la cúpula del Partido Popular, siguen sumando páginas.

¿Qué quiere decir que la corrupción es una forma de gobierno? En nuestro país la corrupción fue consustancial a un modelo de desarrollo económico basado en burbujas inmobiliarias y pelotazos urbanísticos. Pregúntense por qué el ministro socialista Carlos Solchaga presumía de que España era uno de los países en los que era más fácil hacerse rico.

No era nada nuevo que en España las élites económicas crecieran al amparo de los favores de los poderes públicos. Tras el reparto del botín de la Guerra Civil, la clase terrateniente que suponía la base de apoyo crucial al franquismo se convirtió poco a poco en burguesía industrial sin abandonar nunca su naturaleza lumpen-oligárquica, como diría Íñigo Errejón. Tras la muerte de Franco, como sostienen Julián Casanova y Carlos Gil, nadie realmente importante que pretendiera labrarse un futuro político sostuvo por más tiempo el edificio autoritario. España asumió su papel en Europa; una economía basada en los servicios y el turismo y, finalmente, en el ladrillo.

Sobre ese modelo de sol y playa vinculado a las recalificaciones a golpe de maletín, los sobresueldos en sobres o el uso de las cajas de ahorro para el enriquecimiento, nació la corrupción que conocemos y que los ciudadanos identifican como uno de los grandes problemas de nuestro país.

LA CASTA

Desde que los periodistas italianos de *Il Corriere della Sera* Sergio Rizzo y Gian Antonio Stella popularizaron el término *casta* para referirse a las élites políticas y su codicia, contamos con un término que señala con enorme eficacia un modelo de gobernanza organizado al servicio de las élites económicas. La casta es tal porque no representa los intereses de la mayoría (ni tan siquiera los de sus votantes), sino los intereses económicos de una minoría de privilegiados que paga sus servicios mediante maletines (en los niveles municipales), sobres (como los famosos sobresueldos a los dirigentes del PP) o nombramientos en consejos de administración cuando se trata de los niveles más altos de la casta. La corrupción, por tanto, es un fenómeno determinante a la hora de conocer las condiciones de funcionamiento reales de los regímenes políticos.

Por eso, la corrupción no se entiende atendiendo a la honorabilidad individual de cada uno, sino que se presenta como característica consustancial a nuestro régimen político y a la casta política gobernante. Lo que ha pasado con la monarquía (el tráfico de favores e influencias que en su desmesura ha colocado al cuñado del nuevo rey en una posición inimaginable no hace tanto para cualquier miembro de la Casa Real) es la

mejor expresión de cómo ha funcionado la política en el país en el que era tan fácil hacerse rico, como presumía Solchaga.

El propio Rubalcaba reconocía en el congreso de los diputados, el 1 de agosto de 2013, que el sistema se estaba «berlusconizando». ¿Qué quiere decir que el sistema político se ha «berlusconizado»? Básicamente, que se trata de un sistema formalmente democrático y sustancialmente corrupto, un sistema en el que los oligarcas gozan de mucha impunidad, que presiona a los jueces y fiscales que persiguen los delitos cometidos por los poderosos y que alimenta un tipo de periodismo complaciente con el poder.

Lo que en Alemania ha dado en llamarse «puertas giratorias» entre la política y el mundo de los negocios (el hecho de que grandes fortunas entren como si nada en el juego de la vida política –Berlusconi– y, a la inversa, grandes dirigentes políticos que van a parar al mundo de los negocios luego de abandonar su cargo como premio a los servicios prestados –Schröder con Gazprom, Felipe González con Carlos Slim o Aznar con Rupert Murdoch–) es una realidad en España.

Cuando quien ha ejercido la función pública es fichado para sentarse en consejos de administración, hay que preguntarse: ¿para quién han gobernado?, ¿para los ciudadanos o para los ricos que les pagan sus sueldos? Resulta absolutamente vergonzoso que sea legal que, quienes han ejercido responsabilidades de gobierno relevantes, puedan acabar en los consejos de administración de empresas estratégicas. Cuando esto ocurre, podemos hablar de corrupción estructural.

El fenómeno de las «puertas giratorias» no es una cuestión de casos individuales ni de ética personal, sino la manifestación de un secuestro sistemático de la representación de la voluntad popular por parte del poder de las élites económicas –en nuestro país las oligarquías rentistas inmobiliarias, financieras y energéticas– que gobiernan sin pasar por las urnas. La corrupción es, por tanto, el sistema que permite que gobiernen quienes no se presentan a las elecciones.

¿Quién podía llenar de billetes los sobres para compensar «lo poco que cobraban» del erario público los altos cargos del PP? No es difícil de imaginar: los mismos que recibían a cambio concesiones de obras públicas que están en la base del endeudamiento de los ejecutivos central y autonómico. Así es como la corrupción se ha convertido en la forma

política mejor adaptada al mundo de las finanzas que, en la práctica, es el asalto cotidiano a los bolsillos de los ciudadanos.

La vinculación de los sectores público y privado en concesiones y privatizaciones, las redes de empresas que financian a partidos y «colocan» a militantes y altos cargos, es la realidad cotidiana de la política en nuestro país. Ya lo dijo textualmente en una conversación privada que acabó transcendiendo públicamente un relevante dirigente político del PP: «Yo estoy en política para forrarme».

A esa casta política que toma las decisiones y mantiene un escandaloso tren de vida no le afectan los recortes que sufren la mayor parte de los ciudadanos. Los miembros de esa casta tienen sanidad privada, llevan a sus hijos a carísimas escuelas privadas, tienen sueldos y condiciones laborales de privilegio (cuando trabajan) y sus hijos entran en las grandes empresas por enchufe.

La brecha que separa a representantes y representados crece con cada caso en el que un privilegiado que exige sacrificios a los ciudadanos es descubierto ganando dinero de forma ilegal o socialmente ilegítima.

¿La ley es igual para todos?

El anterior jefe del Estado, en su discurso de Navidad de 2012, dijo que la ley es igual para todos. Pero todo el mundo sabe que, en España, la única ley que opera es la del embudo; lo ancho para los de arriba y lo estrecho para los de abajo.

Si decíamos que la pérdida simultánea de apoyos de los dos grandes partidos es un síntoma de la crisis del régimen político español, lo mismo ocurre con el funcionamiento de la justicia. Nuestra magistratura, en especial sus instancias de gobierno, ha estado siempre dominada por sectores muy conservadores. Los ejemplos son innumerables pero, entre ellos, destaca la gran resistencia de la magistratura española en lo que a la rendición de cuentas de la dictadura respecta. Mientras los jueces argentinos pedían información sobre los responsables de crímenes franquistas, aquí se procesaba a un magistrado como Baltasar Garzón, que había ganado una enorme reputación incluso entre sectores conservadores con sus

espectaculares iniciativas judiciales contra el narcotráfico y contra ETA, por querer investigar los crímenes de nuestra dictadura.

Los casos de corrupción, por su parte, son a su vez la prueba de la «berlusconización» del régimen político español. Si en Italia el lema *«la legge è uguale per tutti»* que preside todos los tribunales es una irónica burla a la realidad, vista la legislación elaborada *ex profeso* para proteger a Berlusconi y a los suyos, así como las persecuciones a los jueces que han intentado hacer cumplir la ley, la situación en España no es muy diferente. Muchos ciudadanos tienen la impresión de que en España la protección institucional y legislativa a los corruptos se acerca más a la norma que a la excepción. Cualquiera que haga arder un cajero automático para denunciar la estafa del poder financiero sabe que puede pasar años de cárcel (últimamente, hasta por acciones simbólicas como sacar carritos del supermercado parece que se puede ir a la cárcel) y, sin embargo, es un verdadero acontecimiento ver a los responsables de tramas corruptas y estafas económicas y políticas pasar por un centro penitenciario.

Los ejemplos darían para escribir libros y libros. Señalaré solo algunos. Cuando los diputados tránsfugas Tamayo y Sáez entregaron el gobierno de la Comunidad de Madrid a Esperanza Aguirre, el gobierno de Aznar impidió al fiscal Fernández Bermejo investigar. En el caso Hacienda –que afectó al constructor y expresidente del FC Barcelona, Josep Lluís Núñez, y a la cúpula de Inspección de Hacienda–, el juicio duró doce años y hubo condenas de entre seis y trece años de cárcel, pero nadie entró en prisión. Al cóctel de protecciones se suman los indultos (recibidos por seis de los 33 condenados por prevaricación en 2012), una figura que, aunque existe en otros países, en el Estado no está sujeta a explicaciones por el Ejecutivo, saltándose el principio constitucional de igualdad y no arbitrariedad.

Las presiones políticas sobre los que investigan han sido denunciadas por los sindicatos de policía y por muchos jueces. El inspector José María Benito, que fue portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), dijo: «Estamos siempre en el ojo del huracán cuando investigamos casos de corrupción», y ponía ejemplos como el del borrador policial del caso Palau o el cese, por pérdida de confianza, de dos comisarios que investigaban la compra del ático en Marbella del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. El magistrado Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia, dijo que «los juzgados no están preparados para afrontar los

grandes casos de corrupción, hacen falta medios que habitualmente no son concedidos por las administraciones competentes» y denunció el fenómeno de los abogados de lujo expertos en dilatar los procesos, así como los escandalosamente cortos plazos de prescripción para los delitos de corrupción. Un ejemplo, para este magistrado, es el caso Fabra que, tras ocho años de instrucción, no contaba con fecha para la vista. Y aunque llegue a juicio –continúa Joaquim Bosch–, el «poco proporcionado» sistema de penas en la legislación española permite que salgan a la calle con una simple multa, mientras que pequeños robos pueden tener pena de prisión.

La impunidad es la palabra que mejor define ciertos delitos que se cometen en España. En nuestro país ha sido siempre excepcional ver a políticos o banqueros condenados en firme. Es más habitual verles pasar por los juzgados, pero casi siempre vemos cómo se libran de la condena o cómo el poder político les indulta. Vemos diariamente cómo la clase política exige sacrificios a sus ciudadanos mientras se van destapando casos de corrupción.

El caso Carromero volvió a poner sobre la mesa la justicia de dos velocidades. Tras cometer un delito común en Cuba, la militancia de Ángel Carromero en el partido del gobierno le brindó unos privilegios de los que nunca han gozado otros jóvenes detenidos en el extranjero por razones políticas (que no era el caso del dirigente juvenil conservador). El gobierno de nuestro país se movilizó para facilitar a Carromero los mejores abogados y la asistencia permanente del cónsul en persona. El Ministerio de Asuntos Exteriores (que se supone que representa a nuestro país y no al PP) negoció con las más altas instancias cubanas la repatriación de Carromero. Mientras estuvo en Cuba, su condición de preso preventivo fue la de un privilegiado; no estaba en una celda, sino en un apartamento con salón, televisión y cocina.

Recuerdo cuando, en septiembre de 2000, dos jóvenes españoles fueron detenidos en un país extranjero y pasaron varias semanas en prisión preventiva antes de ser puestos en libertad y regresar a España. Los detuvieron en Praga y yo estaba con ellos allí. Se llamaban Gaizka Azcona y Mikel Oliva y, a pesar de sus nombres, no eran vascos. Eran, como yo entonces, estudiantes universitarios madrileños y participaban, como yo, en las movilizaciones por una justicia global que se produjeron en la capital checa mientras se reunían el Banco Mundial y el Fondo Monetario

Internacional. No les detuvieron por un accidente con resultado de muerte, sino por protestar. Por aquellos dos jóvenes politizados no se movilizó el gobierno de José María Aznar. Gaizka me contó después cómo, ya detenido, varios agentes encapuchados le golpearon y se burlaron de él, y también que compartió celda con un ciudadano argelino (empeñado en que podía aprender italiano a fuerza de practicarlo con un español) que trató de enseñarle (a cambio de las clases de «italiano») a arrancar cuchillas de afeitar con los dientes por si había que defenderse de otros presos. A mis amigos no fue a verles el cónsul y, desde luego, las condiciones en las que el país presidido por Václav Havel les tuvo eran bastante peores que las de Carromero. Lo que cuento no es una anécdota; hay decenas de casos documentados de activistas políticos de nacionalidad española detenidos y maltratados (en México, en Marruecos, en Israel…) que no gozaron de las atenciones que nuestro gobierno prestó a Carromero solo por ser militante del PP.

Cuando Carromero por fin fue repatriado, apenas pasó por la cárcel. El mismo partido que presionó para excarcelar a su muchacho es el que defiende el más repugnante populismo punitivo exigiendo cada día (contra toda la doctrina penal democrática) el cumplimiento íntegro de penas.

Otro ejemplo de lo que venimos diciendo fue la resolución del Tribunal Supremo que estableció que la competencia para investigar las protestas de los indignados de junio de 2011 frente al Parlament de Catalunya correspondía, nada menos, que a la Audiencia Nacional. ¿Por qué? Pues, por lo visto, porque lo que hicieron los manifestantes fue actuar contra las altas instituciones del Estado, de las que forma parte la asamblea autonómica catalana. Para el Supremo, protestar ante una cámara de representantes tenía la misma consideración penal especial que los delitos de terrorismo, narcotráfico o falsificación de moneda, y ello justificaba su tratamiento en una jurisdicción especial. Cuando llegó la sentencia absolutoria (el 7 de julio de 2014), esta no gustó ni al gobierno ni a sus medios afines, que desataron una campaña contra el magistrado ponente de la misma, Ramón Sáez.

La existencia de este tribunal de excepción, heredero del Tribunal de Orden Público frente al que se sentaron cientos de demócratas, ha sido puesta en cuestión por numerosos juristas por considerarla contraria a la Constitución. De cualquier manera, que la Audiencia Nacional juzgue a los

indignados es una burla de proporciones mayúsculas en un país en el que la estafa a los ciudadanos se ha convertido en una práctica generalizada.

Rodrigo Rato arruinó Bankia; Iñaki Urdangarin, imputado por desviar dinero público y relacionado con testaferros de paraísos fiscales, sigue libre y viviendo como un duque (nunca mejor dicho); el magistrado Carlos Dívar, tras dejar la imagen del poder judicial a la altura de betún por los escandalosos gastos de sus viajes, dimitió y se marchó tranquilamente. Nuestros gobiernos han protegido y protegen el fraude fiscal, indultan banqueros y torturadores y aquí no pasa nada. En este contexto, a la indecencia generalizada entre las élites políticas y económicas de nuestro país, se añade esta indecencia judicial de usar a la Audiencia Nacional para perseguir a ciudadanos que protestaban contra unas instituciones que se han revelado incapaces de proveer lo que, por ley, están obligadas a proveer.

Uniformes

Dicen todos los estudios de opinión que la Policía y la Guardia Civil son instituciones muy valoradas por los ciudadanos. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las unidades antidisturbios. La televisión, en especial durante los últimos años, nos ha hecho ver a funcionarios públicos, muchas veces encapuchados y sin el número profesional visible, cometiendo delitos con total impunidad. Es absurdo centrar la indignación en los agentes, más allá de la condición moral de cada uno. Lo que hacen las Unidades de Intervención Policial (UIP) en última instancia es cumplir las órdenes políticas que reciben.

Creo que puede afirmarse que en España la gente, al tiempo que confía más en la policía que en otras instituciones del Estado, rechaza la actuación habitual de los antidisturbios (sean del cuerpo que sean) contra la gente que ejerce su derecho a protestar en una manifestación o en un desahucio.

El estilo de las unidades antidisturbios a la hora de relacionarse con las protestas es uno de los indicadores de la calidad democrática de un país. De hecho, aunque a veces caigan en una cierta hipocresía, los países europeos acostumbran a criticar las actuaciones policiales abusivas en países periféricos –o incluso en aspirantes a entrar en la Unión como Turquía–, dando a entender que tales abusos no se producen en Europa. España, por

desgracia, en este indicador ofrece muy poca calidad y la responsabilidad no es de los agentes antidisturbios que, independientemente de sus sentimientos, reciben órdenes, sino de los que dan esas órdenes.

Aunque el cine y las series de televisión nos han enseñado a admirar y a empatizar con los policías que combaten el crimen en condiciones precarias y que incluso tienen una posición privilegiada para apreciar las miserias del poder –*The Wire*, la serie de David Simon para la cadena HBO, es el mejor ejemplo de serie en el que la policía es el ojo a través del cual vemos la miseria social y la corrupción que provocan las formas económicas y políticas neoliberales–, las intervenciones de las unidades antidisturbios del Estado español (españolas, vascas o catalanas) no gozan de la simpatía de casi nadie. Gracias a que muchos periodistas se han convertido en observadores (y víctimas) directos de la violencia, contamos con millares de fotografías y vídeos que prueban la brutalidad injustificable de muchas actuaciones de los cuerpos antidisturbios. Durante el último gobierno del PSOE, la propia Elena Valenciano y otros cargos del partido llegaron a calificar de intolerables algunas intervenciones de los antidisturbios ordenadas por sus propios delegados del Gobierno.

Nuestro país tiene una historia particular en lo que a la policía se refiere. La República creó la Guardia de Asalto, una unidad policial antidisturbios específica, para evitar que el control del orden público, al menos en las ciudades, estuviera en manos de una Guardia Civil que, como han escrito Julián Casanova y Carlos Gil, no sabía mantener el orden sin disparar. El nuestro es el país en el que, tras la Transición, el PSOE no se atrevió a depurar unos cuerpos policiales repletos de torturadores para los que la impunidad nunca dejó de funcionar.

Un caso que prueba lo que digo es el de Emilio Hellín. Hellín era un ultraderechista miembro de Fuerza Nueva (el partido de Blas Piñar) que asesinó de dos disparos en la cabeza a la militante de izquierdas Yolanda González en 1980. Un reportaje de José María Irujo en *El País*, en febrero de 2013, nos hizo saber que Hellín impartía cursos en el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP), dependiente de la Secretaría de Estado para la Seguridad del Ministerio del Interior, y que dirige una empresa que asesora habitualmente a las fuerzas de seguridad del Estado.

Emilio Hellín, hermano de un guardia civil, fue detenido en casa de un inspector de policía, tras la confesión de uno de los participantes en el asesinato de Yolanda, el policía nacional Juan Carlos Rodas. Hellín fue condenado a 43 años de cárcel. Participó en una fuga de la cárcel de Alcalá de Henares, pero fue detenido y recluido en la prisión más segura del país, Herrera de la Mancha. Finalmente consiguió que le concedieran un permiso penitenciario y escapar con toda su familia a Paraguay, donde fue recibido como un héroe por el régimen de Stroessner. Allí empezó a trabajar formando a los servicios secretos policiales y militares de la dictadura paraguaya. Finalmente, tras una investigación periodística, fue extraditado a España en 1990. Tres años después ya disfrutaba de permisos y en 1996 se cambió el nombre en el registro civil.

En el momento del asesinato de Yolanda, dirigentes socialistas como Alfonso Guerra o Juan Barranco denunciaron las vinculaciones de los asesinos con las fuerzas de seguridad. Se sospechaba que, tras el asesinato, estaba el jefe de la Brigada Especial Operativa, el comisario Manuel Ballesteros, un torturador de la dictadura franquista que fue repescado por el siniestro ministro del Interior del PSOE José Barrionuevo. La necrológica que le dedicó *El País* en 2008 presenta a Ballesteros como un experto en la lucha antiterrorista que participó en las conversaciones con ETA en Argel.

¿Cómo es posible que un antiguo terrorista trabaje a sueldo de las fuerzas y cuerpos de seguridad que pagamos todos? Sencillamente, porque fue un terrorista al servicio del Estado que pone de manifiesto la verdad sobre nuestra Transición y sobre la materia humana que prosperó en nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad hasta la fecha. He hablado con muchos profesionales de la Policía y de la Guardia Civil que lamentan que la necesaria depuración democrática no se produjera, y que todavía haya que asistir a homenajes a los golpistas del 23-F en dependencias de la Guardia Civil, o al inaudito celo policial en la protección de uno de los más siniestros torturadores de la dictadura, Juan Antonio González Pacheco, alias *Billy el Niño,* cuando fue reclamado por la justicia argentina. Ni tan siquiera pudimos verle la cara.

Por desgracia, en nuestro país sigue siendo normal ver actuaciones policiales desproporcionadas contra gente que protesta, ya sean trabajadores, estudiantes o indignados en general. Resulta inconcebible, por el contrario, imaginarse a los antidisturbios cargando, por ejemplo, en

aquella manifestación en la que fue agredido el ministro José Bono. Si ya les fue mal a los policías que detuvieron a los agresores del ministro, imagínense qué habría ocurrido si llegan a cargar. Tampoco son verosímiles las cargas policiales en las manifestaciones ultracatólicas contra los derechos civiles de los homosexuales, y no es que sus participantes sean menos beligerantes que los que defienden, por ejemplo, los servicios públicos.

Nadie puede negar que la policía es imprescindible para construir una sociedad justa, y es seguro que la mayoría de los agentes se indigna al ver actuar a los antidisturbios, pero la impunidad en lo que respecta a las intervenciones policiales ha sido casi absoluta en nuestro país.

Sin embargo, lo verdaderamente relevante de los abusos policiales contra los derechos civiles es que revelan una forma de gobernar muy concreta que no se fundamenta en el consentimiento de los gobernados, sino en la inequívoca voluntad de infundirles miedo. Esta forma de gobernanza, independientemente de la arrogancia y autoritarismo de sus protagonistas políticos, no revela su fuerza sino su debilidad y es una manifestación más de la crisis de régimen.

Por eso es crucial apuntar sobre los responsables de que se use a la policía para intimidar a los ciudadanos y analizar los motivos de esa estrategia.

Eduardo Galeano escribía que el torturador es solo un funcionario; un burócrata armado que pierde su sueldo si no cumple eficazmente la tarea que le fue encomendada. Hannah Arendt, por su parte, analizando el juicio al teniente coronel alemán Adolf Eichmann, encargado de la organización de los transportes para el Holocausto durante el periodo nazi, condenado a la horca en Israel, decía que Eichmann no era un monstruo sanguinario a la altura de sus crímenes, sino solo un mediocre que se defendió en el juicio argumentando que solo cumplía órdenes. Zygmunt Bauman explicaba que lo verdaderamente peligroso del nazismo no era la crueldad de los nazis, sino su capacidad para organizar una administración estatal capaz de llevar a cabo, con la más fría eficacia, el proyecto político del Tercer Reich. Los policías son solo policías, y lo son en la Alemania nazi, en la República española, en la URSS, en los Estados Unidos, en Islandia y en China. Y en todo tiempo y lugar la policía está para cumplir órdenes.

Es cierto que en un Estado de Derecho los policías deberían estar comprometidos con la defensa de las libertades y tener una formación

especial en valores democráticos, pero eso no es lo fundamental; lo fundamental es que lo estén los que les dan las órdenes y eso es lo que no ocurre. Habrá casos de policías crueles o de extrema derecha encantados de cargar contra gente de izquierdas, pero también es indudable que hay una mayoría de agentes demócratas y sensibles que preferirían detener a banqueros antes que a la gente que protesta. Pero, insisto, esto no es lo importante.

Por eso hay que decir que los principales responsables de la brutalidad policial, los principales responsables de que funcionarios públicos actúen encapuchados y sin el número profesional visible, o de que se infiltren en organizaciones legales, o de que gocen de total impunidad si incumplen la ley, son las autoridades políticas que les mandan.

La patronal católica

Suele decirse que la Iglesia representa a la mayoría de los españoles, que, por lo visto, son católicos. Los datos apuntan claramente en otra dirección. Se está tratando de falsificar la realidad de la sociedad española en términos religiosos; una minoría ruidosa de ultraconservadores está tratando de ocultar a una mayoría silenciosa.

Una encuesta del CIS al conjunto de la población española mayor de 18 años, realizada en febrero del año 2008 (E2752), revelaba los siguientes datos. El porcentaje de católicos practicantes en España es del 27 por 100, mientras que en el grupo de edad de 18 a 24 años, el porcentaje se reduce al 9 por 100. Mientras el 23 por 100 de los jóvenes de entre 18 y 24 años declara no creer en Dios y el 85 por 100 no va nunca a misa, solo el 19 por 100 del total de los españoles considera la religión como un aspecto muy importante de su vida.

Para el 59 por 100 de los ciudadanos, la Iglesia católica les inspira poca o ninguna confianza, y este porcentaje crece al 74 por 100 entre los jóvenes de entre 18 y 24 años. Contrariamente a lo que predica la Iglesia, casi el 80 por 100 de los jóvenes considera aceptables las relaciones homosexuales.

Sin embargo, el 72 por 100 de los ciudadanos consideran que la Iglesia católica tiene mucha o bastante influencia en España, al tiempo que una amplia mayoría de los españoles consideran que la Iglesia no está dando

una respuesta adecuada a los problemas de la vida familiar (61 por 100), el problema del SIDA (62 por 100) y los problemas relacionados con la investigación científica (64 por 100), y está abiertamente en contra de las posiciones de la Iglesia sobre el divorcio (70 por 100), el aborto (60 por 100), el preservativo (76 por 100) y las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo (62 por 100).

¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando se dice que la Iglesia no goza de privilegios heredados del franquismo, se está tratando de falsificar la realidad de la sociedad española. En España una poderosísima patronal católica de ultraconservadores está tratando de ocultar a una mayoría silenciosa y ejerce como el más poderoso de los *lobbies* sobre el gobierno del Partido Popular.

Los dueños de la información

Se preguntaba Pascual Serrano en *Periodismo canalla* quién elige a los presidentes, si los ciudadanos o los medios de comunicación. En Italia, el magnate de los medios Silvio Berlusconi, que creció gracias al apoyo de Craxi –uno de los mayores corruptos en la historia política italiana, un honor nada fácil de conseguir–, formó su propio partido y llegó a presidente, llevando a cabo todas las reformas necesarias para evitar la cárcel. En EEUU, Rupert Murdoch, gracias a la cadena FOX, fue el creador de algunas figuras políticas republicanas como Sarah Palin o Rick Santorum. En el caso español, hemos visto cómo las administraciones del PP han convertido las televisiones públicas autonómicas (Telemadrid, Canal 9…), e incluso TVE, en verdaderos aparatos de propaganda de partido, al tiempo que la hiperconcentración en la propiedad de los medios de comunicación sigue haciendo que los periodistas tengan que trabajar con dos espadas de Damocles sobre sus cabezas: sus precarias condiciones económicas y el peligro latente de que la última palabra siempre la tienen los propietarios del medio.

En EEUU se podrá escribir contra el presidente demócrata o contra el presidente republicano, pero nunca se podrá publicar la noticia de que se haya descubierto una mosca en una botella de Coca-Cola. Así lo cuenta Pascual Serrano en su imprescindible *Traficantes de información,* un

estudio sobre quién ostenta la propiedad y el control de los medios que operan en España que solo se atrevió a publicar la Editorial Akal. Gracias al estudio de Pascual Serrano sabemos que el periódico *ABC,* Punto Radio y varias televisiones locales pertenecen a Vocento y, por lo tanto, al BBVA y a Repsol; sabemos también que Antena 3, La Sexta, *La Razón* y Onda Cero pertenecen al grupo Planeta y a Maurizio Carlotti, consejero delegado de Antena 3; sabemos también que La Caixa controla el grupo Z *(El Periódico de Cataluña, Interviú…),* que los Godó (franquistas o catalanistas según la época) son los dueños de *La Vanguardia;* que PRISA depende de Liberty y de Telefónica; que Telecinco y Cuatro son de Berlusconi; que la COPE es de los obispos y así sucesivamente.

No hay casi ningún medio de comunicación privado relevante que opere en España que no esté vinculado a grupos económicos poderosos y/o a familias adineradas con vinculaciones político-empresariales propias. Lo reconocía incluso el periódico *El País,* que llegó a asumir en un editorial que el periódico se debe a sus accionistas.

¿Qué quiere decir esto? Pues que la pluralidad y la libertad de expresión en los medios privados tienen dueños que, en primera o en última instancia, pueden hacer valer su poder. En todos los medios hay valiosísimos profesionales y no escasean los programas plurales, críticos e interesantes. Sin embargo no hay medio, programa ni periodista independiente que pudiera resistir la ofensiva de uno de los grandes jefes de los medios si no le protege otro de los grandes jefes. En estas condiciones, la libertad de expresión corre el riesgo permanente de ser asaltada por millonarios a los que no controla nadie.

La manipulación informativa, otra de las lacras que desprestigia a nuestra democracia, ha tenido en España ejemplos sonrojantes no solo en medios privados, sino incluso en los que están obligados por la ley a prestar un servicio público. El modelo Urdaci se ha convertido además en el paradigma para amordazar a los medios del Partido Popular, tanto cuando se trata de medios públicos como privados.

Pensemos en Intereconomía, una televisión autodefinida como de derechas, católica y que asume como *target* de mercado a gentes de elevado poder adquisitivo, a la que acudí con frecuencia a debatir (hasta que me dejaron de llamar tras solidarizarme en directo con la protesta de sus trabajadores). Como detalla Pascual Serrano, el presidente del Grupo

Intereconomía organizó la protección de los diputados tránsfugas Tamayo y Sáez en 2003, gracias a los cuales Esperanza Aguirre pudo ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Así lo contó el escolta del presidente de esta cadena, también a sueldo de Intereconomía, tras ser detenido por la Guardia Civil, al parecer por hacerse pasar por agente de los servicios secretos. ¿Saben quién se encargó de que Intereconomía tuviera una licencia en la televisión digital terrestre?: el gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Esperanza Aguirre.

Ante una situación así, la apuesta por la democracia en los medios debe tender a asegurar la máxima libertad de los periodistas a la hora de trabajar, una pluralidad no lastrada por la hiperconcentración de la propiedad y unos medios públicos concebidos como servicio obligado a garantizar el derecho a la información y a la cultura y no como aparato de propaganda de partido.

[1] Buena parte de lo señalado en este epígrafe lo conté en el epílogo del libro de Jacobo Rivero *Conversación con Pablo Iglesias. Podemos, de la calle a Bruselas.*

EPÍLOGO
GANAR LAS ELECCIONES NO ES GANAR EL PODER

En un artículo en la revista *Triunfo*, fechado el 22 de septiembre de 1973, once días después del golpe de Estado en Chile, Manuel Vázquez Montalbán recordaba que Salvador Allende había dicho a los impacientes jóvenes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR): «No hemos elegido el terreno. Lo hemos recibido. Tenemos el gobierno, pero no el poder».

La historia, con su cruel manera de dar la razón a los pesimistas de la inteligencia y quitársela a los optimistas de la voluntad, vio morir tanto a Allende como a Miguel Enríquez (secretario general y máximo dirigente del MIR en el momento del golpe militar). Ambos murieron armados, combatiendo, con la dignidad y la belleza de los héroes, pero casi sin posibilidades de ganar una vez el terreno de combate era el de la verdad de las armas. Allende siempre supo que ese terreno era imposible dadas las circunstancias chilenas; Enríquez quizá no tanto.

Al tiempo que escribo esto, todas las encuestas en nuestro país coinciden en que PODEMOS es ya la tercera fuerza política, con unos niveles de apoyo inéditos. Algunas nos sitúan como segunda fuerza en intención directa de voto, e incluso como primera en las franjas de edad más bajas. Es muy difícil saber qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses; en política pueden darse escenarios muy distintos. Es cierto que el PSOE quizá pueda remontar con el nuevo liderazgo de Pedro Sánchez; es cierto que los medios de comunicación privados, que no paran de hablar de nosotros y que invitan regularmente a nuestros portavoces, podrán vetarnos el día en que sus propietarios así lo decidan; es cierto que nosotros mismos podremos cometer los errores que hasta ahora no hemos cometido ante unas nuevas circunstancias muy complejas. El PP, por otra parte, ha demostrado una gran capacidad de resistencia electoral a pesar de la corrupción y los desastres de su gestión, y, desde el gobierno, siempre se tiene una gran capacidad de maniobra.

Sin embargo, no es menos cierto ni menos posible que nuestro crecimiento puede ir en aumento. Cada vez tenemos más afiliados, más círculos, más portavoces, más cuadros que se forman a una velocidad de vértigo, más personas con una enorme capacidad y preparación que se incorporan al trabajo de PODEMOS. Es cierto que de la Gran Asamblea Ciudadana de otoño de 2014, PODEMOS puede emerger como la fuerza política con más energía de nuestro país, con una dirección política joven y preparada y con los músculos organizativos a punto. Es cierto que la «renovación» del PSOE puede resultar finalmente un arreglo cosmético y que sus dirigentes sigan alineados con la socialdemocracia europea pro Gran Coalición que nos ha llevado al desastre en su alianza con los conservadores (la del SPD que apoya a Merkel, la del nuevo laborismo, la del Partido Socialista Francés que hace lo mismo que Sarkozy, la del PASOK griego entregado a la derecha y a la Troika, la de los demócratas de Renzi que pactan con Berlusconi…) y que la gente les siga viendo como lo que han sido hasta ahora: parte del problema. Es cierto que la situación económica avanza hacia el empobrecimiento y la precarización de cada vez más sectores sociales y hacia la conversión definitiva de nuestro país es una colonia de la Europa alemana; un país sin soberanía, con millones de pobres, con millones de parados, con millones de personas que trabajan en condiciones precarias, con unas clases medias empobrecidas cuya frustración es siempre motor de cambios. Es posible, en definitiva, que la indignación de los ciudadanos se transforme definitivamente en la energía del cambio político.

Sé que es difícil, pero es perfectamente posible que PODEMOS cuente en un futuro próximo con apoyos electorales suficientes para liderar el cambio. Sin embargo, es fundamental que entendamos que ganar unas elecciones no significa, ni de lejos, ganar el poder, por modestas que sean nuestras pretensiones.

El programa de PODEMOS carece de maximalismos. Hablar de reforma fiscal, de auditoría de la deuda, de control colectivo de los sectores estratégicos, de defensa y mejora de los servicios públicos, de recuperación de atribuciones soberanas y del tejido industrial, de políticas de empleo mediante la inversión, de favorecer el consumo y asegurar que las entidades financieras públicas protegerán a la pequeña y a la mediana empresa y a las familias, y un largo etcétera, es lo que cualquier formación socialdemócrata

de Europa occidental hubiera dicho hace 30 o 40 años. Pero hoy, medidas como estas suponen una amenaza para los poderes financieros internacionales (el Partido de Wall Street del que hemos hablado), para la Europa alemana y para la casta. Por eso, por modestos que sean nuestros objetivos, por amplio que sea el consenso en torno a ellos, no debemos perder de vista que nos enfrentamos a una minoría con mucho poder, con muy pocos escrúpulos y tremendamente temerosa de los resultados electorales cuando no ganan sus partidos. Los poderosos casi nunca aceptan el veredicto de las urnas cuando no les gusta.

La noche del 25 de mayo de 2014, cuando el Ministerio del Interior dio los resultados definitivos, en nuestro comando de campaña la emoción se desencadenó. Compañeros que se habían dejado la piel en unos meses de intenso trabajo con poquísimos medios, y casi sin recursos, lloraban a lágrima viva y se abrazaban. Me abracé con varios, con Sarah, con Luis, con Eduardo, con Germán, con Tomás, con Raquel, con tantos otros… y avancé hasta el despacho en el que había estado preparando la declaración de la noche con Íñigo, con Juan Carlos y con Carolina. Nos abrazamos los cuatro y en ese momento estuve a punto de romper a llorar yo también. Pero no. No era el momento. No podíamos permitir que la emoción nos rebasase. Habíamos conseguido 1,2 millones de votos, nada más. Eso podía significar que habíamos hecho una buena campaña, que habíamos tomado buenas decisiones, que habíamos sido capaces de resistir la presión y el fuego amigo y enemigo, que habíamos sabido hacer una hipótesis correcta de la situación, que habíamos movilizado la ilusión de mucha gente que, desde los círculos y desde más espacios, se había incorporado a un proceso y nos había empujado. Todo eso estaba muy bien, pero con 1,2 millones de votos no se cambia el país; cinco eurodiputados están muy bien, pero no sirven para obligar a Europa a virar en un sentido democrático. Las verdaderas dificultades y nuestra verdadera responsabilidad empezaban ahora.

Expliqué a mis compañeros que el tono de mi comparecencia ante los medios iba a ser aún más contenido de lo que habíamos planificado, y pedí a los compañeros que contactaran de inmediato con Syriza; quería hablar con Alexis Tsipras antes de hablar con nadie. Syriza acababa de ganar las elecciones en Grecia y yo tenía grabadas en la memoria unas declaraciones de Alexis que hizo poco antes de las últimas elecciones legislativas en Grecia, en junio de 2012, y en las que estuvieron a punto de ganar

obteniendo casi el 27 por 100 de los votos. Tsipras alertó entonces sobre el escenario que se encontrarían en caso de ganar; tendrían a todos los poderes financieros en su contra, a la mayoría de cancillerías europeas, a sus oligarquías locales e incluso a una parte del aparato del Estado. Me impresionó la lucidez de quien no se emborrachaba de optimismo y euforia y comprendía que las verdaderas dificultades empiezan cuando ganas las elecciones.

Tras aquella conversación nocturna (*«Five? This is very important»* me dijo, y recuerdo que me sonreí; nadie en la izquierda europea se esperaba nuestro resultado) nos reunimos en Bruselas y después nos invitó a visitar Atenas. Viajé con Pablo Bustinduy e Íñigo Errejón, y allí pudimos conversar largo y tendido con él y con otros compañeros de Syriza. No hablamos de éxitos electorales, sino de las enormes dificultades de gobernar con casi todo en contra. Hablamos mucho de las experiencias en América Latina, en especial de Ecuador, de los límites de los sistemas parlamentarios frente a los presidencialistas, de las torpezas de la izquierda más conservadora, del sectarismo, del peso de la forma Estado en Europa, del avance de la extrema derecha, de la arquitectura institucional de la Unión Europea, del euro, y del trabajo que nos esperaba en Bruselas y Estrasburgo. Hablamos de política con la sobriedad que requiere asumir que el terreno de juego en el que nos toca actuar en Europa no lo hemos elegido y no nos es favorable.

Creo que mi conciencia sobre las dificultades objetivas que imponen al cambio la política, la historia, la economía y los grupos de poder, ha quedado reflejada con claridad en las páginas de este libro, pero quiero que este epílogo, escrito ya bajo la responsabilidad derivada de la emergencia de PODEMOS, sirva para alertar a los que se emborrachan de optimismo.

En los próximos meses nos enfrentaremos a tareas dificilísimas que van mucho más allá de recibir apoyos electorales, de debatir y comunicar bien en televisión o del crecimiento e implantación de los círculos y las redes de colaboradores y simpatizantes. Todas ellas son tareas importantísimas, pero *disputar la democracia* implica trabajar en terrenos que, como decía Allende, no hemos decidido nosotros. Es ineludible vincular PODEMOS a los movimientos sociales y a la sociedad civil organizada, enfrentarnos a los sectarismos identitarios y a las miopías políticas de los que solo se sienten cómodos siendo una minoría, demostrar capacidad y solvencia para

gestionar y administrar lo público con políticas decididas al tiempo que viables, vincularnos a los profesionales mejor cualificados, escuchar y cooperar con los trabajadores de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad, del Derecho, de la Hacienda pública, de las administraciones locales, autonómicas y estatal, escuchar y cooperar con los profesionales de los medios de comunicación para que en el futuro nadie pueda establecer límites a la libertad de prensa y al derecho a recibir una información veraz, incorporar a los profesionales sanitarios y de la educación al proyecto de recuperación de los servicios públicos, trabajar con los mejores economistas, con los mejores científicos, etcétera, y, sobre todo, trabajar para construir alianzas en Europa y en el mundo, pues resulta extremadamente difícil que un gobierno del cambio pueda llevar a cabo su programa sin aliados exteriores. Es esencial, además, tener la habilidad necesaria para construir alianzas con grupos políticos y sociales comprometidos con el cambio o susceptibles de sumarse a él. En política, rara vez un actor puede permitirse la autosuficiencia; la arrogancia y la soberbia se pagan caras.

Ganar las elecciones no es, ni mucho menos, ganar el poder. Por eso, la de *disputar la democracia* es una tarea a la que están convocados todos aquellos comprometidos con el cambio y con que la decencia, que no es otra cosa que la aplicación efectiva de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se convierta en la guía de acción para un gobierno. No aspiramos hoy, por desgracia, a que se extinga el Estado, a que desaparezcan las cárceles ni a que la tierra sea el paraíso, pero sí a que todos los niños vayan limpios y alimentados a escuelas públicas, que serán por supuesto las mejores que existan, a que todos los mayores reciban una pensión y sean atendidos en los mejores hospitales sin que estos sean un privilegio de los ricos, a que cualquier persona, independientemente de quien sea hijo, pueda ir a la universidad, a que a nadie le corten la calefacción en invierno si no la puede pagar, a que ningún banco pueda dejar en la calle a una familia sin alternativa habitacional, a que todo el mundo pueda trabajar en condiciones dignas sin verse obligado a aceptar sueldos o condiciones vergonzosas, a que a nadie se le persiga por sus opiniones, a que producir información no sea un privilegio de multimillonarios, a que un país no tenga que arrodillarse ante especuladores extranjeros. En una palabra, a que la sociedad esté en condiciones de

proveer las bases materiales mínimas que hacen posible la dignidad y la felicidad.

Esos modestos objetivos, que hoy parecen tan radicales, representan la democracia.

APÉNDICES
DISCURSOS PARA EL FINAL DE UN RÉGIMEN

Discurso de Pablo Iglesias la noche electoral del 25 de mayo de 2014 (Madrid, Plaza del Museo Reina Sofía)

Hay magia; hay magia esta noche. Pareciera que la ilusión pudiera tocarse. Esa ilusión que siempre fue el motor de los cambios.

¡Bona nit! ¡Gabon! ¡Boas noites! ¡Buenas noches!

Pocos se esperaban un resultado como este para nosotros, pero permitidme que haga un llamamiento al duelo y a mantener la guardia alta. Los partidos de la casta han obtenido uno de los peores resultados de su historia. Pero debo decir que, por ahora, no hemos cumplido nuestro objetivo de superarles. Mañana seguirá habiendo seis millones de parados y seguirán desahuciando familias en nuestro país. Mañana se seguirán privatizando hospitales, seguirá habiendo personas trabajando en condiciones vergonzosas, seguirá habiendo jóvenes obligados a exiliarse, seguirá habiendo un cuarto de la ciudadanía en situación de pobreza, seguirá habiendo trabajadores migrantes a los que se trate como a animales, seguirá habiendo banqueros impunes, seguirá habiendo banqueros corruptos subiéndose a coches oficiales. Mañana, Merkel y los poderes financieros seguirán tomando decisiones contra nosotros y contra la gente.

Hemos avanzado mucho y hemos sorprendido a la casta, pero la tarea que se presenta ante nosotros a partir de mañana es enorme. Por eso quiero pedir a toda la gente comprometida con la defensa de la democracia que mantenga la guardia alta. PODEMOS no nació para desempeñar un papel testimonial, nacimos para ir a por todas y vamos a ir a por todas.

Puede que para muchos este resultado sea un éxito, pero quiero deciros que no nos conformamos. A partir de mañana nos pondremos a trabajar para celebrar, lo antes posible, que nuestro país tiene un gobierno decente y que hemos echado a la casta. Vamos a trabajar por la unión de los pueblos del sur de Europa, en defensa de la soberanía y de una Europa digna y democrática, una Europa en la que ningún poder financiero esté por delante de los intereses y la voluntad de la gente.

Cuando termine de dirigirme a vosotros conversaré con Alexis Tsipras. Le felicitaré por el resultado de Syriza en Grecia y le diré que los cinco eurodiputados de PODEMOS van a apoyarle para que sea el próximo presidente de la Comisión Europea. Son tiempos en los que a los europeos del sur nos toca decir que no queremos ser una colonia de Alemania ni de la Troika: los europeos del sur queremos soberanía, democracia y dignidad y vamos a defenderla en el Parlamento Europeo.

Quiero dar las gracias al mejor equipo de campaña que, casi sin recursos –pero con inteligencia, brillantez y mucho esfuerzo–, ha hecho un trabajo que será estudiado en las facultades de Ciencia Política. La media de edad del equipo no llega a los treinta años y os aseguro que los jóvenes responsables de esta campaña representan una nueva generación llamada a asumir por preparación y por derecho propio una enorme responsabilidad histórica en nuestro país. Quiero dar unas gracias emocionadas y cómplices a los más de cuatrocientos círculos PODEMOS: su entrega entusiasta y su capacidad de organización han sido capaces de movilizar la ilusión de miles de personas que han convertido a PODEMOS en una fuerza imparable. Quiero dar las gracias a los más de ciento cincuenta compañeros que se presentaron a las primarias ciudadanas más participadas en la historia de unas elecciones europeas, a los candidatos y candidatas y a los miles de apoderados cuyo despliegue de hoy ha sido una gran demostración de organización. Vaya mi reconocimiento, y mi admiración también, a las decenas de miles de voluntarios que han llevado el mensaje de PODEMOS a todas partes: todos ellos y ellas son la columna vertebral del ejército democrático con que contamos a partir de mañana para seguir nuestra tarea. Por último, quiero dar las gracias a las más de un millón de personas que hoy han votado nuestra candidatura: con ellas y ellos empieza el cambio en nuestro país. Hay muchas personas que nos han ayudado y cuyos nombres no puedo mencionar aquí, pero no me olvido de ninguno: vaya una sonrisa cómplice para ellos. Me vais a permitir que dé las gracias a mi familia: a mi padre y a mi madre se lo debo todo, como cualquier hijo, pero ellos me enseñaron lo que significa el compromiso con los más débiles. A mi compañera, Tania, quien no solo me ha regalado su amor, sino que me ha enseñado el valor del deber y la coherencia: gracias por ser así, compañera. No me quiero olvidar esta noche, como decía una letra memorable, de los que suben al andamio, de las madres con jornadas de veinte horas, de los

que friegan suelos, de los que sirven copas, de los parados, de los que trabajan en condiciones precarias, de los que han tenido que exiliarse para poder aspirar a una vida mejor, de los estudiantes que no pueden pagar la matrícula, de los trabajadores migrantes (lejos de sus familias y maltratados; no sobran ellos, ¡sobra la casta!). No me quiero olvidar de los abuelos a quienes congelan la pensión y consiguen mantener a toda su familia, de los que están en prisión por ser pobres, de los profesionales sanitarios que defienden la Sanidad Pública, de los autónomos que corren con todos los riesgos, de los que tuvieron que cerrar su negocio, de los que se parten la espalda para sacarlo adelante, de los maestros, de las madres y los padres de la marea verde, de los que se juegan la libertad para evitar que desahucien a sus vecinos, de los que luchan por lo de todos… Somos un pueblo y vamos a pelear por nuestro futuro. Quiero recordar también a nuestros abuelos y abuelas y a sus padres, quienes hace casi ochenta años se levantaron frente al horror y la barbarie dejándose la vida para intentar que nuestro país no cayera en las tinieblas del miedo: estamos orgullosos de ellos y ellas, y de su ejemplo.

Hoy, cuando el gobierno del PP hace leyes contra los derechos civiles y para reprimir a la gente, quiero reconocer a los miembros de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas que nos han apoyado: sé que muchos de ellos esperan el día en que reciban la orden de esposar a un banquero o a un corrupto; sé que muchos de ellos saben que defender la soberanía no es defender las empresas que cotizan en el IBEX 35 ni a los millonarios con pulseritas rojigualdas, sino defender la dignidad de un pueblo, defender el derecho a tener hospitales y escuelas públicos así como defender el derecho a decidir de la gente sobre todo aquello que afecte a su futuro y a su dignidad. ¡Contamos con vosotros! Pero sobre todo, quiero dar las gracias a las gentes de nuestro país, por la enorme lección de dignidad que han dado. No teníamos el dinero de los bancos, no teníamos grandes constructores, lo teníamos todo en contra, pero teníamos algo que no se compra con dinero: la ilusión de la gente que nos ha llevado en volandas demostrando que sí se puede.

Han sido ciento treinta días de esfuerzo y de ilusión en los que con la gente hemos demostrado que podemos. Pero esto es solo el comienzo de la recuperación democrática: hoy somos más fuertes que ayer para defender a las mayorías. Podemos, pero no podemos solos. Quiero decir humildemente

que nuestra mano está tendida a las fuerzas políticas y a los movimientos sociales y ciudadanos que han defendido en estos años la soberanía y los derechos sociales. Quiero felicitar a las fuerzas políticas del campo democrático que han participado en este proceso electoral y con las que nos encontraremos en el Parlamento Europeo defendiendo la soberanía y la dignidad de los pueblos del sur, por la enorme demostración de dignidad llevada a cabo por sus militantes. Nuestra mano sigue tendida.

Creo que hemos demostrado que, para recorrer el camino de la democracia y la dignidad, hay que movilizar la ilusión y, para ello, es necesario el protagonismo de la gente. PODEMOS quiere ser la palanca que haga posible una nueva mayoría que en la movilización y en las urnas termine de acabar con lo viejo, con la casta y abra la puerta a un futuro de dignidad para nuestro país: en esa tarea no sobra nadie. Toca devolver la palabra al pueblo y abrir un proceso constituyente para construir el futuro de nuestro país.

No puedo dejar de pensar esta noche en aquellas palabras de Salvador Allende: «La historia es nuestra y la hacen los pueblos».

DISCURSO DE PABLO IGLESIAS EN EL PARLAMENTO EUROPEO
(Bruselas, 30 de junio de 2014)

Es un honor dirigirme a ustedes para presentar mi candidatura a la presidencia de esta cámara. Este Parlamento está llamado a representar la soberanía de Europa y debemos, señorías, estar a la altura de lo que ello significa hoy.

El sueño de Europa ha sido sepultado muchas veces, pero siempre consiguió despertar de nuevo. Así sucedió hace casi setenta años: Europa volvió a despertar en la resistencia de sus pueblos contra el fascismo, en los supervivientes de los campos de exterminio, en quienes dieron su vida por la justicia y la libertad. Millares de compatriotas míos, que habían luchado defendiendo la democracia en España, participaron en esa lucha y en ese sueño de justicia. No se imaginan el orgullo que me produce como español que los primeros tanques que entraron a liberar París fueran guiados por combatientes españoles. Hoy, cuando la intolerancia y la xenofobia vuelven

a amenazarnos, quiero reivindicar la memoria europea del antifascismo y la de todos los pueblos amantes de la libertad y la democracia.

Señorías, lo mejor de nuestro continente y de nuestra historia común se forjó en las revoluciones que hicieron al pueblo sujeto de derechos, por encima de reyes, de dioses, de nobles y de grandes propietarios. El mejor patrimonio de Europa es la voluntad de sus ciudadanos de ser libres y no ser siervos de nadie. No ser siervos de nadie, señorías, eso es la democracia.

Por eso hoy debo decirles que los pueblos a los que debemos las libertades y los derechos sociales no lucharon por una Europa en la que sus gentes vivan en el miedo a la pobreza, a la exclusión, al desempleo o al desamparo frente a la enfermedad. La expropiación de la soberanía, y el sometimiento al gobierno de las élites financieras, amenazan el presente y el futuro de Europa, amenazan nuestra dignidad, amenazan la igualdad, la libertad y la fraternidad, amenazan nuestra vida en común. La creación de nuevas instancias supranacionales no tiene que pagarse al precio de incapacitar a la ciudadanía. Nuestros pueblos no son menores de edad, ni colonias de ningún fondo de inversiones, no conquistaron y defendieron su libertad para entregársela a una oligarquía financiera. No son términos abstractos, señorías, todos ustedes conocen bien el problema. Es escandalosa la facilidad con que se mueven aquí los *lobbies* al servicio de grandes corporaciones así como las puertas giratorias que convierten a los representantes de la ciudadanía en millonarios a sueldo de grandes empresas. Hay que decirlo alto y claro: esta manera de funcionar hurta la soberanía de los pueblos, atenta contra la democracia y convierte a los representantes políticos en casta.

Señorías, la democracia en Europa ha sido víctima de una deriva autoritaria. En la periferia europea la situación es trágica: nuestros países se han convertido casi en protectorados, en nuevas colonias, donde poderes que nadie ha elegido están destruyendo los derechos sociales y amenazando la cohesión social y política de nuestras sociedades.

De América Latina aprendimos que la deuda externa está diseñada para ser impagable, y que los países que más han crecido lo hicieron con una quita sustancial y una auditoría pública de su deuda. Todos conocen en esta cámara la deuda perdonada hace no tanto tiempo a Alemania. No es solo una cuestión de justicia, tiene que ver con la integración europea y con la democracia: la deuda es hoy un mecanismo de mando y saqueo de los

pueblos del sur. Eso es lo que está sucediendo en esos países que, con marcado racismo, algunos denominan PIGS. Pero supongo que son ustedes conscientes de que no hay Europa sin sus pueblos del sur, como no la hay sin sus pueblos del este, sometidos también a duras condiciones de la Troika, cuyo rumbo amenaza con destruir el proyecto europeo dejando un rastro de miseria, pobreza y violencia.

Pero hay otro camino. Hay alternativa a las políticas de empobrecimiento y al secuestro de la soberanía. Este Parlamento, en esta hora crítica para Europa, debe estar a la altura, debe demostrar sensibilidad y convertirse en el epicentro de una sacudida democrática en la Unión Europea, una sacudida que frene la deriva autoritaria de la Troika. Este Parlamento debe expresar la legitimidad democrática de origen que a todos nos reúne, la voz de los ciudadanos, y no los arreglos entre élites. El Parlamento Europeo no puede ser un premio de consolación, ni una jubilación dorada.

Señorías, hoy yo no me dirijo a una cámara de cinco, seis o siete grupos parlamentarios. Tampoco me dirijo a las maquinarias de partido. Me dirijo a ustedes, señoras y señores eurodiputados, porque ustedes tienen un contrato de responsabilidad política firmado con sus pueblos. Me dirijo a los demócratas y a sus conciencias. Nuestra primera fidelidad, a la que todas las demás deben supeditarse, es con los ciudadanos que nos han elegido. Ellos no están en los pasillos de este edificio, ni en los hoteles que rodean esta cámara. Pero recuerden: ellos son los soberanos y tarde o temprano pedirán cuentas de lo que se ha hecho en su nombre.

Me dirijo también, y muy especialmente, a mis colegas eurodiputados de los países del sur de Europa. Ustedes han visto las consecuencias reales que tienen las políticas impuestas por la Troika. Ustedes saben que las políticas de austeridad han fracasado: nuestros países son hoy más pobres, con economías destruidas, con sociedades heridas de injusticia e instituciones cuarteadas por la corrupción y el descrédito. Ustedes saben que es hora de ayudar a nuestros países a ponerse de nuevo en pie. Les pido que al menos hoy voten como griegos, como irlandeses, como portugueses, como italianos, como checos, como polacos, como rumanos, como españoles. No solo para que puedan mirar a la cara a su gente cuando vuelvan a casa, sino porque así estarán defendiendo Europa. Les pido su voto, consciente de que muchos de ustedes no comparten este secuestro de la democracia, sabiendo que muchos de ustedes están sinceramente comprometidos con el bienestar

de sus pueblos. Les pido el voto para frenar a la gran coalición que impone la austeridad y el totalitarismo financiero.

Quiero dirigir mis últimas palabras a la ciudadanía y a los pueblos de Europa que han salido a la calle en estos años para defender justicia social y la democracia. A los millones que habéis dicho basta en las plazas europeas, quiero deciros que sois el orgullo, el corazón democrático de Europa. Mantened alta la bandera de la dignidad. Los pueblos de Europa hemos pasado por peores situaciones y nos hemos sacudido a los déspotas. No sé si hoy podremos arrebatarle la presidencia de este Parlamento a la gran coalición, pero, si nos seguís empujando, os aseguro que venceremos.

El mañana es nuestro.

AGRADECIMIENTOS

La mañana en que escribí los agradecimientos de mi tesis doctoral, desperté con la resaca de la lectura de la noche anterior. Había estado releyendo cuentos de Borges, y aquel sobre un inmortal me sirvió de arranque para hacer los reconocimientos que corresponden a un trabajo de investigación.

Ahora me toca escribir los agradecimientos de este libro en medio de la resaca tras mi viaje a Israel y Palestina con una delegación de nuestro grupo en el Parlamento Europeo, el GUE-NGL, y tras haber devorado varios libros de judíos antisionistas como Shlomo Sand y Norman Finkelstein. Mis declaraciones públicas durante –y después– de aquel viaje, criticando el sionismo y la política criminal del Estado de Israel contra el pueblo palestino me han valido, según he podido saber de fuentes diplomáticas españolas, que Israel me prohíba el acceso a Gaza desde el territorio que ocupan.

Durante el viaje convine con algunos compañeros en la necesidad de no poner fácil a Israel que esgrimiera, como suele hacer, el falso argumento del antisemitismo para tratar de desacreditar nuestras críticas. La fórmula que encontramos más eficaz y simbólica de conseguirlo fue hacer un gesto de respeto hacia la religión judía visitando el muro de las lamentaciones en Jerusalén. El gesto ofendió a algunos compañeros antisionistas, como Liniana Cordova-Kaczerginski, cofundadora de la red internacional de judíos antisionistas o a Santi Alba Rico. Ambos me recordaban con razón que Jerusalén forma parte de los territorios ocupados y Santiago me sugería que el gesto hubiera sido mejor hacerlo en una sinagoga cualquiera. Quizás ambos tengan razón, pero debo confesar que había también un motivo íntimo para ir al muro de las lamentaciones que tiene que ver con algunas intimidades de este libro. Mi abuelo Manuel, al que apenas conocí pues murió siendo yo muy niño, siempre quiso visitar el muro de las lamentaciones. Mi abuelo era socialista desde su militancia estudiantil, cumplió su obligación en nuestra guerra combatiendo y presidiendo un tribunal militar de la República, lo que le valió una condena a muerte conmutada finalmente por una pena de 30 años de prisión, de los que tuvo que cumplir cinco y sufrir la atenta mirada de la dictadura muchos más. Mi

abuelo militó en el débil Partido Socialista de la clandestinidad y murió en 1986 orgulloso de sus ideales, al tiempo que despreciando a los nuevos jóvenes dirigentes de su partido. Aquel hombre era un antifascista, un demócrata español que, sin embargo, nunca dejó de ser católico aunque estuviera lejos de simpatizar con la jerarquía católica. Aquel hombre que amaba celebrar la Navidad con su familia escuchando villancicos gitanos y leyendo en alto fragmentos de la Biblia, siempre soñó con visitar Jerusalén y el muro de las lamentaciones. Tenía cierta simpatía por los judíos, porque todos los que conoció combatieron con él contra el fascismo en España, y cierta antipatía por los musulmanes, porque los identificaba injustamente con el ejército de Franco. No tenía razón mi abuelo y de haberle tratado como adulto habríamos discutido mucho, pero mi abuelo era, más que cualquier otra cosa, un demócrata español, socialista y creyente.

Yo no soy católico ni creyente, pero mi pesimista convicción de que, tras la muerte, no hay absolutamente nada que prolongue nuestra identidad, no me hace dejar de ser sensible ante las emociones de los símbolos y los rituales. En el control de entrada al muro de las lamentaciones, dos soldados israelíes me quitaron un cartel pro-palestino que llevaba en la mochila, pero finalmente me dejaron pasar. Y allí estaba yo, frente al muro que mi abuelo siempre quiso y no pudo nunca visitar. Me explicaron que, si me acercaba al muro debía cubrirme con la kipah y que era costumbre dejar un papel doblado con algo escrito entre las piedras. Pensé en mi abuelo y también en mis abuelas que perdieron una guerra y mi nota, la nota de un ateo en el muro de las lamentaciones, estuvo dedicada a su memoria.

Mi primer agradecimiento en este libro es para mis abuelos y mis padres, que me enseñaron el significado biográfico de la lucha por la democracia y por la decencia, por encima de cualquier creencia religiosa o convicción política.

Todo trabajo de reflexión es en el fondo una obra colectiva derivada de un diálogo, aunque solo yo sea el responsable de lo que se dice aquí. De entre las personas que han contribuido a ese diálogo y a configurar mi pensamiento político, destaca en primer lugar Tania Sánchez, mi compañera, cuya experiencia y lucidez son una motivación permanente. Tania, además, me dio el título de este libro. A mi padre, Javier Iglesias, debo agradecerle cuanto sé de historia y que me facilitara buena parte de la bibliografía que he usado en el segundo capítulo. De entre los compañeros

más cercanos con los que llevo debatiendo y trabajando años destacan, como no podía ser de otra forma, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa, Luis Alegre, Ariel Jerez, Jorge Moruno y Manolo Monereo, aunque a esta lista se podrían añadir muchos otros con los que he tenido conversaciones y debates que de alguna forma aparecen aquí, como Jaume Asens, Yolanda Díaz, Ramón Luque o Rafa Mayoral, entre otros muchos. Aunque podamos tener muchos desacuerdos, sería un cínico si no diera las gracias a Miguel Urbán, no solo como uno de los artífices iniciales de PODEMOS, sino por ser un ejemplo de honestidad y entrega desinteresada a sus ideas y a los suyos. Estos agradecimientos no terminarían nunca si tuviera que nombrar a todos los compañeros y amigos de PODEMOS (los jóvenes y los no tan jóvenes), de la facultad (alumnos y profesores), de *La Tuerka,* de *Fort Apache,* del diario *Público,* a militantes de diferentes organizaciones políticas y sociales, a amigos periodistas, a los nuevos compañeros del GUE-NGL, y a tantos otros a los que tanto debo. Espero que todos se den por agradecidos.

Valle del Tiétar, septiembre de 2014

PINCHE AQUÍ

Akal Pensamiento crítico

Akal Pensamiento crítico

"Una colección que radiografía la crisis de hegemonía neoliberal"



Document Outline